

MANUALES BARREIRO

PUBLICADOS BAJO LA DIRECCIÓN DE

BENJAMÍN FERNÁNDEZ Y MEDINA

**PENSIONES,
JUBILACIONES
Y RETIROS.**

LEYES Y DISPOSICIONES VIGENTES

COLECCIONADAS Y ANOTADAS

MONTEVIDEO

A. BARREIRO Y RAMOS, EDITOR

LIBRERÍA NACIONAL

1905

PENSIONES, JUBILACIONES Y RETIROS

MANUALES BARREIRO

Pensiones, jubilaciones y retiros

**Leyes y disposiciones vigentes,
coleccionadas y anotadas**

por

BENJAMÍN FERNÁNDEZ Y MEDINA

MONTEVIDEO

A. BARREIRO Y RAMOS, EDITOR

LIBRERÍA NACIONAL

1905

TALLERES GRÁFICOS DE A. BARREIRO Y RAMOS. — MONTEVIDEO

CALLE CERRO, NÚMERO 61

PRÓLOGO

La colección de MANUALES BARREIRO

*Con este volumen relativo á las PENSIONES, JUBILACIONES Y RETIROS, iniciamos la publicación de una serie de **Manuales** destinada á ofrecer en esa forma compendiada y cómoda por el tamaño y disposición, que se va generalizando en todos los países, obras de interés y utilidad, elegidas con un criterio amplio; pero teniendo en cuenta preferentemente el carácter local.*

No pretendemos, en efecto, competir con colecciones de Manuales como las italianas de Hoepli y Barbera y las españolas de Soler y Gili, para citar solamente las que más circulan entre nosotros. No pretendemos publicar obras de vulgarización científica, industrial, literaria, etc., de carácter general; sino dar en forma de manuales obras que comprendiendo los temas más variados, tengan siempre una relación especial con los países sudamericanos y en particular con el Uruguay.

Nos proponemos publicar manuales relativos á la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DERECHO Y JURISPRUDENCIA, FILOSOFÍA, ECONOMÍA POLÍTICA, LITERATURA, AGRICUL-

TURA, GANADERÍA É INDUSTRIAS DERIVADAS Ó AFINES, GEOGRAFÍA, HISTORIA, PEDAGOGÍA, HISTORIA NATURAL, INGENIERÍA, MATEMÁTICAS, FÍSICA, MEDICINA É HIGIENE, ARTE MILITAR, TECNOLOGÍA É INDUSTRIAS DIVERSAS, ETC; *observando en cuanto sea posible el criterio á que nos referimos en el párrafo anterior.*

Para realizar esta iniciativa con más seguridad, hemos asociado á ella, confiándole la dirección de la serie de Manuales, al ilustrado y laborioso escritor don Benjamín Fernández y Medina, y su participación es una garantía de éxito para esta empresa.

Confiamos ahora, que no nos falte el concurso del público, y que los Manuales difundiendo entre todas las clases, principalmente en las populares y en la juventud estudiosa, sean un eficaz elemento de cultura.

EL PRIMER MANUAL

Hemos elegido para inaugurar la serie, este volumen, que se refiere á PENSIONES, JUBILACIONES Y RETIRO, porque la sanción reciente de la ley de Jubilaciones y pensiones civiles, ha venido á dar actualidad al asunto, y, porque era necesario reunir todas las leyes y disposiciones relativas y facilitar su consulta y aplicación con notas y concordancias oportunas.

Como se verá, el Manual contiene todo lo relativo á RETIRO Y PENSIONES MILITARES; INVÁLIDOS; VIUDAS Y MENORES; DESEMPEÑO DE EMPLEOS CIVILES POR PENSIONISTAS MILITARES; OPCIÓN Á PREMIOS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA; PENSIONES Á LOS TREINTA Y TRES Y SUS DES-

CENDIENTES; JUSTIFICACIÓN Y RESIDENCIA DE PENSIONISTAS MILITARES; SERVICIOS DE LA GUERRA GRANDE; PREMIO CONSTANCIA; INTERVENTOR PARA EL DESPACHO DE CÉDULAS Y PENSIONES MILITARES; REFORMA MILITAR; PENSIONES DE INVALIDEZ Á POLICIANOS Y BOMBEROS; JUBILACIONES Y PENSIONES ESCOLARES; RETIRO, JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS CIVILES; DESCUENTO SOBRE SUELDOS Y PENSIONES; EXCEPCIÓN PARA LAS PENSIONES VITALICIAS; EMBARGOS Y RETENCIONES DE SUELDOS Y PENSIONES; ACUMULACIÓN DE SUELDOS; LICENCIAS Y SUSPENSIONES DE EMPLEADOS; JUSTIFICACIÓN Y RESIDENCIA DE LOS PENSIONISTAS; *y todas las aclaraciones, interpretaciones, reformas y complementaciones en vigencia, que sirven para la mejor inteligencia y aplicación de las diferentes leyes y resoluciones.*

El autor de la colección desistió de ponerle una introducción en que pensó al principio, estudiando la institución de las jubilaciones y pensiones y la historia de su legislación en el país desde la dominación española, por considerar que no tenía objeto práctico.

EL EDITOR.

Montevideo, 25 de mayo de 1905.

RETIROS Y PENSIONES MILITARES

EXTRACTO DEL CÓDIGO MILITAR

CAPÍTULO III

RETIROS

477. El sueldo de retiro de los Jefes y Oficiales se computará señalándoles tantas cuarentavas partes de su sueldo respectivo cuantos años de servicios calificados (1).

478. El mínimum del retiro, por voluntad ó por edad, lo obtendrán los Jefes y Oficiales del Ejército á los quince años cumplidos de servicio, y el máximium á los cuarenta años.

479. Los que no hubieren cumplido quince años de ser-

(1) Se entiende por servicios calificados el tiempo de servicio comprobado de acuerdo con las disposiciones del Código que son éstas:

«Art. 428. La antigüedad de un oficial debe empezar á contarse desde el día que entró á servir, ya en clase de alumno de la Escuela Militar, ó de soldado del ejército.

Art. 430. Los oficiales que hayan obtenido el grado antes que el empleo que entran á ejercer, gozarán la antigüedad de la fecha de aquel.

Art. 431. Será de abono para la antigüedad de los oficiales prisioneros de guerra, el tiempo que permanezcan en poder del enemigo, sin tomar servicio en él.

Tampoco se rebajará de la antigüedad de los oficiales el tiempo pasado en licencia.

Art. 432. Los oficiales que obtuvieren su separación absoluta y los que sean privados de su empleo, en virtud de sentencia legalmente pronunciada, y volviesen al servicio militar, su antigüedad sólo principiará á contarse desde la fecha que ingresen nuevamente en el ejército».

Véase además lo dispuesto en los artículos 489, 490, 491, 501 y 601.

vicio, no tendrán derecho á sueldo, salvo lo dispuesto en el artículo 471 (1).

480. El retiro se concede á voluntad al Jefe ú Oficial que lo solicite, y es obligatorio por inutilidad en el servicio, procedente de enfermedad ó heridas recibidas, ó por razón de edad (2).

481. Las edades á que se expedirá el retiro forzoso son, para los Tenientes Generales, setenta y cinco años, para los Coroneles setenta años, para los Tenientes Coroneles, sesenta y cinco años, para los Sargentos Mayores, sesenta años, para los Capitanes, cincuenta y seis años y los Tenientes y Sub-Tenientes, cincuenta y cuatro años.

482. Los que se retiren por inutilidad en el servicio y que no los hayan cumplido quince años, tendrán derecho á la mitad del sueldo de su clase.

483. Cuando la imposibilidad naciere de causas extrañas á las fatigas del servicio, el Oficial que no tuviere quince años de servicio, no tendrá opción á sueldo de retiro, recibiendo como única compensación cuatro pagos íntegros de su sueldo.

484. Los Jefes y Oficiales que se inutilizaren en función de guerra, tendrán opción á las dos terceras partes de su sueldo, si no les correspondiera más por sus años de servicios.

485. Los que hayan perdido totalmente la vista ó un miembro en acción de guerra, ó en funciones del servicio, disfrutarán, por retiro, todo el sueldo de su empleo, cualquiera que sea el tiempo que lleven de servicio.

486. Los Jefes y Oficiales de la Guardia Nacional que se inutilizaren en función del servicio ó en acción de guerra, gozarán del sueldo de retiro que establecen los artículos 484 y 485.

487. El Cuerpo de Sanidad Militar, los empleados de

(1) «Art. 471. Los jefes y oficiales que, por no ser necesarios para el servicio, el Gobierno designare para retiro y que no hayan cumplido quince años en el servicio, tendrán derecho al sueldo minimum de retiro.»

(2) El Poder Ejecutivo tiene facultad tambien de designar para retiro al Jefe ú Oficial que se excuse del desempeño de la Comisión que se le cometa, con ó sin sueldo, según corresponda. (Código Militar, Art. 469).

Los jefes y oficiales colocados en la carrera civil (con excepción de las Policías) serán dados de baja del Ejército, si desean continuar en aquellos, previa declaración que harán al Superior Gobierno por conducto de la Inspección General de Armas; contándoseles, en el caso de jubilación, los años que hubiesen servido en el Ejército. (Art. 473).

maestranza y demás asimilados tendrán opción al sueldo de retiro de conformidad con lo establecido en este título (1).

488. La concesión de retiro absoluto es irrevocable, y el Oficial que la obtenga, cualquiera que sea su graduación, no podrá volver en ningún tiempo al servicio activo de las armas, salvo el caso de guerra nacional, y en el empleo que antes tenía, con excepción de los retirados por su edad, ó inválidos.

489. Los Jefes y Oficiales retirados que, en el caso previsto en el artículo anterior, sean llamados nuevamente al servicio, no tendrán derecho á otros beneficios que al sueldo que les corresponda por su clase, mientras permanezcan en él, salvo en los casos previstos en los artículos 484 y 485.

490. Los Jefes y Oficiales retirados que sean llamados al servicio en época de guerra nacional y que, terminada ésta, deseen continuar en él, y el Gobierno se lo conceda, perderán el derecho al sueldo de retiro que gozaban, y para optar á un nuevo retiro se les contará su antigüedad desde la fecha de su último ingreso en el Ejército.

491. Los Jefes y Oficiales á que se refiere el artículo precedente, tendrán derecho al nuevo retiro en el empleo que ejerzan, á los diez años cumplidos de su nuevo servicio.

492. Los Jefes y Oficiales que entren al gozo de retiro, tienen el deber de justificar su existencia mensualmente los que residan en el territorio de la República, y cada tres meses los que residan en el extranjero, haciéndolo éstos por medio de los Agentes Consulares de la República, acredita-

(1) Según el Código, los empleados á que se refiere esta disposición se consideran revestidos del carácter anexo á los grados siguientes:

1.º El Comisario general, el Cirujano Mayor del ejército y el primer Capellán, serán considerados como coroneles.

2.º El Comisario de guerra y los primeros cirujanos, como tenientes coroneles.

3.º Los segundos cirujanos como sargentos mayores.

4.º Los practicantes de cirujano, con tres años de estudio y los farmacéuticos, como capitanes.

5.º Los demás empleados del Cuerpo de Sanidad ú hospitales, serán considerados respectivamente, según sus funciones, desde teniente inclusive, hasta la clase de tropa;

6.º El guarda-almacén de maestranza será considerado como teniente 1.º, los maestros mayores de montajes, armería y mistos, como tenientes segundos; los guarda-almacenes de los cuerpos, oficiales de libros y fieles recibidores de útiles, como subtenientes, y los demás empleados de maestranza, en la clase de tropa. (Art. 68 del Código Militar).

Los maestros mayores de las bandas de música, serán considerados como tenientes primeros, y los clarines, tambores y músicos, como cabos segundos. (Art. 69 del Código Militar).

dos en los puntos de su residencia, y en defecto de éstos, por un certificado de la autoridad de la localidad donde residen (1).

Los Jefes y Oficiales retirados con sueldo, que cambien de residencia al extranjero, darán aviso á la Inspección General de Armas (2).

493. El goce de retiro, en caso de fallecimiento del retirado, pasa íntegro á su viuda, ó en defecto de ésta, á sus hijos menores de veintiún años, hijas solteras y á falta de éstos, madre viuda del fallecido.

494. Los Jefes y Oficiales retirados con sueldo, no tienen derecho al uso del uniforme.

495. El Gobierno podrá, si lo juzga conveniente, reformar los Jefes y Oficiales que se retiren del servicio, entregándoles por una sola vez una cantidad en efectivo, que, al uno por ciento de interés, represente la renta que le corresponde al retirado.

496. Los Jefes y Oficiales reformados, en el caso de guerra nacional, servirán, mientras ésta dure, en los empleos que tenían, y no tendrán derecho á retiro sino por inutilidad en el servicio ó acción de guerra.

497. Los Jefes y Oficiales reformados no tienen derecho á uso de uniforme.

CAPÍTULO IV

INVÁLIDOS

498. Tendrán opción al retiro de inválidos y al sueldo de tales, los que estén comprendidos en la ley de la materia (3).

499. Los individuos de tropa que se hubieren invalidado por la pérdida de algún miembro en acción de guerra, tendrán opción á gozar en su retiro del mismo sueldo que gozaban en servicio activo.

(1) Véase la resolución de abril 15 de 1901 y sus aclaraciones.

(2) Sustituido por el Estado Mayor del Ejército.

(3) Véase las leyes del 12 de marzo de 1829; 23 de noviembre de 1829, 17 de julio de 1834, y 10 de julio de 1855.

CAPÍTULO V

DE LA COMISIÓN CALIFICADORA

500. Los servicios de los señores Jefes y Oficiales á quienes el Gobierno llamare á retiro ó que lo solicitaren, serán clasificados por una Comisión nombrada al efecto.

La Comisión calificadora se compondrá de los miembros siguientes:

El Inspector General del Ejército (1), como Presidente; cuatro Generales ó Coroneles, vocales, y un Secretario.

501. Para calificar el tiempo de servicio de un Jefe ú Oficial, llamado por el Gobierno á retiro, ó que voluntariamente lo solicite, la Comisión deberá tener á la vista los despachos originales ó copia autorizada de la orden general del primero y último empleo que se le haya conferido al interesado, y además su hoja de servicios completamente legalizada, ó en su defecto, certificaciones legales que hagan las veces de ella.

Si el Jefe ú Oficial hubiere principiado su carrera militar en la clase de tropa, además de los documentos enumerados deberá tenerse á la vista la primera revista del interesado.

502. Cuando un Jefe ú Oficial solicitare su retiro absoluto ó sea llamado á él, deberá presentar á la Comisión su solicitud acompañada de los mismos documentos que expresa el artículo anterior.

503. Sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos anteriores, no podrá la Comisión proceder á ninguna calificación de servicios.

504. La Comisión es responsable de toda infracción ú omisión de las disposiciones de este título en que incurriere al calificar los servicios de cualquier Jefe ú Oficial.

.....

(1) Sustituido por el Jefe del Estado Mayor.

512. El premio de constancia de primera clase se concederá á los sargentos, cabos y soldados que, no habiendo recibido la cuota, como contratado, que trata el artículo 11, al sentar plaza, hayan servido con buena conducta durante nueve años.

El de segunda clase, á los que hayan servido catorce años en las mismas condiciones, el de tercera á los diez y nueve años, y el de la cuarta á los veinticuatro años.

513. Los sargentos, cabos y soldados que hubieren recibido la paga de contrata establecida en el artículo 11, no tendrán opción á los premios de que habla el artículo anterior, mientras sirvan como tales.

514. El tiempo servido en clase de tambor, corneta ó músico, será de abono para los premios de constancia.

515. Los sargentos, cabos y soldados voluntarios que, después de licenciados absolutamente, fueren admitidos á

pos, y con arreglo al artículo 521 del Código Militar tengan derecho al «Premio de Constancia», deberán justificarle ante la Inspección General de Armas, (*) quien les expedirá el correspondiente certificado en la forma establecida en el artículo anterior.

Art. 5.º — Á los que tengan derecho al «Premio de Constancia» de 4.ª clase, se les expedirá y entregará por el Ministerio de Guerra y Marina la correspondiente cédula, la que deberá ser anotada en la Contaduría General, Inspección General de Armas, (**) y Mesa de revistas.

Art. 6.º — Los Jefes de cuerpo donde existan sargentos, cabos y soldados con derecho al «Premio de Constancia», los incluirán á éstos en las listas de Revista y Pret, determinando la clase de premio que les corresponde; así como también, mensualmente, pasarán á la Inspección General de Armas, (***) para que ésta á su vez la pase á la mesa de revista una lista de los que hayan revistado en sus respectivos cuerpos, determinando la clase de premio que les corresponde.

Art. 7.º — Cuando los comprendidos en los premios de 1.ª, 2.ª y 3.ª clase obtengan el derecho al inmediato mayor, los jefes de cuerpo lo comunicarán á la Inspección General de Armas (****) para que ésta recabe venia del Ministerio de Guerra y Marina para hacer la correspondiente anotación en la mesa de revista y se

(*) Sustituida por el Estado Mayor del Ejército.

(**) » » » » » » »

(***) » » » » » » »

(****) » » » » » » »

servir de nuevo en cualquiera Cuerpo del Ejército, tendrán derecho al abono del tiempo que antes hayan servido.

516. Para que tenga efecto este abono de tiempo, es menester que el interesado acredite, por la copia autorizada de su filiación ó por un certificado de la Inspección General de Armas, ⁽¹⁾ que durante su último empeño satisfizo las condiciones requeridas para optar á los premios de constancia.

517. Los individuos de tropa que, habiendo desertado durante el tiempo de su empeño, contrajeren uno nuevo, podrán optar á los premios de constancia desde la fecha de este último empeño, siempre que llenen los requisitos exigidos por este capítulo, y sin que le sean de abono los años servidos anteriormente.

El tiempo de servicio impuesto como pena, no se computará para optar á los premios de constancia.

518. Si un sargento ó cabo, que haya obtenido premio de constancia, fuere rebajado de su clase, no perderá por esta circunstancia el derecho á él.

519. La misma regla se observará respecto de los Cabos

comunique á la Contaduría General del Estado.— Cuando se trate del premio de 4.^a clase, se procederá en la misma forma, pero expidiéndose al premiado la cédula á que se refiere el artículo 5.^o.

Art. 8.^o— La Mesa de Revista pasará mensualmente á las oficinas respectivas dos listas de revista y pret de los sargentos, cabos y soldados con derecho al « Premio de Constancia »; una de los existentes en el Cuerpo, y otra de los comprendidos en el artículo 521 del Código Militar.

Art. 9.^o— El « Premio de Constancia » de los que no presten servicio en los cuerpos, será abonado mensualmente por el habilitado del Cuerpo de Inválidos.

Art. 10.— El « Premio de Constancia en el servicio », se abonará íntegro, quedando exonerado del pago de la comisión de habilitado y de cualquier otro descuento.

Art. 11.— Comuníquese, etc.

HERRERA Y OBES.

PEDRO CALLORDA.

Véase además el decreto del 28 de septiembre de 1899, sobre intervención de pensión, cédula y jubilaciones de militares.

(1) Sustituída por el Estado Mayor del Ejército.

ó Sargentos que, habiendo obtenido su baja, volvieren al servicio en una clase inferior á la que tenían al tiempo de retirarse.

520. El goce del cuarto premio exime al premiado del servicio mecánico de su compañía.

521. El premiado que se retire del servicio con buena baja ó á inválidos, continuará con el goce del premio que disfrutase al tiempo de retirarse.

522. El premiado que ascendiere á Oficial, no tiene derecho á continuar gozando de su premio.

Tampoco lo tiene el premiado á quien se condenare por cualquier delito.

.....

TÍTULO XI

DEL MONTEPÍO

CAPÍTULO I

DE LAS PERSONAS CONTRIBUYENTES AL MONTEPÍO MILITAR

583. El montepío militar es una institución piadosa que tiene por objeto el socorro de las familias de los militares, y es una carga que la Nación reconoce sobre el Tesoro público por la administración que ha asumido de esos fondos.

584. El descuento del montepío militar comprende á los Oficiales del Ejército, inclusive retirados, desde la clase de Sub-Teniente ó Alférez, hasta la de Teniente General inclusive.

La Contaduría General del Estado y la Tesorería General (en la parte que les corresponda) son las oficinas obligadas á practicar los descuentos que se previenen en el artículo 585.

CAPÍTULO II

DE LOS FONDOS DEL MONTEPÍO MILITAR

585. Los fondos del montepío militar, consisten:

1.º En la diferencia del sueldo de un mes que se descontará á los que, habiendo servido de soldados distinguidos ó Sargentos, ascendieren á Oficiales;

2.º En la diferencia del sueldo de un mes que se descontará á los Oficiales, por cada ascenso á un empleo superior:

3.º En el descuento del sueldo de un día de cada mes.

586. No se incluyen en los descuentos de que trata el artículo anterior, los sobresueldos y gratificaciones anexas á los empleos y comisiones del servicio militar, ni la diferencia del sueldo de retiro al de actividad.

CAPÍTULO III

PERSONAS QUE TIENEN DERECHO Á LAS PENSIONES DEL MONTEPÍO MILITAR

587. El derecho de las personas á las pensiones del montepío militar se graduará en el orden siguiente: en primer lugar las viudas, en segundo los hijos, y en tercero las madres viudas de los Oficiales incluidos en él, siempre que al tiempo de su fallecimiento tuvieren éstos las cualidades expresadas en el presente título.

588. Las personas que obtuvieren pensión, entrarán á gozarla desde el día siguiente al fallecimiento del Oficial cuyo derecho representan.

589. Ninguna persona podrá gozar más de una pensión de montepío á la vez; pero tendrá derecho de elegir la mayor entre aquellas á que tuviere opción.

590. El derecho de los hijos á la pensión cesa en los hombres á los veintiún años, ó antes, si se casaren ú obtuvieren alguna colocación con renta de la Nación; y en las mujeres, cuando tomen estado de religiosas ó casadas.

591. Cuando el derecho de la pensión recayese en los hijos por haber muerto ó tomado estado la madre, la disfrutarán entre ellos en común ó se la distribuirán por iguales partes con anuencia ó consentimiento de su tutor ó curador.

592. Cuando cesare el derecho de alguno de los hijos, la parte de la pensión que le correspondía acrecerá á la de sus hermanos.

593. En caso de obtener pensión una viuda con hijos, que después adquiera como madre otra mayor, deberá cesar en la primera y mantener á sus hijos con la segunda; pero si falleciere la madre quedarán los hijos con la primera pensión que

les correspondía en representación de su padre, cesando la que gozaba la madre por la de su hijo.

594. La viuda que pasare á segundas nupcias ó tomare estado religioso, perderá la pensión y pasará á sus hijos; pero si volviese á enviudar, tendrán éstos la obligación de mantenerla á menos que la nueva viudez le diere derecho á mayor pensión; en cuyo caso se suspenderá la de los hijos ínterin viva la madre, y ésta los mantendrá ⁽¹⁾.

595. Cuando un Oficial muriere viudo y sin hijos, dejando madre viuda, percibirá ésta la pensión mientras no tome estado de religiosa ó casada.

596. Si al fallecimiento de un Oficial quedaren hijos de varios matrimonios, y por justas causas no les conviniera vivir en compañía de la viuda, la justicia ordinaria dispondrá que se reparta la pensión entre ésta y sus entenados, según el número de ellos y el de los hijos propios de la misma viuda.

597. Las viudas, hijos y madres viudas en sus respectivos casos, cuyos maridos, padres ó hijos fallecieren sin haber cumplido ocho años de servicio, recibirán, por una sola vez, cuatro pagos íntegros, correspondientes al último empleo del fallecido.

598. Las personas que, con arreglo á lo establecido en este Código, gocen de pensiones militares y que residan en el extranjero, tendrán la obligación, para conservar éstas, de justificar su existencia y estado cada tres meses, por medio de los Agentes Consulares de la República ⁽²⁾.

599. Las viudas, hijos ó madres viudas de los Oficiales que murieren en acción de guerra ó algún tiempo después por consecuencia de sus heridas, y los que perdieren algún miembro ó que de algún modo quedaren inútiles para el servicio de las armas por alguna función de guerra, tendrán opción á la pensión de montepío, cualquiera que sea el tiempo de servicio de sus causantes cuando fallecieren.

600. En el mismo caso se hallarán las viudas, hijos y madres viudas de los Oficiales que fallecieren por consecuencia

(1) La ley del 3 de mayo de 1837, que está reproducida casi textualmente en este capítulo, tiene un artículo que no fué incluido en este, y es el 6.º que merece recordarse aquí:

«Aunque no se pueden acumular dos pensiones en una sola familia, dice, si una viuda de varios oficiales llegase á fallecer, dejando hijos de estos diferentes matrimonios, los de cada uno de ellos percibirán la que les corresponda en representación de su padre así como la madre de éste, en su caso respectivo de su viudedad, ó no haber quedado hijos de aquel, ó de haber perdido estos el derecho de percibirla».

(2) Véase el decreto de junio 9 de 1894.

de naufragio, incendio ó terremoto, estando empleados en funciones del servicio.

601. Las viudas, hijos ó madres viudas de los Oficiales que fallecieron dados de baja por el Gobierno y sin haber sido juzgados y sentenciados por los Tribunales Militares, tendrán también opción al montepío desde que empezaron á servir hasta el día que dejaron de sufrir el descuento prescrito en el artículo 585.

602. Las viudas, hijos ó madres viudas de los Oficiales de la Guardia Nacional que se hallaren en los casos del artículo 599, tendrán el mismo derecho á la pensión de montepío que las de los Oficiales del Ejército, aunque no se les hubiere hecho los descuentos que determina este título.

CAPÍTULO IV

FORMALIDADES REQUERIDAS PARA OBTENER LAS PENSIONES DEL MONTEPIÓ MILITAR (1)

603. Para optar á las pensiones del montepío militar, es necesario que la persona ó personas acrediten:

1.º Que el Oficial, cuyo derecho representa, estaba al tiempo de su fallecimiento en posesión de una patente ó despacho firmado por el Presidente de la República y Ministro de la Guerra, ó en su defecto, de los documentos que exige el artículo 501 en los cuales acredite el empleo efectivo;

2.º Que tenía ocho años cumplidos de servicio militar.

604. Los hijos que en defecto de la madre entrasen á sucederle en el goce de la pensión, presentarán la fe de muerte de ésta en forma legal, la de honestidad siendo mujeres y habiendo llegado á la mayor edad, y la de solteras, expedidas por el Juez de Paz.

605. Cuando la madre viuda entrase á suceder en el goce de la pensión á la viuda ó hijos del causante, presentará la fe de muerte de su esposo, la fe de casada de ella, la fe de nacimiento ó bautismo del hijo y la de la muerte, y acreditará su estado de viuda y la de soltería del hijo por quien solicitare.

(1) Véase el decreto del 28 de septiembre de 1899, nombrando interventor por servicio y entender en las gestiones de pensión. cédula, premio, etc.

606. Cuando alguno de los documentos civiles no pudiera presentarse en la forma legal, los interesados ocurrirán al Juez Letrado á rendir pruebas de su derecho, y el Juez deberá hacer por sí mismo el examen de los testigos.

607. El Gobierno, oyendo previamente á la Inspección General de Armas, ⁽¹⁾ pasará en vista al Fiscal de Gobierno las solicitudes sobre montepío, y si estos funcionarios no encuentran inconveniente legal, declarará el derecho á las pensiones.

608. Si se suscitare cuestión sobre la validez ó nulidad del matrimonio ó sobre la legitimidad de los hijos, el Gobierno pasará el expediente al Juez Letrado respectivo para que, oyendo á los interesados y al Fiscal, se pronuncie sobre este punto. Pronunciada la declaración, volverá el expediente al Gobierno para que resuelva la solicitud de montepío.

CAPÍTULO V

CAUSAS POR LAS CUALES SE PIERDE EL DERECHO DEL MONTEPÍO MILITAR

609. Pierden el derecho al montepío militar:

1.º Los Oficiales que fueron condenados á muerte, con degradación, por los Tribunales Militares;

2.º Los que fueron dados de baja absoluta del Ejército por sentencia de los mismos Tribunales Militares, como consecuencia de pena impuesta por los Tribunales Ordinarios;

3.º Los que voluntariamente se hubieren separado del servicio militar;

4.º Los que, habiendo vuelto al servicio militar después de haberse reformado, no hubieren completado nuevamente ocho años de servicio.

(1) Sustituída por el Estado Mayor del Ejército.

CAPÍTULO VI

PENSIONES CORRESPONDIENTES Á LOS AÑOS DE SERVICIO Y MODO DE PERCIBIRLAS

610. Las pensiones de montepío que corresponden, según los años de servicio militar, son:

Pensión por muerte en función de guerra, ó en consecuencia de heridas recibidas en ella, dos terceras partes del sueldo. Pensión desde 30 años de servicio para arriba, dos terceras partes. Pensión de 20 á 30, mitad del sueldo. Pensión de 8 años hasta 20 inclusive, una tercera parte del sueldo.

611. Las pensiones se pagarán mensualmente, y los interesados las recibirán por sí ó por apoderados que acreditarán ante las Oficinas respectivas.

612. Cada tres meses presentarán las viudas, hijas y madres viudas que residan en el país, un certificado de permanecer en viudez las unas, y las otras de solteras, siendo mujeres de mayor edad, firmado por el Juez de Paz de su sección y Comisario de Policía (1).

Las personas que permanecieren en el extranjero, lo presentarán al Agente Diplomático ó Consular respectivo, quien lo transmitirá en oportunidad al Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea por éste pasado al de Guerra y Marina (2).

613. Los tutores ó curadores de los hijos huérfanos, presentarán también, cada tres meses, los certificados que indica el artículo anterior, en los cuales conste que los pupilos existen solteros y no tienen empleo con renta de la Nación.

614. Los Jueces de Paz y Comisarios tomarán cuantos informes fueren necesarios para asegurarse de la verdad de la certificación que den, porque también serán responsables de los fraudes que por culpa de ellos se cometan.

615. Las viudas, hijos é hijas, y las madres viudas que, habiendo cesado en el goce de su pensión, continuaren cobrándola, serán penadas después de justificado el hecho por

(1) Véase la resolución de abril 15 de 1901 y sus aclaraciones.

(2) Véase el decreto de junio 9 de 1894.

el Juez del Crimen respectivo, con el triple de la cantidad que hubieren usurpado, ó con una prisión de tres meses á un año, según la gravedad del caso. La misma pena tendrán los que de cualquier modo intervinieren en el fraude.

616. No son responsables los pensionistas por los descuentos que se hubieren dejado de hacer en los sueldos de sus causantes.

Ley sobre invalidez, viudedad y orfandad (1)

Aguada, 12 de marzo de 1920.

La Asamblea General Constituyente del Estado, etc.,

Artículo 1.º Todos los individuos que hubiesen pertenecido á las Divisiones de este Estado, formadas sucesivamente desde el año 10, y hayan en la guerra resultado inválidos, disfrutarán mientras vivan, desde que quedaron tales, el sueldo íntegro correspondiente á su clase, grado y arma.

Art. 2.º Las viudas é hijos, y á falta de éstos, las madres viudas de los que hubiesen muerto en campaña, gozarán las dos terceras partes de los sueldos que les correspondían.

Art. 3.º Son excluidas del artículo antecedente, las viudas que por culpa propia se hallasen separadas de sus maridos á la época del fallecimiento de éstos, y las que hubiesen dado públicamente causa para el divorcio, mientras la ausencia de ellos en el Ejército; como igualmente los hijos que hubiesen justamente sido desheredados por sus padres, y los que por su mala conducta pública para con ellos, se hubiesen hecho dignos de esa pena.

Art. 4.º Será suficiente para reputarlos no incurridos en las antedichas exclusiones, simple certificado del Párroco y Juez de sus domicilios, los cuales no podrán negarse á otorgarlo, sin que se haya probado previamente y conforme á la ley la existencia de las causas que se expresan en el artículo 3.º.

Art. 5.º Las viudas disfrutarán de la pensión expresada

(1) Véase la ley del 14 de junio de 1837; y el decreto de septiembre 23 de 1899 sobre interventor en cédulas, pensiones, etc.

mientras no vuelvan á casarse y los hijos hasta la edad de 20 años siendo varones, y siendo mujeres mientras permanezcan solteras: éstas y aquéllas viviendo en honestidad.

Art. 6.º El Estado se compromete á cuidar especialmente de la educación y destino de los que quedan huérfanos de resultados de la guerra.

Art. 7.º La Asamblea General Constituyente se reserva además conceder á los individuos de las fuerzas expresadas, la gracia y premios á que se hubiesen hecho acreedores por particulares servicios en la guerra desde dicho tiempo.

Art. 8.º En ninguno de los artículos anteriores se reputan incluidas las personas que hayan recibido y continúen recibiendo en Buenos Aires iguales ó análogos sueldos, asignaciones y premios por la misma causa ó que se hubiesen empleado con sueldo en el Estado ó fuera de él, las cuales no tendrán opción á las asignaciones y sueldos, mientras el goce de los anexos á los empleos en que se hallasen.

GABRIEL A. PEREIRA,
Presidente.

Miguel A. Berro,
Secretario.

Aguada, 13 de marzo de 1829.

Acúsese recibo, cúmplase, etc.

Rúbrica de S. E.

GARZÓN.

Ley sobre invalidez, viudedad y orfandad

TÉRMINO PARA EL RECLAMO

Montevideo, 21 de noviembre de 1829.

La Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado, etc.

Artículo 1.º El Gobierno pagará á los inválidos y viudas los sueldos que les acuerda la ley de 12 de marzo del presente año, desde el día que formalizado el expediente acredite el interesado su acción.

Art. 2.º Hasta el 12 de agosto de 1830, podrán reclamarse los premios concedidos por la citada ley; pasado este término, nadie tiene acción á reclamarlos.

Art. 3.º Concluido el plazo del artículo anterior, presentará el Gobierno á la Asamblea un Estado de la Deuda que resulte, para arbitrar su pago.

SILVESTRE BLANCO,
Presidente.

Miguel J. Errasquin,
Secretario.

Montevideo, 23 de noviembre de 1829.

Cúmplase, etc.

Rúbrica de S. E.
BRITO DEL PINO.

Pensionistas militares, en el desempeño de empleos civiles

SUS SUELDOS

Montevideo, 29 de abril de 1830.

La Honorable Asamblea Constituyente y Legislativa del Estado, etc.

Instruida de la comunicación del Excmo. Gobierno Provisorio de fecha 24 del pasado febrero, en que consulta el sueldo que debe disfrutar el actual Capitán del Puerto, Coronel don Pablo Zufriategui, ha acordado en sesión de ayer, se conteste al señor Gobernador, que desde que se halla establecido por la ley, que no pueden disfrutarse dos sueldos por ningún empleado, se ha corroborado la regla general de tomar el mayor cuando sean desiguales el que disfrute la persona, por cualquier título, y el designado al empleo que sirva; que siendo esta regla admitida y observada en otros casos, no presenta el que ha consultado razón alguna de excepción, ni exige por lo tanto razón especial. Con este motivo la Honorable Asamblea, ha acordado también recomendar al Excmo. señor Gobernador prefiera para los empleos civiles á los militares que disfrutan sueldo, toda vez que reunan las aptitudes precisas, pues que de ello resulta una evidente economía á los fondos públicos.

SILVESTRE BLANCO.

Miguel A. Berro.

Montevideo, 30 de abril de 1830.

Acúsesse recibo, etc.

Rúbrica de S. E.

BRITO DEL PINO.

Pensiones á viudas y menores de militares (1)

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º Las viudas de los jefes y oficiales del Ejército del Estado, y á falta de ellas sus hijos varones hasta la edad de veintiún años, y mujeres hasta que tomen estado cuyos maridos ó padres hayan vencido antigüedad en el servicio del mismo, desde ocho años hasta veinte, gozarán la tercera parte del sueldo que aquel gozase en el acto de su fallecimiento, la mitad, de veinte á treinta y dos terceras partes de treinta para arriba.

Art. 2.º De igual pensión gozarán las viudas madres de hijos solteros, ó viudas sin sucesión, según la antigüedad que tuvieren éstos vencida á su fallecimiento, con arreglo al artículo anterior.

Art. 3.º Las viudas, hijos ó madres (según se señalan en los artículos anteriores) de los fallecidos con menos de ocho años de antigüedad en el servicio, recibirán por una sola vez cuatro pagas íntegras de las que gozaba el marido, padre ó hijo, en el acto de su fallecimiento.

Art. 4.º La antigüedad en el servicio se contará desde el 1.º de mayo del año de 1825. Mas los que hubieren servido en los cuerpos de este Estado en las guerras anteriores á esta época, serán considerados en la de diez y seis años, llevándose la progresión hasta treinta años, si también sirvieron en la últimamente contra el Imperio del Brasil.

Art. 5.º Los años de campaña en tiempo de guerra se contarán dobles.

Art. 6.º Todos los jefes y oficiales del Ejército tendrán de descuento, para este objeto, el sueldo de un día en cada mes; y la diferencia de sueldo de un grado á otro en los ascensos

(1) Esta ley rigió hasta la sanción del Código Militar, que promulgado el 7 de julio de 1854 empezó á regir tres meses después, el 7 de octubre de 1854.

por solo el primer mes que hayan de percibir en el empleo á que asciendan.

Art. 7.º En esta ley no son comprendidas las viudas que lo son en la de 12 de marzo de 1829.

Art. 8.º Las exclusiones expresas en los artículos 3, 4 y 8 de la misma precitada ley tendrán igual valor en la presente.

Sala de sesiones. Á 17 de marzo de 1835.

FRANCISCO A. VIDAL.

Miguel A. Berro,
Secretario.

Montevideo. 19 de marzo de 1835.

Cúmplase, etc.

ORIBE.

PEDRO LENGUAS.

Decreto reglamentario de la ley anterior

Montevideo, 27 de marzo de 1835.

Para poner en uso la ley de viudedad que han sancionado las Honorables Cámaras Legislativas en 17 del presente mes,

El Superior Gobierno ha acordado y

DECRETA:

Artículo 1.º Las personas que en lo sucesivo optaren al goce de la expresada ley, lo justificarán presentándose al Superior Gobierno por conducto del Estado Mayor General. Las viudas con una solicitud acompañada de la certificación de tales, la de casadas y las fees de bautismo de los hijos;

éstos por quienes los represente, presentarán sus fees de bautismo y partidas de muerte del padre. Las madres viudas. las fees de bautismo y partidas de muerte de los hijos por quien tienen la opción, y las fees de casadas y viudas de ellas: y cada una en su caso el despacho del empleo que obtenía á su fallecimiento el individuo por quien tiene la opción, y en su defecto un certificado de la Contaduría General que lo acredite.

Art. 2.º El Estado Mayor General al elevar esta clase de solicitudes dirá el goce que les corresponde, reglándose para ello por la antigüedad que señale la hoja de servicios del finado; teniendo presente que aunque los años de campaña en tiempo de guerra deben considerarse dobles, según el artículo 5.º de la ley de viudedad, esto debe entenderse solamente en guerra extranjera.

Art. 3.º El decreto que recaiga en los expedientes acordando el goce de pensión, volverá al Estado Mayor General por cuyo conducto se transcribirá á las interesadas y este les servirá de suficiente comprobante de su opción, devolviéndoseles el despacho que acompañaron.

Art. 4.º El expediente se pasará por la misma oficina á la Contaduría General para que tome razón, y allí quedará archivado.

Art. 5.º Se somete al Estado Mayor General la organización mensual de los presupuestos nominales de las viudas y menores, comprobados con las justificaciones necesarias, así como su giro; y la percepción y pago de los haberes que se les acrediten, al habilitado de la expresada oficina.

Art. 6.º Las personas que sólo acrediten opción á las cuatro pagas que señala el artículo tercero de la ley de la materia obtendrán el decreto de pago en su solicitud y percibirán su importe en Tesorería.

Art. 7.º El descuento que señala el artículo 6.º, empezará á tener efecto en la liquidación del próximo mes de abril.

Art. 8.º La opción al goce empezará desde la misma fecha.

Art. 9.º Comuníquese, etc.

ORIBE.

PEDRO LENGUAS.

Viudas de militares

LEY ADICIONAL Á LAS DE 12 DE MARZO DE 1829
Y 19 DE MARZO DE 1835 (1)

*El Senado y Cámara de Representantes de la República
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,*

DECRETAN:

Artículo 1.º Las viudas de Jefes y Oficiales del Ejército que quedaren con hijos de éstos, bien sean habidos en su matrimonio ó en otros anteriores, tendrán obligación de mantenerlos y educarlos con el importe de las pensiones que respectivamente les acuerdan las leyes de 12 (2) de marzo de 1829 y 17 (3) de marzo de 1835, hasta que los varones hayan cumplido las edades en ellas designadas ú obtenido colocación, con cuya renta ó sueldo puedan sostenerse; y las hijas mientras permanezcan solteras.

Art. 2.º Cesa el derecho de la pensión para dichas viudas, desde que lleguen á tomar nuevo estado, y entrarán á gozarla los hijos del difunto jefe ú oficial, pagándoles á los tutores ó curadores que por derecho hagan su personería y á las huérfanas cuando hayan salido de su menor edad.

Art. 3.º La pensión en tal caso es debida íntegra á los hijos del oficial, sea cual fuere su número, de manera que el último que quede acreedor á ella, reasumirá en si solo el todo de su importe.

Art. 4.º Falleciendo ó tomando nuevo estado la viuda del oficial, ó cesando el goce de los hijos por muerte, ó por haber cumplido la edad los varones, ó casándose las mujeres; ó en el caso de fallecer el militar soltero, ó viuda sin hijos, el goce pasa íntegro á la madre viuda que sobrevive á éste, y en ella expira el derecho de percibirlos.

(1) Véase la nota de la ley del 19 de marzo de 1835 (pág. 21).

(2) La fecha del cúmplase es 13.

(3) La fecha del cúmplase es 19.

Art. 5.º Si por la muerte de dos oficiales una mujer reasumiese dos derechos á pensión, uno como viuda y otro como madre, sólo optará á la mayor con la obligación prescrita en el art. 1.º; pero si llegase á fallecer ó á contraer nuevo enlace, los huérfanos recuperarán la pensión primitiva que les correspondía en representación de su padre.

Art. 6.º Aunque no se pueden acumular dos pensiones en una sola familia, si una viuda de varios oficiales llegase á fallecer, dejando hijos de estos diferentes matrimonios, los de cada uno de ellos percibirán la que les corresponda en representación de su padre, así como la madre de éste, en su caso respectivo de su viudedad, ó no haber quedado hijos de aquél, ó de haber perdido éstos el derecho de percibirla.

Art. 7.º Si las viudas que por haber pasado á segundas nupcias perdieron su pensión, volviesen á enviudar, deberán mantenerla sus hijos, á menos que por la nueva viudez adquieran mayor pensión, en cuyo caso se suspenderá el goce de aquellos interin vive la madre y ésta los mantendrá.

Art. 8.º Cuando por el fallecimiento de un oficial, quedasen hijos de otros matrimonios, y por justas causas no les conviniera vivir en compañía de su viuda, dispondrá la justicia se reparta la pensión entre ésta y sus entenados, según el número de ellos y de los hijos propios que puedan haber quedado á la misma viuda.

Art. 9.º Las viudas de militares que hayan contraído matrimonio, teniendo éstos sesenta años cumplidos, no optan á pensión, á no morir ellos en acción de guerra, ó que dejen hijos habidos durante el matrimonio.

Art. 10. A las viudas, huérfanos ó madres de militares que tengan derecho á pensión, sólo se les asistirá con la mitad de ella si no residiesen habitualmente en el territorio de la República ⁽¹⁾.

Art. 11. En los casos del artículo 3.º de la ley de 12 de marzo de 1829, la pérdida de pensión no es extensiva á los hijos habidos antes del divorcio, ó culpable separación de la mujer del oficial, sino que éstos la disfrutarán íntegra y en falta de ellos la madre de aquél.

Art. 12. La honestidad en que por el artículo 5.º de la ley citada, deben vivir las viudas é hijas de militar para optar á la pensión, se presume siempre, interin en el juicio competente y con su audiencia, no se pruebe lo contrario.

(1) Véase el decreto 9 de junio de 1894.

Art. 13. El goce de la pensión correrá desde el día del fallecimiento del militar que la motiva ⁽¹⁾.

Art. 14. El Poder Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la debida justificación de los derechos que se aleguen al goce de las pensiones, así como para que el cobro de éstas, se continúe ó suspenda, en los casos que quedan prevenidos.

Sala de sesiones. 28 de abril de 1837.

MANUEL J. ERRAZQUIN.

Miguel A. Berro,
Secretario

Montevideo. 8 de mayo de 1837.

Cúmplase, etc.

ANAYA.

PEDRO LENGUAS.

**Ley declarando con opción al premio que acuerda
la de 13 de marzo de 1829, al que haya muerto
ó muriese en defensa de la ley.**

*El Senado y Cámara de Representantes de la República
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,*

DECRETAN:

Artículo 1.º Las viudas é hijos y á falta de éstos las madres viudas de los jefes, oficiales y tropas que hayan muerto en defensa de las leyes desde el 4 de octubre de 1828 y las de todos aquellos que muriesen en lo sucesivo, ya sea con

(1) Véase la ley 17 de julio de 1854.

igual título, ó ya en guerra con el extranjero, gozarán del mismo premio que concede la ley de 12 ⁽¹⁾ de marzo de 1829 con sujeción en todo á lo que en ella se establece.

Art. 2.º Los jefes, oficiales y tropa que hayan resultado inválidos en la misma época, ó que pudiesen resultar en otras ulteriores, por iguales servicios, tendrán opción al mismo goce que aquella señala para los que están en este caso.

Art. 3.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones, en Montevideo, á 14 de junio de 1837.

MANUEL J. ERRAZQUIN.

Miguel A. Berro,
Secretario.

Montevideo, 14 de junio de 1837.

Cúmplase, etc.

ANAYA.

PEDRO LENGUAS.

Derechos de viudedad, orfandad é invalidez

TÉRMINO PARA HACERLOS VALER

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º Señálase un plazo de seis meses á contar desde el día de la promulgación de la presente ley, para que todas las personas que se consideren con derecho á tener cé-

(1) La fecha del cúmplase es 13.

dula de viudedad, orfandad é invalidez, ocurran al Gobierno por los respectivos títulos que correspondan.

Art. 2.º Todas aquellas personas que concurriesen á solicitar dichos títulos después de vencido el plazo señalado por esta ley, no podrán considerarse en adelante para la percepción de su haber con la prerrogativa que les acuerda el artículo 13 de la ley del 3 de mayo de 1837, sino con derecho á obtener sus pensiones desde el día en que inicien los trámites para obtenerla.

Art. 3.º Se exceptúan de la pena impuesta en el artículo anterior los menores, que se encuentren bajo la guarda de tutores ó curadores.

Art. 4.º Queda derogado en todas sus partes todo lo que en las leyes anteriores se oponga con la presente.

Art. 5.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones, en Montevideo. á 13 de julio de 1854.

ALEJANDRO CHUCARRO,
Presidente.

José Martos,
Prosecretario.

Montevideo, 17 de julio de 1854.

Cúmplase, etc.

Rúbrica de S. E.

MARTÍNEZ.

Viudas y menores de inválidos

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º Las viudas de los militares pertenecientes al Cuerpo de Inválidos y en su falta los hijos, optarán desde la

publicación de la presente ley á una pensión equivalente á la mitad del sueldo que aquellos gozaren por su calidad de inválidos.

Art. 2.º Esta pensión es por vida, y en el caso de muerte, pasará á los hijos que la disfrutarán, siendo varones hasta los veintiún años; y siendo mujeres hasta que no casen.

Art. 3.º No tienen opción á los beneficios de la presente ley:

- 1.º Las mujeres é hijos que no fuesen de legítimo matrimonio.
- 2.º Las mujeres que se hallen separadas de sus maridos al tiempo de la muerte de éstos sin causa declarada justa por Juez competente, en cuyo caso la pensión pasará directamente á los hijos.

Art. 4.º En adelante los individuos pertenecientes al Cuerpo de Inválidos, sufrirán un descuento en sus haberes de un ocho por ciento.

Art. 5.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones, en Montevideo á 14 de julio de 1855.

MANUEL B. BUSTAMANTE.

José Martos,
Prosecretario.

Montevideo, 19 de julio de 1855.

Cúmplase, etc.

Rúbrica de S. E.

MARTÍNEZ.

Decreto sobre residencia de las viudas militares que gozan sueldo (1)

Montevideo, 26 de marzo de 1854.

El Gobierno acuerda y

DECRETA:

Artículo 1.º Todas las viudas de la lista militar que gozan sueldo del Estado, deben residir en el territorio de la República.

Art. 2.º La Comisión clasificadora creada por el decreto de esta fecha, mandará comparecer con sus títulos á las expresadas viudas que deberán presentarse en el plazo de sesenta días, las que residen en el territorio de la República, de tres meses las que se hallen en el territorio argentino y provincia limítrofe de Río Grande del Brasil, y de nueve meses para los que se encuentren en ultramar.

Art. 3.º Las que no se presentasen dentro del plazo determinado en el artículo anterior, serán borradas de las listas á que pertenezcan.

Art. 4.º El Ministro Secretario de Estado en los departamentos de Guerra y Marina, queda encargado del cumplimiento de este decreto, etc.

PEREIRA.

ANTONIO DÍAZ.

(1) Véase el decreto de junio 9 de 1864.

Viudas de los Treinta y Tres

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º Acuérdase sin excepción alguna, á las viudas de los Treinta y Tres, el pago íntegro del sueldo correspondiente al más alto grado militar que sus maridos invistieron.

Art. 2.º Comuníquese etc.

Sala de sesiones, Montevideo 14 de julio de 1859. *

JULIO C. PEREIRA.

Justino B. García,
Secretario.

Montevideo, 15 de julio de 1859.

Cúmplase, etc.

PEREIRA.

ANTONIO DÍAZ.

**Ley acordando pensión á las viudas, madres
é hijos de guardias nacionales ⁽¹⁾**

*El Senado y Cámara de Representantes de la República
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,*

DECRETAN:

Artículo 1.º Las viudas, madres é hijos de todos los jefes, oficiales y tropa de guardias nacionales que hayan muerto ó murieren en la presente lucha, defendiendo la Constitución y las leyes, tendrán opción á las pensiones que la ley de 19 de marzo de 1835, concede á los militares que mueren en el campo de batalla.

Art. 2.º Los servicios que en calidad de guardias nacionales hayan prestado ó prestaren al país, los comprendidos en el artículo anterior, serán considerados como hechos en el Ejército de línea.

Art. 3.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo, á 14 de junio de 1863.

PEDRO FUENTES,
Presidente.

Carlos M. de Nava,
Secretario.

Montevideo, 17 de junio de 1863.

Cúmplase, etc.

BERRO.

LUIS DE HERRERA.

(1) Véase el artículo 602 del Código Militar.

Reforma Militar

CERTIFICADOS DEL LIBRO-REGISTRO DE JEFES Y OFICIALES REFORMADOS

Ministerio de Guerra y Marina.

Montevideo, 4 de junio de 1860.

Impuesto este Ministerio de la nota de V. E. fecha 31 de mayo último, referente á la conveniencia de saberse qué trabajo se hizo por esta repartición, ó las de su dependencia sobre títulos transferibles á virtud de la Ley de 23 de julio de 1857, que imponía el uno por ciento de contribución extraordinaria con destino á la reforma militar, he inquirido lo que á tal respecto constase, y se reduce á que: — en ejecución de la mencionada Ley, el Ministerio de la Guerra ordenó que se llevase un libro de registros en que fueran inscriptos los Jefes y Oficiales reformados, y de ese requisito fué que se expidieron, inmediatamente después, *certificados* al tenor del que con el número 25 y en copia autorizada, remito adjunto á esta nota.

Como V. E. lo observará por la forma y términos de esos certificados, ellos no importan ni podían importar otra cosa, que una simple constancia de que los individuos á quienes se refieren, eran tales Jefes ú Oficiales comprendidos en la reforma militar proyectada, con tal tiempo de servicio y tales alcances, según la liquidación practicada.

Pero ese acto de pura condescendencia por parte de la autoridad de quien era solicitado por los interesados, como también consta de esos mismos documentos, dados á *pedido* de aquéllos, ni podían servirles como títulos transferibles en el sentido de transacciones de cualesquier género, ni para los que los adquiriesen pudieran nunca constituirse por el hecho en acreedores del Estado, según al parecer lo pretenden.

Así es que, los unos transfiriendo sus derechos, y los otros adquiriéndolos, lo han hecho sobre su propia responsabilidad; pues demasiado claramente se demuestra por el certifi-

cado adjunto, que semejante documento no pasaba de ser una constancia de que su dueño era Jefe ú Oficial de tal ó cual categoría, con tantos años de servicio, y por consiguiente, con opción al importe de la reforma en su clase.

Ninguna otra cosa pudo jamás importar esa justificación, ni autorizar, sino corriendo los riesgos á que necesariamente se exponía el especulador en una transacción cualquiera; y esto, con tanta más razón, cuanto que ellos ni aun esperaron á ver puesta en ejecución la operación consignada en la Ley de 15 de julio, completamente anulada por la de 30 de mayo del corriente año.

Por consecuencia, vista la naturaleza de los documentos en cuestión, V. E. me permitirá manifestarle mi creencia de ser innecesaria la disposición de proceder á recogerlos ó declararlos sin ningún valor, porque nunca lo tuvieron sino como simples certificados solicitados de las Oficinas de Guerra, que los dieron como si se tratase de cualquiera otra cosa de que existiese constancia en sus archivos. No obstante, V. E. juzgará de ello, y procederá como lo crea conveniente, informado como queda de los antecedentes de que este Ministerio se halla en posesión á tal respecto.

Dios guarde á V. E. muchos años.

DIEGO LAMAS.

Al Excmo. señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda, don Tomás Villalba.

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 6 de junio de 1860.

Á la Contaduría General para su conocimiento, y para que tenga presente el carácter de los meros certificados de tiempo que se expedían; para el caso que alguno de ellos quiera hacerse valer como obligación contra el Estado.

VILLALBA.

Estado Mayor Pasivo (1)

INVÁLIDOS Y VIUDAS. — DISPOSICIONES PRESCRIBIENDO Á LOS JEFES Y OFICIALES DEL ESTADO MAYOR PASIVO SU PRESENTACIÓN MENSUAL Á LA REVISTA DE COMISARIO. — ORDEN GENERAL.

Montevideo, 5 de julio de 1860.

Artículo 2.º Se previene que en todas las revistas de Comisario, desde el presente mes, en lo sucesivo, deben presentarse á la hora en que se pasa aquélla, todos los Jefes y Oficiales del Estado Mayor Pasivo ó inválidos residentes en el Departamento de la Capital, á justificar su existencia en la Mesa de la Comisaría.

Art. 3.º La Mesa de Comisaría anotará en aquel acto, el lugar del domicilio de cada uno, con determinación de la calle y número donde residen los Jefes y Oficiales.

Art. 4.º El no presentarse en el acto de la revista, sin aviso justificado, importará la clasificación de ausencia en el presupuesto.

Salvador García.

Nota ministerial (2)

Montevideo, 6 de noviembre de 1863.

Los Jefes y Oficiales del Ejército agregados al Estado Mayor Pasivo, no pueden figurar en las listas de presupuesto, si no han revistado personalmente en la Comisaría General de Guerra.

(1) Véase la nota ministerial del 6 de noviembre de 1863 y los decretos del 4 de octubre de 1893; 9 de junio de 1894 y 15 de abril de 1901.

(2) Véase la orden general del 5 de junio de 1860 y decretos del 4 de octubre de 1873; 9 de junio de 1894 y 15 de abril de 1901.

Lo prevengo á V. S. para el cumplimiento exacto de esta disposición.

Dios guarde á V. S. muchos años.

FEDERICO NIN REYES.

Al señor Jefe del Estado Mayor General.

Decreto sobre justificación de la existencia de jefes, oficiales, viudas é inválidos ⁽¹⁾

Montevideo, 21 de diciembre de 1869.

Estando el Gobierno en conocimiento de los abusos que se cometen en las justificaciones de existencia de los jefes y oficiales del Estado Mayor Pasivo, así como en el Cuerpo de Inválidos, viudas y menores pensionados por el Estado,

El Presidente de la República,

DECRETA:

Artículo 1.º Establécese una Comisión verificadora compuesta del jefe de Estado Mayor General, Comisario General de Guerra y Coronel Interventor, que funcionará en la oficina de la Contaduría General desde el 1.º del entrante mes de enero.

Art. 2.º Todos los Jefes y Oficiales del Estado Mayor Pasivo, inválidos, viudas y menores existentes en el Departamento de la Capital, se presentarán personalmente á justificar la identidad de sus personas, debiendo las viudas, inválidos y menores presentar sus correspondientes diplomas hasta el 20 del mes de enero próximo, de los cuales se tomará razón en dicha oficina.

Art. 3.º Los que existiesen en los Departamentos de campaña, verificarán su presentación dentro del término de tres meses y los que existiesen en el extranjero, de seis meses á contar desde el 1.º de enero de 1870.

(1) Véase los artículos 492 y 612 del Código Militar y resolución del 15 de abril de 1901 y sus aclaraciones.

Art. 4.º La justificación de existencia que debe efectuarse mensualmente desde el 15 al 22 de cada mes, para los existentes en el Departamento de la Capital, se hará por presentación individual en la Comisaría General; en los Departamentos de campaña á los Jefes Políticos, quienes remitirán las listas correspondientes, de los que se hubiesen presentado, á la Comisaría General antes del 25 de cada mes; y los que estuviesen en el extranjero por medio de certificados de los Cónsules de la República si los hubiera, y en caso contrario por nota cerrada dirigida á la Comisaría General.

Art. 5.º Sin perjuicio de la presentación personal y mensual de que habla el artículo anterior, las viudas y menores de militares presentarán á la Comisión General cada tres meses, certificado del Cura de la parroquia de su residencia de permanecer en estado de viudez aquéllas y éstas de solteras.

Art. 6.º Comuníquese, etc.

BATLLE.

JOSÉ AUGUSTO POSSOLO.

Ley declarando años dobles en el servicio los de la defensa de Montevideo.

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º Decláranse servicios prestados en campaña en guerra exterior los de la heroica defensa de Montevideo, tanto civiles como militares, debiendo contarse dobles los años, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 14 de la ley de 3 de mayo de 1838.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Sala de las sesiones del Senado, en Montevideo, á 8 de marzo de 1870.

F. A. VIDAL,
Presidente.

Francisco Aguilar y Leal,
Secretario.

Montevideo, 28 de marzo de 1870.

Cúmplase, etc.

Rúbrica de S. E.

POSSOLO.

Ley aumentando el premio acordado á los Treinta y Tres

*El Senado y Cámara de Representantes de la República
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,*

DECRETAN:

Artículo 1.º El premio acordado por la ley de 14 de julio de 1830 á los Treinta y Tres beneméritos orientales que acometieron la gloriosa empresa de libertar el territorio de la Patria, se aumenta en la proporción siguiente:

Los oficiales gozarán de dos mil pesos anuales.

Los sargentos, cabos y soldados, de mil pesos anuales.

Art. 2.º Las viudas de los Treinta y Tres, gozarán de un premio anual vitalicio en la siguiente proporción:

Las de Jefes de \$ 600.

Las de oficiales de \$ 400.

Las de sargentos, etc. de \$ 300.

Art. 3.º La pensión acordada á las viudas de los jefes, será extensiva á la del coronel don Tomás Gómez, que prestó inmediato y eficaz concurso á los Treinta y Tres denodados patriotas.

Art. 4.º Los ciudadanos Laureano y Manuel Ruiz, Rafael Uriarte, Irigoitia y José Maria Gaitán, en premio de la eficaz cooperación prestada á la empresa de los Treinta y Tres, disfrutarán cada uno de ellos de una pensión anual vitalicia de 600 pesos.

Art. 5.º La presente ley empezará á tener ejecución, desde la fecha de su promulgación.

Art. 6.º Comuníquese, etc.

Sala de las sesiones del Senado, en Montevideo, á 12 de julio de 1873.

VARELA,
Presidente.

Francisco Aguilar y Leal,
Secretario.

Montevideo 21 de julio de 1873.

Cúmplase, etc.

Rúbrica de S. E.

PÉREZ GOMAR.

Leyes concediendo sueldo íntegro á los guerreros de la independencia

*El Senado y Cámara de Representantes de la República
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,*

DECRETAN:

Artículo 1.º Los Jefes y Oficiales y soldados que hayan militado en los Ejércitos de la República durante la guerra de la Independencia y que se encuentren revistando en el Estado Mayor Pasivo, gozarán en adelante el sueldo íntegro correspondiente á la clase militar que desempeñen actualmente.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Sala de las sesiones del Senado, en Montevideo, á 14 de julio de 1874.

JOSÉ D. PIÑEYRO,
Presidente.

Francisco Aguilar y Leal,
Secretario.

Montevideo, 25 de julio de 1874.

Cúmplase, etc.

Rúbrica de S. E.

FONDA.

Jefes, Oficiales y Pensionistas

DATOS SOBRE DESEMPEÑO DE EMPLEOS CIVILES Y SOBRE DE-
FUNCIONES PARA LA ANOTACIÓN DEL ESTADO MAYOR DEL
EJÉRCITO.

Ministerio de Guerra y Marina.

Montevideo, 22 de junio de 1892.

Siendo conveniente á los intereses del Erario y al mejor servicio público, tener un conocimiento inmediato del fallecimiento de los Jefes y Oficiales del Ejército y pensionistas militares, así como de los empleos que en las reparticiones civiles ocupen los primeros: Y habiendo demostrado la práctica que la forma en que se transmiten dichas informaciones, se presta á la comisión de abusos y por su deficiencia no permite la organización perfecta del archivo del Estado Mayor General del Ejército.

El Presidente de la República acuerda y

DECRETA:

Artículo 1.º Los señores Jefes Políticos, Director y Receptores de Aduanas, Administradores de Rentas y Juntas Económico Administrativas, remitirán directamente y á la brevedad posible al Estado Mayor General del Ejército, una relación de los Jefes y Oficiales que se encuentren desempeñando empleos en sus dependencias, designando en ella el destino que ocupan. Del mismo modo procederán toda vez

que sea conferido nuevo empleo á algún Jefe ú Oficial, ó que éstos cesen en sus funciones civiles.

Art. 2.º Los señores Jueces de Paz, Oficiales del Registro de Estado Civil en la Capital, inmediatamente de anotar la defunción de mililares ó pensionistas militares, remitirán al Estado Mayor General del Ejército, un certificado haciendo constar el fallecimiento registrado.

Art. 3.º Los señores Jueces de Paz, Oficiales del Registro de Estado Civil en los Departamentos, procederán de la misma manera, pasando los certificados de defunción á los señores Jefes Políticos para que éstos, á su vez, los remitan directamente al Estado Mayor General para la anotación correspondiente.

Art. 4.º Comuníquese, etc.

HERRERA Y OBES.

LUIS E. PÉREZ.

Militares y pensionistas ⁽¹⁾

OBLIGACIÓN DE SU REVISTA

Ministerio de Guerra y Marina.

Montevideo, 4 de octubre de 1893.

Considerando: Que la revista de un militar importa la constatación de su disponibilidad á las órdenes que pueda transmitirle el Gobierno;

Que si ese requisito no se llena, la Superioridad ignora dónde se encuentra y no puede, por consiguiente, utilizar sus servicios en el momento que lo juzgue conveniente;

Que el sueldo que la ley asigna á los militares en situación de reemplazo y cuartel es una compensación de su disponibi-

(1) Véase la orden general del 5 de julio de 1860, la nota ministerial del 6 de noviembre de 1893 y los decretos de 9 de junio de 1894 y 15 de abril de 1901.

lidad, y que no es justo se abone haberes cuando no se ha estado en esa condición;

Que diariamente sucede que se presentan solicitudes de abono de sueldos por militares que han dejado de revistar durante años enteros, importando esa omisión una falta al cumplimiento de sus deberes y un abandono voluntario de los derechos que pudieran corresponderles;

Que es necesario cortar ese abuso, que no sólo constituye una erogación ilegítima para el Estado, sino que trastorna á la vez la contabilidad de las oficinas;

El Presidente de la República acuerda y

DECRETA:

Artículo 1.º Todo militar y pensionista militar que no reviste por acto propio durante tres meses seguidos, perderá el derecho al abono de sus haberes durante el tiempo que deje de cumplir aquel requisito.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

HERRERA Y OBES.

LUIS E. PÉREZ.

Pensionistas militares

SOBRE RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO

Ministerio de Guerra y Marina.

Montevideo, 9 de junio de 1894.

Considerando: Que el artículo 10 de la ley de 3 de mayo de 1837 dispone que á las viudas, huérfanos ó madres de militares que tengan derecho á pensión, sólo se les asistirá con la mitad de ésta si no residiesen habitualmente en el territorio de la República; determinando el artículo 14 de la misma ley, que el Poder Ejecutivo adoptará las medidas ne-

cesarias para que el cobro de las pensiones se continúe ó suspenda en los casos prevenidos;

Que no habiendo determinado de un modo preciso lo que constituye la residencia no habitual en el territorio de la República, ha venido concediéndose licencia con sueldo íntegro á numerosos pensionistas militares que viven hace muchos años en el extranjero, lo que importa una verdadera infracción á la citada ley;

El Presidente de la República acuerda y

DECRETA:

Artículo 1.º Desde la fecha no se concederá licencia para residir en el extranjero á las viudas, menores ó madres viudas de militares con el sueldo íntegro de su pensión, sino por el término de seis meses.

Art. 2.º Para que la renovación de las licencias concedidas con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1.º no interrumpa la habitualidad de residencia en el país, será necesario que la interesada resida en el territorio de la República durante un año una vez vencida la licencia que le hubiere sido acordada antes.

Art. 3.º Toda prórroga ó licencia de esta naturaleza que sea solicitada sin haber cumplido lo dispuesto en el artículo 2.º del presente decreto, será acordada con arreglo al artículo 10 de la ley de 3 de mayo de 1837.

Art. 4.º Destinase el importe de los sueldos que dejen de percibir dichos pensionistas por concepto de esta disposición, así como del decreto de 4 de octubre del año próximo pasado, á la construcción y reparación de cuarteles.

Art. 5.º Comuníquese, etc.

IDIARTE BORDA.

JUAN J. DÍAZ.

Interventor de Pensiones militares, Cédulas y Premios

Ministerio de Guerra y Marina.

Montevideo, 28 de septiembre de 1899.

Habiendo llegado á conocimiento del Gobierno que numerosas personas á quienes según las leyes asiste derecho para obtener cédula de pensión en calidad de viudas y menores, hijos de militares, así como también á los que tienen opción á cédulas de inválidos ó premios de constancia, son víctimas de abusos por parte de algunos individuos á quienes confieren poder para gestionar la obtención de esos beneficios;

Considerando: Que generalmente esas personas no pueden iniciar ni tramitar los expedientes respectivos, sea por ignorancia de las leyes ó falta de medios para los gastos indispensables, teniendo que recurrir por tal motivo á un apoderado é invertir en comisiones los dineros que precisan para las más premiosas necesidades de la vida;

Considerando: Que el Gobierno tiene el deber de velar por los intereses de esas clases menos favorecidas, de un modo eficaz, á fin de que gocen íntegramente de lo que las leyes les acuerdan;

El Presidente de la República acuerda y

DECRETA:

Artículo 1.º Designase un interventor para que inicie y entienda en las gestiones relativas á las prenotadas clases acreedoras á los premios y beneficios de la referencia, siendo facultativo de los interesados solicitar ó no su intervención, sin tener derecho en el primer caso, á percibir comisión ni honorario alguno.

Art. 2.º A fin de garantizar al Estado contra posibles perjuicios por el empleo de papel sellado y timbres, en las solicitudes que no tengan base seria á juicio del interventor, éste, antes de iniciar en forma el expediente consultará los ante-

cedentes, ocurriendo á la Contaduría General del Estado, en demanda de datos, y si de ellos resultase que en su opinión tiene derecho el solicitante, iniciará entonces la petición. En caso contrario notificará al interesado que no puede asumir su representación, dejando á salvo sus derechos por si desea gestionar personalmente ó por apoderado.

Art. 3.º Por el Ministerio de Hacienda se impartirán las órdenes del caso para que las oficinas respectivas provean al Interventor de la cantidad indispensable de papel sellado y timbres de biblioteca, por cuenta y razón, á fin de utilizarlos en los expedientes que se inicien y tramiten, y la Contaduría General del Estado deberá llevar una cuenta especial de las hojas y timbres que se empleen, dando aviso á la repartición correspondiente.

Art. 4.º Una vez terminada la gestión con el decreto gubernativo concediendo la pensión ó premio, la Contaduría General del Estado formará en el mismo expediente la planilla de gastos por el papel sellado y timbres, y hará descontar por la oficina pagadora correspondiente, su importe de las primeras mensualidades que debe percibir el interesado.

Art. 5.º La gestión del Interventor terminará en cada caso, con la obtención de la cédula ó premio.

Art. 6.º Cométese la intervención al señor asesor del Superior Tribunal don Carlos Santurio.

Art. 7.º El Interventor tendrá á sus órdenes un auxiliar militar de la clase de Oficial.

Art. 8.º Comuníquese, publíquese y desc al R. C.

CUESTAS.

PEDRO CALLORDA.

Justificación de pensionistas civiles y militares del Pasivo

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 15 de abril de 1901.

Teniendo el Gobierno el deber de regularizar en forma los pagos que se efectúen á las Clases Pasivas, y á fin de que se justifiquen debidamente la existencia é identidad de las personas acreedoras del Estado, que otorgan poder para cobrar ó hagan cesión de sus créditos, ya se encuentren ausentes ó presentes, esa institución procederá de acuerdo con la siguiente resolución del Gobierno:

1.º Se exigirá de los respectivos apoderados constancia de la existencia é identidad de sus poderdantes, expedida por el Juez de Paz que corresponda. Los poderdantes que se encuentran en la Capital pueden justificar desde luego.

2.º Mientras no se verifique la justificación de existencia de los mencionados pensionistas y militares adscritos á las listas pasivas, el haber que les corresponda quedará depositado á su orden en ese Establecimiento, salvo que el apoderado ó cesionario presente garantía abonada á juicio del señor Gerente, en cuyo caso podrá hacerse efectivo el abono, otorgando el plazo de un mes para efectuar la debida justificación, vencido el cual, quedarán en depósito los haberes que se quedaren adeudando.

Lo que comunico á los efectos del caso.

Dios guarde al señor Gerente muchos años.

A. DUFORT Y ALVAREZ.

Señor Gerente del Monte de Piedad Nacional, Don Orlando Ribero.

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 30 de abril de 1901.

Señor Ministro:

Con el propósito en ella expresado, este Ministerio dirigió con fecha 15 del corriente al Monte de Piedad Nacional, encargado de la administración de los presupuestos de las clases pasivas, la nota que en copia certificada se acompaña. Posteriormente esa institución al acusar recibo de la nota expresada y á fin de llevar á la práctica la resolución del Gobierno, dándole forma y reglamentación adecuada, acompañó los dos formularios que también se adjuntan á la presente, para ser pasados por intermedio de V. E. á la Dirección General del Registro de Estado Civil, á la que ruego á V. E. quiera transmitir las siguientes instrucciones:

1.º La Dirección General del Registro de Estado Civil impartirá las disposiciones necesarias para que todas las oficinas de su dependencia tanto en la capital como en los departamentos del interior, expidan certificados á los señores pensionistas civiles y militares adscritos á las listas pasivas, que lo soliciten. Estos certificados serán expedidos bajo el formulario núm. 1, que se adjunta, los que mandará imprimir esa Dirección y distribuirá en las reparticiones de su dependencia.

2.º También mandará confeccionar la precitada Dirección, cuadernos según el formulario núm. 2, para repartirlos igualmente en todos los Juzgados de Paz, á objeto de que sean anotadas en ellos las partidas de los señores pensionistas que soliciten certificados, debiendo cada Juzgado remitir quincenalmente ó conforme se expidan los certificados, una copia extractada de los cuadernos de anotación, á esa Dirección General, para que á su vez sean pasados al Monte de Piedad Nacional. — Los certificados de la referencia, serán expedidos sin emolumento alguno.

3.ª En las instrucciones que impartirá la citada Dirección á las oficinas de su dependencia, se hará constar que los certificados expedidos cuyos testigos resultaran falsos, serán éstos y sus cómplices, penados con arreglo á las leyes. Las preinsertas instrucciones fueron formuladas por el Monte de Piedad Nacional; y en vista de que dicha institución enca-

rece la urgencia, para poner en práctica la resolución gubernativa, ruego á V. E. quiera pasar esta comunicación y demás que lo acompañan, á la ya citada Dirección del Registro de Estado Civil, para los efectos consiguientes.

Saluda á V. E. con su mayor distinción

A. DUFORT Y ÁLVAREZ.

Excmo. señor Ministro de Gobierno, don Eduardo Mac-Eachen.

Ministerio de Gobierno.

Montevideo, 30 de abril de 1901.

Á los efectos solicitados pase á la Dirección General del Registro Civil y acúsesse recibo.

MAC-EACHEN.

Aclaraciones y ampliaciones al decreto de 15 de Abril de 1901

1.^a Que los pensionistas no están obligados á justificar su calidad de tales, cuando concurren ante los Jueces de Paz para justificar su estado civil, existencia é identidad, puesto que el decreto de 15 de abril próximo pasado, no exige este requisito, el que, por otra parte, no tendría objeto, desde luego que esta información no tiene otros efectos que los que el mismo decreto citado determina.

2.^a No estableciendo el decreto de 15 de abril próximo pasado cada cuanto tiempo deben los pensionistas justificar su existencia, etc., debe estarse á lo dispuesto por el decreto de 4 de octubre de 1893, que impone á los pensionistas la obligación de revistar por acto propio cada tres meses.

3.^a No puede imponerse á los Jueces de Paz la obligación

de concurrir al domicilio de los pensionistas cuando éstos estén impedidos de concurrir al Juzgado, en cuyo caso el pensionista podrá solicitar la comparecencia del Juez, pero abonando las costas causadas.

4.^a No hay inconveniente en que uno de los testigos firme por el pensionista que no sepa hacerlo. (Vista Fiscal de 12 de junio de 1901 y resolución del Ministerio de Hacienda de 25 de junio de 1901).

Por analogía con lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil, el Juez de Paz que se encuentre en el caso de producir la información exigida por el decreto de 12 de abril próximo pasado, debe recurrir al más inmediato. Basta la comparecencia de los testigos, sin que haya necesidad de que el recurrente justifique su calidad de pensionista. La anotación debe ser trimestral. (Vista Fiscal de 1.º de julio de 1901 y resolución del Ministerio de Hacienda de 8 de julio de 1901).

POLICIANOS Y BOMBEROS

PENSIÓN DE INVALIDEZ

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º Desde la promulgación de la presente ley, todos los empleados policiales y del Cuerpo de Bomberos que debido á actos originados de servicio, resulten inválidos, disfrutarán mientras vivan, desde que quedaron tales, las dos terceras partes del sueldo correspondiente á su cargo, transmitiéndose en caso de fallecimiento á su viuda, mientras no contraiga nuevo matrimonio, ó á los hijos hasta la edad de veintiún años, siendo varones, y siendo mujeres mientras permanezcan solteras y á falta de éstas las madres viudas.

Art. 2.º Las viudas é hijos y las madres viudas en el caso del artículo anterior de los que fallecieron por accidente de servicio en el cumplimiento de sus deberes, gozarán de una pensión equivalente á las dos terceras partes del sueldo que perciban sus causantes, conforme á lo establecido en el artículo primero.

Art. 3.º La calidad de inválido para obtener el goce de la pensión á que se refiere el artículo 1.º se justificará por reconocimiento de la persona que lo solicite ante el Honorable Consejo de Higiene Pública.

Art. 4.º Para gozar los beneficios de esta ley, será necesario justificar residencia en el país.

Art. 5.º el Poder Ejecutivo reglamentará esta ley.

Art. 6.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo, 4 y 5 de mayo de 1892.

MIGUEL HERRERA Y OBES,
Presidente.

Manuel García y Santos,
Secretario Redactor.

Ministerio de Gobierno.

Montevideo, 9 de mayo de 1892.

Cúmplase, etc.

HERRERA Y OBES.

FRANCISCO BAUZÁ.

DECRETO REGLAMENTARIO

Ministerio de Gobierno.

Montevideo, 16 de mayo de 1892.

El Presidente de la República, reglamentando la ley de fecha 9 del corriente de conformidad con lo preceptuado en su artículo 5.º, acuerda y

DECRETA:

Artículo 1.º Las personas que se encuentren comprendidas en el caso determinado por el artículo 1.º de la ley y deseen ampararse de sus beneficios, deberán presentarse ante este Ministerio á justificar su calidad de inválidos dentro del

término de seis meses de que resultaron tales, vencido cuyo plazo se considerará extinguido todo derecho para entablar acción (1).

Se exceptúan de la disposición anterior los que residan en los departamentos de Campaña y que por accidentes ú otras causas se hallen imposibilitados de trasladarse á la capital para someterse al reconocimiento prescrito ante el Honorable Consejo de Higiene Pública. En estos casos los señores Jefes Políticos les proveerán de todos los medios de locomoción necesarios, expidiéndoles pasajes oficiales previo aviso de práctica.

Art. 2.º Las viudas é hijos y las madres viudas en los casos que con arreglo á la ley quieran optar á la pensión que les corresponde, deberán presentarse, al entablar su gestión ante este Ministerio acompañadas respectivamente de los siguientes recaudos: partidas de matrimonio y defunción de

(1) Por la siguiente ley se declaró contrario al espíritu de la del 9 de mayo de 1892, este artículo reglamentario:

LEY DEROGANDO PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 1.º DE LA REGLAMENTACIÓN

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º Declárase que el artículo 1.º del decreto del Poder Ejecutivo de fecha 16 de mayo de 1892 que reglamenta la ley de 9 del propio mes y año, es contrario al texto y espíritu de ésta en la parte que dispone la extinción del derecho á las pensiones que la misma acuerda.

Art. 2.º Vuelva el peticionario don Isidoro Pereira ante el Poder Ejecutivo, para que se conceda la pensión que le corresponde por la ley, devolviéndosele el expediente que ha presentado.

Art. 3.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo, á 7 de julio de 1903.

ANTONIO M. RODRÍGUEZ,
Presidente.

Manuel García y Santos,
Secretario Redactor.

Ministerio de Gobierno.

Montevideo, 10 de julio de 1903.

Cúmplase. acúsese recibo, comuníquese, publíquese é insértese en el R. N.

BATLLE Y ORDÓÑEZ.

JUAN CAMPISTEGUY.

sus causantes, partida de nacimiento y certificación de matrimonio y viudedad.

De estos antecedentes el Ministerio recabará informe de la Contaduría General del Estado y oído el dictamen Fiscal se otorgará la pensión que con arreglo á la ley corresponde.

Los que se encuentren comprendidos en el inciso anterior deberán ejercer su acción dentro del término de seis meses, á contar desde el día del fallecimiento de sus causantes y vencido cuyo plazo sólo tendrán derecho á percibir sus pensiones desde la fecha en que inicien los trámites para obtenerla.

Quedan excluidos de la pena impuesta en el inciso anterior los menores que se encuentren bajo la guarda de tutores ó curadores.

Art. 3.º La justificación de residencia que preceptúa la ley, deberán acreditarla los interesados conforme á disposiciones análogas vigentes.

Art. 4.º Comuníquese, etc.

HERRERA Y OBES.

FRANCISCO BAUZÁ.

JUBILACIONES Y PENSIONES ESCOLARES

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:

CAPÍTULO I

DISPOSICIÓN PRELIMINAR

Artículo 1.º Las prescripciones de esta Ley obligan y favorecen exclusivamente á los empleados de la Dirección General de Instrucción Pública que en seguida se expresan:

- 1.º A los ayudantes de ambos sexos.
- 2.º A los maestros y maestras sin excepción.
- 3.º A los inspectores, sea cual sea su denominación, si son ciudadanos ó entrasen á serlo dentro del término de noventa días después de promulgada la presente Ley.
- (1) 4.º A los directores y directoras, subdirectores y subdi-

(1) Por ley del 12 de octubre de 1904, este inciso fué sustituido por el siguiente:

«A los directores, subdirectores, profesores y secretarios de los Institutos Normales y Escuelas de Aplicación, al secretario, contador y empleados de la Caja escolar de Jubilaciones y Pensiones, al secretario y prosecretario, al contador y tesorero de la Dirección General de Instrucción Pública, al jefe de Oficina y al oficial primero contador del impuesto de Instrucción Pública, á los secretarios tesoreros de las Comisiones Departamentales de Instrucción Primaria, á los auxiliares de éstas, al secretario de la Comisión Departamental de Instrucción Primaria de Montevideo y á los vocales de la Dirección General que hayan desempeñado el magisterio».

Véase además: Decreto ley del 29 de agosto de 1877; reforma del 12 de enero de 1885, decreto y resolución del 21 de abril de 1883, 8 de enero de 1885 y ley del 26 de julio de 1897.

rectoras, secretarios y secretarias de los Internatos y Escuelas de Aplicación (1).

CAPÍTULO II

DE LA CAJA ESCOLAR DE JUBILACIONES Y PENSIONES

Artículo 2.º Créase una Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones, destinada á correr con el servicio de las jubilaciones y pensiones comprendidas en la presente Ley.

Art. 3.º Dicha Caja estará á cargo de un Consejo Administrativo compuesto de los miembros de la Dirección General de Instrucción Pública, del director del Internato Normal de Varones y de la directora del Internato Normal de Señoritas.

Ejercerá las funciones de Presidente el Inspector Nacional de Instrucción Pública y las de Vice el miembro de la Dirección que tenga más edad.

Art. 4.º La Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones se formará con las siguientes asignaciones:

1.º Con una entrega mensual del Estado equivalente al tres por ciento de los sueldos del personal docente de las escuelas primarias de toda la República.

Esta entrega se hará durante diez años consecutivos.

2.º Con el cinco por ciento de lo que produzca el impuesto de herencias y donaciones.

A medida que la Dirección General de Instrucción Pública perciba el impuesto entregará aquella cuota á la Caja Escolar.

(2) 3.º *Con un descuento forzoso de tres por ciento sobre los sueldos de las personas indicadas en el artículo 1.º de la presente Ley y sobre las jubilaciones que obtengan esas mismas personas.*

(1) Este artículo tiene además, según ley del 9 de junio de 1896 el siguiente inciso:

«No son aplicables á los profesores y profesoras de asignaturas especiales en dichos Internatos ni á ningún empleado que figure extra presupuesto».

(2) Por ley del 12 de octubre de 1904 este inciso fué modificado así: «Con un descuento forzoso de 4 % sobre los sueldos de las personas indicadas en el artículo 1.º de la presente ley y de 6 % sobre las jubilaciones que obtengan esas mismas personas».

La Dirección General de Instrucción Pública hará el descuento en cada pago de sueldos y pasará inmediatamente su importe á la Caja Escolar.

- 4.º Con la diferencia del primer mes de sueldo, cuando alguna de las personas indicadas en el artículo 1.º de la presente Ley, pase á ocupar un empleo mejor rentado que el que antes desempeñaba.
- 5.º Con la entrega de tres por ciento de los sueldos deven-
gados por las personas que no pagan actualmente Montepío y quieran hacer valer sus años de servicios anteriores á la promulgación de esta Ley, en el cómputo de su jubilación ó de la pensión que transmitirán á sus herederos (1).
- 6.º Con las donaciones ó legados de los particulares.
- 7.º Con los intereses y frutos de los fondos públicos ú otros bienes que la Caja adquiera.

Art. 5.º Cuando á juicio del Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones haya exceso de fondos para atender al pago corriente de las obligaciones de la Caja, deberá colocar dicho exceso en fondos públicos de renta.

La adquisición se hará por llamado á licitación, y en igual forma se hará la enajenación si llega á ser necesaria, previa autorización del Poder Ejecutivo.

Art. 6.º El Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones está especialmente obligado:

- 1.º A velar por la fiel observancia de las prescripciones que la Ley establece para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones.
- 2.º A cuidar de que no continúe en el goce de ellas ninguna persona que haya perdido el derecho á percibir las.
- 3.º A rendir cuenta mensual de sus operaciones á la Contaduría General del Estado, publicando mes á mes el estado correspondiente.
- 4.º A elevar al Ministerio de Fomento al fin de cada ejercicio económico una Memoria completa sobre la situación de la Caja, acompañada de una nómina de jubila-

(1) Los artículos 3.º y 4.º de la ley del 12 de octubre de 1904 aumentan á 4 % y 6 % respectivamente, las cuotas para los empleados á que hace extensiva la jubilación y para los que pueden acogerse á los beneficios de la ley de 28 de mayo de 1896 y no lo hubiesen hecho anteriormente,

dos, pensionistas y empleados que sufren el descuento ordenado por el inciso 3.º del artículo 4.º de la presente Ley.

Dicha Memoria y sus anexos se publicarán en la Memoria anual del Ministerio de Fomento.

5.º A darse un reglamento interno, sometiéndolo á la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 7.º Serán inembargables los bienes de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones.

CAPÍTULO III

DE LAS JUBILACIONES

(1) *Artículo 8.º Las personas indicadas en el artículo 1.º de la presente Ley, podrán jubilarse con goce de sueldo íntegro y sin necesidad de justificar que se han inutilizado en el servicio público, siempre que tengan más de veinticinco años de servicios, habiendo llegado el postulante á cuarenta y cinco años de edad, si es mujer, y á cincuenta y cinco si es hombre.*

Bastará la edad de cincuenta años en los hombres si cuentan treinta de servicios.

Art. 9.º Fuera de los casos excepcionales previstos en el artículo anterior, la jubilación es un favor que la ley concede á aquellos que con más de diez años de servicios á la instrucción primaria del Estado prueben acabadamente la imposibilidad de continuar en el ejercicio de su cargo, por enfermedad, achaques ó avanzada edad (2).

(3) *Art. 10. La jubilación será de tantas veinticinco avas*

(1) Por ley del 12 de octubre de 1904, este artículo fué modificado así:
«Las personas indicadas en el artículo 1.º de la presente Ley, podrán jubilarse sin necesidad de justificar que se han inutilizado en el servicio público, siempre que tengan más de veinticinco años de servicios».

(2) La ley del 12 de octubre de 1904, (artículo 2.º) concede también pensión ó retiro á los empleados que habiendo prestado servicio por más de diez años, cesen por supresión del cargo.

(3) Modificado por la ley del 12 de octubre de 1904, así:

«La jubilación mensual, será igual á tantas veinticinco avas partes cuantos sean los años de servicio que el que la obtenga haya prestado á la Instrucción Pública Primaria.

«Las veinticinco avas partes á que se refiere el inciso anterior, se tomarán sobre los promedios de las mensualidades percibidas en la última mitad del tiempo por el cual se decreta la jubilación.

«No se tomarán en cuenta los sobresueldos, gratificaciones ó otras recompensas extraordinarias».

partes del sueldo que goce el postulante, como sean los años de servicios que haya prestado á la instrucción primaria del Estado.

No se tomarán en cuenta las fracciones de años ni sobresueldos, gratificaciones ú otras recompensas extraordinarias.

Art. 11. Ninguna jubilación podrá exceder del sueldo íntegro del último empleo que se haya desempeñado.

Art. 12. Los servicios que dan derecho á jubilación pueden haber sido continuos ó interrumpidos, pero en ningún caso y por ningún motivo se acumularán servicios prestados en otras reparticiones públicas.

Art. 13. La persona que haya sido enjuiciada y condenada á pena de Penitenciaría por delito cometido en el ejercicio de sus funciones docentes, pierde todo derecho á contar para los efectos de la jubilación los años de servicios anteriores á la comisión del delito.

Art. 14. Una vez adquirida la jubilación, el derecho á percibirla sólo se extingue por causa de muerte del jubilado ó jubilada.

Art. 15. La jubilación debe solicitarse so pena de nulidad, ante el Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones.

(1) *Art. 16. Si la solicitud se fundase en servicios de más de veinticinco años (artículo 8.º) deberá ir acompañada de la partida de nacimiento del postulante.*

El Consejo recabará de la Contaduría de la Dirección General de Instrucción Pública los informes que correspondan, y con su propio dictamen sobre el caso elevará el expediente al Ministerio de Fomento.

Art. 17. Si la solicitud se fundase en que el postulante se halla en la imposibilidad de continuar en el ejercicio de su cargo (artículo 9.º), el Consejo Administrativo, después de recibir los datos de la Contaduría, se dirigirá al Consejo Nacional de Higiene Pública pidiéndole se sirva informar sobre el particular, y una vez obtenido este informe formará su dictamen y elevará el expediente.

(1) Por la ley del 12 de octubre de 1904, este artículo fué modificado así: «Si la solicitud se fundase en servicio de más de veinticinco años (artículo 8.º) el consejo recabará de la Contaduría de la Dirección General de Instrucción Pública ó de la del Estado en su defecto los informes que correspondan, y con su propio dictamen sobre el caso, elevará el expediente al Ministerio de Fomento».

(1) *Art. 18. Cuando el postulante resida fuera del Departamento de la Capital, el Consejo Nacional de Higiene Pública encargará el examen profesional á uno de los médicos de policía del Departamento donde aquél resida.*

Art. 19. Una vez recibido el expediente en el Ministerio de Fomento, si estuviere en forma, se dará vista por su orden á la Contaduría General del Estado y al Fiscal de Gobierno.

Evacuadas esas vistas, el Poder Ejecutivo adoptará la resolución que corresponda, devolviendo el expediente á la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones, previa anotación en la Contaduría General si se hubiese concedido la jubilación.

Art. 20. Corresponde al Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones extender las cédulas de jubilaciones, suscribiéndolas todos sus miembros con expresa mención del Decreto del Poder Ejecutivo en cuya virtud se acuerda la jubilación y se fija su monto de conformidad á la presente Ley.

Dichas cédulas llevarán además el visto bueno del Ministro de Fomento.

Art. 21. Empezará á correr la jubilación desde el día en que el jubilado haya cesado en el desempeño activo de su cargo (2).

CAPÍTULO IV

DE LAS PENSIONES

Artículo 22. La viuda y los hijos legítimos y solteros de los hombres comprendidos en el artículo 1.º de la presente Ley que fallezcan desempeñando su cargo en la Instrucción Primaria del Estado, tendrán derecho á una pensión igual á la mitad del monto de la jubilación que hubiere correspondido á su causante, si en vez de fallecer se hubiese inutilizado para el servicio público.

Art. 23. Cuando sea mujer casada la persona que fallezca

(1) Por la ley del 12 de octubre de 1904, este artículo fué modificado así: «Cuando el postulante resida fuera del Departamento de la Capital, el Consejo Nacional de Higiene encargará el examen profesional á uno de los médicos de policía del Departamento, quien deberá practicarlo acompañado de otro facultativo designado por el mismo Consejo y que resida en la misma localidad ó en el mismo Departamento, debiendo correr su remuneración por cuenta del interesado».

(2) Véase el decreto reglamentario de esta ley (artículo 14) y la resolución aclaratoria del 7 de septiembre de 1900.

desempeñando su cargo, corresponderá á sus hijos legítimos y solteros la misma pensión determinada en el artículo anterior.

Art. 24. Siendo soltero ó soltera la persona fallecida, si tiene madre viuda y desvalida, ésta gozará de la misma pensión que correspondería á sus hijos.

Art. 25. Las personas que se jubilen con sujeción á la presente Ley, transmitirán pensión á la viuda, hijos ó madres en su caso, según las mismas reglas establecidas en los tres artículos anteriores.

Dicha pensión será siempre de la mitad de la jubilación que disfrutaba el causante.

Art. 26. La esposa ó madre viuda perderá el derecho á la pensión en los siguientes casos:

- 1.º Si contrae segundas nupcias.
- 2.º Si no vive con honestidad.

Cada tres meses esas pensionistas acreditarán con un certificado del Juez de Paz de su domicilio que se conservan viudas y observan conducta regular.

Art. 27. Los hijos perderán derecho á la pensión:

- 1.º Cuando contraigan matrimonio.

(1) 2.º *Cuando hayan cumplido diez y siete años los varones y veintiuno las mujeres.*

Para justificar que no están en el primer caso los que tengan edad legal para casarse, será obligatoria la presentación del certificado trimestral previsto en el artículo anterior.

Art. 28. Cuando la pensión corresponda á la viuda é hijos, todos disfrutarán de ella en común.

Art. 29. Cuando la pensión de los hijos proceda de la madre empleada ó jubilada en la Instrucción Primaria del Estado, si tienen padre vivo, éste la recibirá en ejercicio de la patria potestad, con cargo de emplearla exclusivamente en la manutención y educación de los hijos.

Cuando los hijos pensionistas sean huérfanos de padre y madre, el tutor recibirá la pensión con la misma obligación impuesta al padre en su caso.

(1) Por la ley del 12 de octubre de 1904, este inciso fué modificado así: «Cuando hayan cumplido diez y siete años los varones. Las mujeres gozarán de la pensión que les acuerda la ley mientras se conserven solteras y justifiquen su buena conducta».

Esta modificación, según el artículo 5.º de la ley del 12 de octubre de 1904, alcanza á los jubilados antes de su sanción.

Art. 30. Siempre que sean varias las personas llamadas á disfrutar de la pensión, si alguna de ellas pierde su derecho á percibirla, la parte que le corresponde acrece á las demás.

Art. 31. Si á la muerte del causante de una pensión quedan hijos huérfanos de distintos matrimonios, la pensión se distribuirá por iguales partes entre todos ellos, entregándose á sus respectivos representantes legales.

Si concurre la viuda, ella por si sola representará dos partes.

Art. 32. Cuando la viuda pensionista tenga hijos á quienes también pertenece la pensión, y pierda su derecho por razón de mala conducta (artículo 26), el Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y pensiones comunicará el hecho al juez competente de la residencia de los hijos, para que los provea de tutor ó curador á quien deba entregarse la pensión.

Art. 33. Los deudos que al tiempo de fallecer el causante de la pensión estén sufriendo condena de pena de Penitenciaría, pierden todo derecho á aquélla.

Igualmente lo pierde todo pensionista que sea enjuiciado y condenado á la misma pena.

Art. 34. Toda solicitud de pensión se presentará, so pena de nulidad, al Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones.

Art. 35. Acompañará á la solicitud la partida de defunción de la persona cuyo derecho se invoca, y las demás partidas del Estado Civil de los que se consideran sus causahabientes — y todos los demás recaudos necesarios para justificar que el postulante se halla en las condiciones de la ley.

Art. 36. Estando la solicitud suficientemente instruída con arreglo al artículo anterior, el Consejo Administrativo de la Caja Escolar procederá en seguida como se prescribe en el inciso 2.º del artículo 16.

Es igualmente aplicable á las pensiones lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 del mismo capítulo.

Art. 37. Toda pensión legalmente acordada empieza á correr desde el día siguiente al fallecimiento de la persona que le dé origen.

Art. 38. Cuando alguna de las personas indicadas en el artículo 1.º de esta Ley fallezca sin tener diez años de servicio en la instrucción primaria del Estado, su viuda, hijos menores, ó madre viuda en su caso, recibirán como único auxilio de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones cuatro mensualidades del sueldo que aquélla disfrutaba.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES Á LAS JUBILACIONES Y PENSIONES QUE AUTORIZA LA PRESENTE LEY

Artículo 39. Es absolutamente nula toda enajenación ó afectación de jubilaciones ó pensiones no devengadas.

Sean éstas devengadas ó futuras, se declaran totalmente inembargables.

Art. 40. Las pensiones ó jubilaciones acordadas con arreglo á la presente ley, no pueden acumularse á ningún otro sueldo ó pensión del Estado y sus dependencias.

Art. 41. Ningún jubilado ó pensionista de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones, podrá ausentarse del territorio nacional sin licencia del Consejo Administrativo de dicha Caja.

En caso de infracción perderá el jubilado ó pensionista el sueldo correspondiente al tiempo de ausencia indebida.

En el transcurso de un año, nadie podrá recibir más de tres meses de licencia con goce de jubilación ó pensión.

Art. 42. Las personas comprendidas en el artículo 1.º de la presente Ley y que por haber entrado al servicio público antes del siete de septiembre de mil ochocientos setenta y seis paguen Montepío al Estado, se jubilarán y transmitirán pensión con arreglo á la Ley de 5 de mayo de 1838 y con independencia de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones, si no prefieren ampararse de las disposiciones de la presente.

Para optar este último extremo, se les acuerda un plazo improrrogable de tres meses, durante el cual podrán presentarse por escrito ante el Consejo Administrativo de la Caja Escolar, haciendo la manifestación del caso. Llenado este requisito, dejarán de pagar Montepío al Estado y sufrirán el descuento de tres por ciento de su sueldo á beneficio de la Caja Escolar. (Artículo 4.º inciso 3.º) (1).

Art. 43. Las personas comprendidas en el artículo 1.º de la presente Ley y que no paguen actualmente Montepío, si

(1) Por ley del 16 de julio de 1903, se autorizó al Poder Ejecutivo para declarar comprendidos en este artículo 42, previo dictamen de la Dirección de Instrucción Pública, á los miembros del personal docente que hubieran entrado al ejercicio del empleo escolar antes del 7 de septiembre de 1876.

quieren obtener el derecho de que los servicios prestados á la Instrucción Primaria del Estado con anterioridad á la promulgación de esta Ley se computen oportunamente para la jubilación ó para transmitir pensión, están obligadas á declararlo por escrito ante el Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones, dentro del plazo improrrogable de un año á contar desde dicha promulgación.

Vencido el año sin que hayan hecho la declaración mencionada, sólo se les computarán los servicios posteriores á la misma promulgación ⁽¹⁾.

Art. 44. La declaración de que habla el artículo anterior expresará la voluntad de pagar el tres por ciento de todos los sueldos devengados. (Art. 4.º inciso 5.º).

El pago podrá hacerse al contado, y en este caso el Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones hará al postulante un descuento de diez por ciento sobre la suma que deba pagar, —ó por cuotas mensuales de cinco por ciento de la cantidad total. Esas cuotas serán mensualmente descontadas del sueldo del postulante por la Dirección General de Instrucción Pública, que las pasará en seguida á la Caja Escolar ⁽²⁾.

Art. 45. Si llega el caso de obtener jubilación ó transmitir pensión la persona que todavía adeude parte de las cuotas mensuales á que hace referencia el artículo anterior, la Caja Escolar se cobrará de ellas mensualmente sobre la jubilación ó pensión acordada.

Art. 46. Los que tengan derecho á pensión en representación de persona que fallezca dentro del plazo de que habla el artículo 43 sin que dicha persona haya hecho la declaración enunciada en el mismo artículo, podrán pedir al Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones que se computen los servicios anteriores á la promulgación de la presente ley, mediante el pago de tres por ciento de los sueldos devengados por aquellos servicios, en una de las dos formas que señala el artículo 44 ⁽³⁾.

(1) Véase la ley del 22 de octubre de 1897 y la del 12 de octubre de 1904 (artículos 3.º y 4.º).

(2) Véase la ley del 22 de octubre de 1897 y la del 12 de octubre de 1904 (artículos 3.º y 4.º).

(3) Debe considerarse extensiva á esta prescripción la reforma que en las cuotas introdujo la ley del 12 de octubre de 1904, en los artículos 3.º y 4.º.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 47. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley.

Art. 48. Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo, á 26 de mayo de 1896.

DUNCAN STEWART,
Presidente.

Santiago Maciel,
Secretario relator.

Ministerio de Fomento.

Montevideo, 28 de mayo de 1896.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese á quienes corresponda, insértese en el R. N. y publíquese.

IDIARTE BORDA.

JUAN JOSÉ CASTRO.

Ley complementaria

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º El artículo 1.º de la Ley de Jubilaciones del Cuerpo Docente, promulgada con fecha 28 de mayo último, debe tener por inciso final el siguiente:

«No son aplicables á los profesores y profesoras de asignaturas especiales en dichos Internatos, ni á ningún empleado que figure extra presupuesto.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo, á 9 de junio de 1896.

DUNCAN STEWART,
Presidente.

Manuel García y Santos,
Secretario redactor.

Ministerio de Fomento.

Montevideo, 16 de junio de 1896.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese é insértese en el R. N.

IDIARTE BORDA.

JUAN JOSÉ CASTRO.

Decreto reglamentario de la Ley de jubilaciones y pensiones del cuerpo docente

Ministerio de Fomento.

Montevideo, 8 de julio de 1897.

El Presidente de la República, reglamentando la Ley de 28 de mayo de 1896, acuerda y

DECRETA:

Artículo 1.º Corresponde al Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones, la dirección y superintendencia sobre las oficinas y personal destinado á su servicio, de acuerdo con lo que establece el presente Decreto.

Art. 2.º El Consejo Administrativo propondrá al Poder Ejecutivo el nombramiento de todos los empleados que deban constituir el personal de la Caja Escolar, de conformidad con la presente reglamentación.

Art. 3.º La contabilidad de la Caja, creada por el artículo 2.º de la Ley que se reglamenta y á la que le incumbe, preceptivamente, el servicio de las jubilaciones y pensiones comprendidas en la misma, estará á cargo de un empleado especial denominado contador de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo de Contador Interventor.

Art. 4.º Los fondos de la Caja Escolar constituidos con las asignaciones y descuentos determinados especialmente por el artículo 4.º de la referida Ley, estarán bajo la custodia de otro empleado llamado Tesorero de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones.

Art. 5.º El Tesorero de la Caja Escolar será mayor de edad y deberá prestar una fianza de diez mil pesos oro, hipotecaria ó prendaria, constituida en este caso por fondos públicos aforados á un tipo diez puntos inferior al de su cotización oficial.

Esos fondos se depositarán en el Banco de la República.

Art. 6.º Es obligación del Tesorero desempeñar las funciones de Secretario de la Caja Escolar.

Esta acumulación de funciones es provisional, ó sea, hasta tanto el movimiento ó multiplicidad de operaciones de Caja no haga indispensable la división de cargos, sustituyéndose éstos, así como el de Contador Interventor, con la creación de la Contaduría, Secretaría y Tesorería dependientes del Consejo.

Art. 7.º El Contador de la Caja Escolar deberá presentar al Consejo Administrativo, dentro de la primera quincena de cada mes, un estado demostrativo de los ingresos y egresos que haya tenido la Caja en el mes anterior, debidamente instruido, documentado y comprobado.

Art. 8.º Al mismo Contador Interventor incumbe la confección de un estado general y anexos que correspondan, relativo á cada ejercicio económico y con sujeción en un todo á las disposiciones contenidas en el decreto de 13 de junio de 1890, que deberán considerarse parte integrante de esta reglamentación, en lo concerniente á contabilidad, rubricación de libros matrices, épocas de presentación de estados generales, etc.

Art. 9.º El estado general y anexos á que se refiere el artículo anterior, reflejará por su forma circunstanciada, la situación económica de la Caja Escolar, y servirá para la confección de la Memoria relativa al mismo período, que ha de elevar el Consejo Administrativo oportunamente al Ministerio de Fomento, con la nómina de jubilados, pensionistas y empleados que soportan el descuento de 3 %, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4.º del artículo 6.º de la Ley que se reglamenta (1).

Art. 10. A los efectos del estado general á confeccionarse, el Contador sentará textualmente, y en forma estadística, en un libro especial denominado de *Balances*, los estados mensuales que le incumbe formular, para ser elevados por el Consejo á la Contaduría General del Estado, con todas sus relaciones de ingresos y egresos y comprobantes originales de pago, ordenados en la forma de estilo.

De conformidad con las disposiciones del artículo 6.º de la Ley, los estados mensuales se publicarán por el Consejo, y la Memoria y sus anexos se insertarán en la relativa al Ministerio de Fomento.

Art. 11. El Contador Interventor deberá llevar también por separado los Registros especiales de jubilaciones y pensiones, en los cuales anotará íntegramente las que se concedan por la Caja Escolar, indicándolas convenientemente.

Art. 12. Será también de cargo del Contador la liquidación mensual del 5 % del producto del impuesto de herencias y donaciones, pasándolo á la Dirección General de Instrucción Pública para que éste efectúe el pago á la Caja Escolar.

Igualmente le compete la liquidación mensual de los presupuestos de jubilados y pensionistas con arreglo á lo que resulte de los registros de unos y otros, y con sujeción á las constancias de verificación de existencia que conforme á la legislación vigente deben observar ambos interesados, asentándose éstas por el mismo Contador en un libro especial apropiado al objeto á que se le destina, y que se denominará de *Justificación de existencia*.

Art. 13. Sobre las bases fundamentales de la intervención é imputación de rubros previos por el Contador y á las que deben estar sujetas todas las operaciones de ingresos y egresos de la Caja Escolar, el Consejo Administrativo formulará

(1) Véase la ley del 12 de octubre de 1904, por lo que se refiere á la cuota.

el Reglamento interno de las oficinas de su dependencia, con determinación específica de los deberes, atribuciones y responsabilidades que respectivamente les incumben, sometién-dolo á la aprobación del Poder Ejecutivo.

Los libros auxiliares de estas dependencias serán rubrica-dos únicamente por el Consejo, ó por el jefe de la oficina á cuyo servicio se destinan.

Art. 14. El goce de las jubilaciones de que trata la Ley no podrá exceder del sueldo que fije el Presupuesto General de Gastos en el año en que se pidan, y se devengarán desde el día en que los jubilados hayan cesado en el desempeño activo de sus cargos, conforme á los artículos 11 y 21 de la misma ley.

Art. 15. A los efectos de acreditar el derecho á la jubila-ción no extinguida, en el caso expresado en el artículo 14 de la Ley, los interesados que residan en el Departamento de la Capital deberán mensualmente efectuar su presentación per-sonal á la Contaduría de la Caja (artículo 12 de este De-creto), y los que tengan su domicilio en campaña, comparece-rán en la misma oportunidad ante los respectivos Inspectores Departamentales de Instrucción Primaria.

Los que se presentaren por poder deberán acompañar cada dos meses un certificado del Oficial del Estado Civil del do-micilio del interesado, acreditando su existencia.

En caso de imposibilidad física para presentarse, motivada por enfermedad, deberá ella justificarse con certificado mé-dico.

Tratándose de los que estuvieren ausentes del territorio nacional con licencia del Consejo Administrativo de la Caja Escolar, acordada por más del tiempo de que habla el inciso 1.º de este artículo, la justificación de existencia deberá ha-cerse por medio de certificados de los Cónsules de la Repú-blica y autoridad que ejerza sus funciones.

Las obligaciones establecidas en este artículo son extensi-vas á las pensionistas y deben entenderse sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley.

Art. 16. Los Inspectores Departamentales de Instrucción Primaria pasarán mensualmente al Consejo Administrativo una nómina de los jubilados y pensionistas que hayan com-parecido ante ellos en observancia á lo dispuesto en el ar-tículo precedente, á efecto de que sean comprendidas sus asignaciones en la liquidación que debe practicar el Contador Interventor, conforme el artículo 12 de este Decreto.

Art. 17. La falta de cumplimiento á las obligaciones determinadas en el artículo 15, será penada con un descuento de 20 %, que en beneficio de la Caja sufrirán los interesados sobre sus respectivas pensiones correspondientes al tiempo en que hayan dejado de cumplirlas.

Art. 18. El personal de empleados de la Caja Escolar comprensivo actualmente del Contador y Secretario-Tesorero, gozará de las asignaciones siguientes: Contador, pesos 80 mensuales; Secretario-Tesorero, pesos 90 mensuales. Esta fijación es provisional hasta tanto se dividan las funciones del Secretario y del Tesorero, debiendo tenerse presente para entonces que el Contador ha de gozar una asignación superior á la de aquéllos, en razón de las atribuciones y superintendencia que ha de ejercer en materia de contabilidad y fiscalización.

Estas asignaciones se imputarán al rubro de Eventuales de Fomento, en tanto no se sancione el Presupuesto General de Gastos.

Art. 19. De conformidad con los artículos 15 y 34 de la Ley, toda solicitud de jubilación ó de pensión se presentará, so pena de nulidad, al Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones, el cual, exigiendo los recaudos del caso, las sustanciará en la forma prevenida por la misma.

Art. 20. A los efectos del pago de la cuota impuesta á Rentas Generales por el inciso 1.º, artículo 4.º de la Ley, durante el término de diez años, la Contaduría General liquidará mensualmente el importe de dicha cuota, como un presupuesto especial adscrito á la Lista Civil de Fomento, á fin de que su pago á la Caja se verifique por Tesorería en la debida oportunidad. Esta nueva asignación legal deberá tenerse presente por la Secretaría de este Ministerio, para que sea incluida en el Presupuesto General de Gastos de cada ejercicio económico.

Art. 21. En cuanto á las cuotas correspondientes al período de 1.º de junio de 1896 á 30 del mes próximo pasado, la Contaduría General liquidará igualmente su importe total, incluyéndolo por sextas partes en la liquidación que ha de practicar desde el corriente mes, según el artículo precedente, á fin de que con el pago del presupuesto de Diciembre queden satisfechas en su totalidad.

Art. 22. La misma Contaduría General, en ejercicio de las atribuciones fiscales que le confieren las disposiciones vigen-

tes, deducirá ante el Consejo Administrativo de la Caja Escolar las observaciones á que puedan prestarse las cuentas que mensualmente se le remitan, de conformidad á lo que dispone el inciso 3.º del artículo 6.º de la Ley.

Art. 23. Comuníquese, etc.

IDIARTE BORDA.

JUAN J. CASTRO.

Nuevo plazo para optar á la jubilación y pago de cuotas

Poder Legislativo.

*El Senado y Cámara de Representantes de la República
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,*

DECRETAN:

Artículo 1.º Acuérdase un plazo de sesenta días contados desde la promulgación de esta ley, para que puedan presentarse al Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones, las personas comprendidas en el artículo 1.º de la Ley de 28 de mayo de 1896, y que por cualquier motivo no hubieran podido verificar el acto de opción á que se refiere el artículo 42 de dicha ley.

Art. 2.º Las que hallándose en las circunstancias previstas por el artículo 43 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones quieran pagar el tres por ciento de los sueldos devengados á que se refieren los artículos 40 y 44 de la misma, podrán verificarlo de contado con un descuento de diez por ciento sobre la suma que deban restituir, ó bien en cuarenta mensualidades iguales y sucesivas.

Art. 3.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, en Montevideo
á 20 de octubre de 1897.

DUNCAN STEWART,
Primer Vicepresidente.

Carlos Muñoz Anaya,
Primer Secretario.

Ministerio de Fomento.

Montevideo. 22 de octubre de 1897.

Cumplase, acúsese recibo, comuníquese, insértese en el R. N. y publíquese.

CUESTAS.

JACOBO A. VARELA.

Cese ó renuncia de empleado que tramita jubilación

Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones.

Montevideo, 7 de septiembre de 1900.

Habiendo dado lugar una resolución del Consejo Administrativo de la Caja Escolar, á que se haya entendido hasta ahora que cuando un empleado, después de haber presentado su solicitud de jubilación, presenta renuncia de su cargo ó cesa en él por cualquier causa, pierde su derecho á obtener la jubilación solicitada;

Habiendo entendido, por otra parte, el Consejo, que los sueldos de los jubilados sólo deben abonárseles á contar desde el momento en que se le expidió la Cédula correspondiente;

Habiendo resultado de esta interpretación, que la Dirección General de Instrucción Pública se ha visto obligada á conceder á los empleados escolares licencias muy largas y aún ilimitadas, violando disposiciones vigentes y con perjuicio evidente de los intereses del servicio; y

Considerando: Que el artículo 21 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, dice textualmente que « Empezará á correr la jubilación desde el día en que el jubilado haya cesado en el desempeño activo de su cargo »;

Considerando: Que el sentido claro y evidente de esta disposición, es subordinar el momento en que se ha de empezar á gozar de la jubilación al momento en que se ha cesado de

desempeñar el cargo, y no, como se ha entendido en la práctica, subordinar este último momento al primero;

Considerando: Que el derecho á la jubilación se adquiere *por el hecho* de haber prestado cierto número de años de servicios, contando con la edad que la Ley fija, ó *por el hecho* de haberse inutilizado después de haber prestado cierto número de años de servicios, sin que ninguna circunstancia ulterior pueda perjudicar ni afectar en lo más mínimo ese derecho ya adquirido;

Considerando: Que el mismo artículo 21 demuestra claramente que, para la Ley, el decreto de jubilación no crea, sino que simplemente declara derechos que han sido adquiridos en los servicios mismos, lo que es muy razonable, pues no sería justo hacer depender el goce de esos derechos, de trámites que pueden ser más ó menos largos, por circunstancias que no dependen del interesado;

Considerando: Que el referido artículo 21, al establecer que la jubilación debe correr desde el momento en que el jubilado haya cesado en el desempeño de su cargo, no ha querido evidentemente perjudicar al empleado, sino favorecerlo, haciendo que el sueldo que le corresponde como jubilado venga á continuar al que disfrutó como empleado;

Considerando: Que la interpretación que hasta hoy se ha dado á la Ley, pone á ésta en contradicción consigo misma, pues se le haría querer, al mismo tiempo, que se otorgase la jubilación á una persona inutilizada para prestar servicios y que esta persona inutilizada continuara prestándolos;

Considerando: Que la misma naturaleza de las licencias quiere que éstas no se otorguen sistemáticamente á personas que van probablemente á abandonar su puesto, sino á las que se presume que van á volver á ejercerlo, y que por consiguiente, no es lógica, además de ser perjudicial, la práctica de otorgarlas como regla general y por largos plazos en los casos de solicitud de jubilación;

Considerando: Que la misma ley ha previsto expresamente el caso de que el empleado *haya cesado* en el desempeño de su cargo, puesto que legisla precisamente para ese caso en el artículo 21;

SE RESUELVE:

- 1.º La renuncia presentada ó el cese decretado después de solicitada la jubilación por un empleado, no perjudican ni afectan en nada su derecho á obtenerla.

- 2.º En caso de obtener un empleado su jubilación en esas condiciones, aquella empezará á correr para él, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones ⁽¹⁾, desde el momento en que cesó en el desempeño activo de su cargo.
- 3.º Para que los empleados que hayan cesado en el desempeño de su cargo antes de habérseles expedido la cédula de jubilación, tengan derecho á percibir los haberes correspondientes al tiempo comprendido entre el cese y la expedición de la Cédula, será necesario que durante ese tiempo se hayan sometido, en las condiciones reglamentarias, á las obligaciones que el artículo 41 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones impone á los jubilados ⁽²⁾.

ABEL J. PÉREZ,
Presidente.

José M. Martínez,
Secretario.

(1) Artículo 21 de la Ley: «Empezará á correr la jubilación desde el día en que el jubilado haya cesado en el desempeño activo de su cargo».

(2) Artículo 41: «Ningún jubilado ó pensionista de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones, podrá ausentarse del territorio nacional sin licencia del Consejo Administrativo de dicha Caja.

En caso de infracción perderá el jubilado ó pensionista el sueldo correspondiente al tiempo de ausencia indebida.

En el transcurso de un año, nadie podrá recibir más de tres meses de licencia con goce de jubilación ó pensión.

Artículo 15 de la Reglamentación de la Ley: «A los efectos de acreditar el derecho á la jubilación no extinguida en el caso expresado en el artículo 14 de la Ley, los interesados que residan en el Departamento de la capital, deberán mensualmente efectuar su presentación personal á la Contaduría de la Caja (artículo 12 de este Decreto) y los que tengan su domicilio en campaña, comparecerán en la misma oportunidad ante los respectivos Inspectores Departamentales de Instrucción Primaria.

Los que se presentaren por poder, deberán acompañar cada dos meses un certificado del Oficial de Estado Civil, del domicilio del interesado acreditando su existencia,

En caso de imposibilidad física para presentarse, motivada por enfermedad, deberá ella justificarse con certificado médico.

Tratándose de los que estuvieren ausentes del territorio nacional con licencia del Consejo Administrativo de la Caja Escolar, acordada por más del tiempo de que habla el inciso 1.º de este artículo, la justificación de existencia deberá hacerse por medio de certificados de los cónsules de la República ó autoridad que ejerza sus funciones.

Empleados escolares anteriores al 7 de Septiembre de 1876

*El Senado y Cámara de Representantes de la República
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,*

DECRETAN:

Artículo 1.º Declárase comprendida en el artículo 42 de la ley de 28 de mayo de 1896 « Jubilaciones y Pensiones del Cuerpo Docente » á la Subinspectora de Escuelas Públicas doña Carmen Della Longa.

Art. 2.º Facúltase al Poder Ejecutivo para acordar análogo favor, previo dictamen de la Dirección de Instrucción Pública, á aquellos miembros del personal docente que se encuentren en situación idéntica á doña Carmen Della Longa (1).

Art. 3.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. en Montevideo,
á 14 de julio de 1903.

JUAN P. CASTRO,
Presidente.

M. Magariños Solsona,
Secretario redactor.

Ministerio de Fomento.

Montevideo, 16 de julio de 1903.

Cumplase, acúsesse recibo, comuníquese á quienes corresponda, insértese en el A. N. y publíquese.

BATLLE Y ORDÓÑEZ.

JOSÉ SERRATO.

(1) La señora Della Longa había entrado á prestar servicio en la Instrucción Pública, antes del 7 de septiembre de 1876 y había pagado Montepío de acuerdo con la ley de 1838.

La ley de jubilaciones y pensiones escolares del 28 de mayo de 1896, concedió á las personas que se hallaban en ese caso, el derecho de optar por ésta, que tiene sobre la de 1838 muchas ventajas.

La ley del 16 de julio de 1903, modifica el artículo 42 de la ley del 21 de mayo de 1896, en el sentido de que pueden ampararse de ésta todos los miembros del personal docente que se hallen en iguales condiciones que la señora Della Longa.

Nuevas modificaciones de la ley de Jubilaciones y Pensiones Escolares

Poder Legislativo.

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º Los artículos 1.º, inciso 4.º; 4.º, inciso 3.º; 8.º, 10, 16, 18 y 27, inciso 2.º de la ley de 28 de mayo de 1896 quedan modificados en la forma siguiente:

« Art. 1.º, Inciso 4.º. A los directores, sub-directores, profesores y secretarios de los Institutos Normales y Escuelas de Aplicación, al secretario, contador y empleados de la Caja escolar de Jubilaciones y Pensiones, al secretario y prosecretario, al contador y tesorero de la Dirección General de Instrucción Pública, al jefe de Oficina y al oficial primero contador del impuesto de Instrucción Pública, á los secretarios tesoreros de las Comisiones Departamentales de Instrucción Primaria, á los auxiliares de éstas, al secretario de la Comisión Departamental de Instrucción Primaria de Montevideo y á los vocales de la Dirección General que hayan desempeñado el magisterio ».

« Art. 4.º Inciso 3.º Con un descuento forzoso del 4 % sobre los sueldos de las personas indicadas en el artículo 1.º de la presente ley y de 6 % sobre las jubilaciones que obtengan esas mismas personas ».

« Art. 8.º Las personas indicadas en el artículo 1.º de la presente ley, podrán jubilarse sin necesidad de justificar que se han inutilizado en el servicio público, siempre que tengan más de veinticinco años de servicios ».

« Art. 10. La jubilación mensual, será igual á tantas veinticinco avas partes cuantos sean los años de servicio que el que la obtenga haya prestado á la Instrucción Pública Primaria ».

» Las veinticinco avas partes á que se refiere el inciso

anterior, se tomarán sobre los promedios de las mensualidades percibidas en la última mitad del tiempo por el cual se decreta la jubilación.

« No se tomarán en cuenta los sobresueldos, gratificaciones ú otras recompensas extraordinarias ».

« Art. 16. Si la solicitud se fundase en servicio de más de veinticinco años (artículo 8.º) el Consejo recabará de la Contaduría de la Dirección General de Instrucción Pública ó de la del Estado en su defecto los informes que correspondan, y con su propio dictamen sobre el caso, elevará el expediente al ministerio de Fomento ».

« Art. 18. Cuando el postulante resida fuera del Departamento de la capital, el Consejo Nacional de Higiene encargará el examen profesional á uno de los médicos de policía del departamento, quien deberá practicarlo acompañado de otro facultativo designado por el mismo Consejo y que resida en la misma localidad ó en el departamento, debiendo correr su remuneración por cuenta del interesado ».

« Art. 27. Inciso 2.º Cuando hayan cumplido diez y siete años los varones. Las mujeres gozarán de la pensión que les acuerda la ley mientras se conserven solteras y justifiquen su buena conducta. »

Art. 2.º Cuando algunas de las personas comprendidas en el artículo 1.º de la ley 28 de mayo de 1896 modificado por la presente ley, haya prestado servicios á la Instrucción Pública Primaria por más de diez años y cese en el desempeño de su cargo por supresión de éste, tendrá derecho á una pensión ó retiro correspondiente á los años de servicios que hubiese prestado.

El monto de dicha pensión será fijado de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la ley de 28 de mayo de 1896, modificado por la presente.

Art. 3.º Los empleados que por esta ley entran á gozar de los beneficios de la de 28 de mayo de 1896, tendrán derecho á hacerse reconocer los servicios prestados anteriormente á la Instrucción Primaria, siempre, que en el plazo de seis meses, se presenten al Consejo Administrativo de la Caja Escolar, manifestando que están dispuestos á abonar el 4 % sobre sus sueldos devengados. La liquidación y pago de esta suma podrá hacerse al contado, y en este caso el Consejo Administrativo de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones hará al postulante un descuento del 10 % sobre la cantidad

total á reintegrar si no prefiere abonarla en cuarenta y ocho mensualidades iguales y sucesivas.

Esas cuotas serán mensualmente descontadas del sueldo del postulante por la Dirección General de Instrucción Pública y por el Consejo de la Caja Escolar respectivamente.

Art. 4.º Concédese un plazo también de seis meses para que puedan acogerse á los beneficios de la ley de 28 de mayo de 1896 (modificada por la presente) las personas, que estando comprendidas en el artículo 1.º de la misma no lo hubiesen hecho anteriormente.

Las personas que se hallen en este caso deberán abonar á la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones el 6 % de sus sueldos devengados con anterioridad al 28 de mayo de 1896.

La liquidación y pago de esta suma se hará en la forma determinada en el artículo anterior.

Art. 5.º La modificación introducida por esta ley al artículo 27, inciso 2.º de la de 28 de mayo de 1896, alcanza á los jubilados en la actualidad con arreglo á las prescripciones de dicha ley.

Art. 6.º El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Art. 7.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, en Montevideo,
á 3 de octubre de 1904.

F. CANFIELD,
Presidente.

E. Laviña,
Segundo Secretario.

Ministerio de Fomento.

Montevideo, 12 de octubre de 1904.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese á quienes corresponda, insértese en el R. N. y publíquese.

BATLLE Y ORDÓÑEZ.

JOSÉ SERRATO.

RETIRO, JUBILACIÓN Y PENSIONES DE EMPLEADOS CIVILES ⁽¹⁾

LEY DE 1838

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:

CAPÍTULO I

DEL RETIRO

Artículo 1.º Todos los empleados civiles que por innecesarios sean separados del servicio, optarán á los goces de un retiro, siempre que estuviesen desempeñando plazas efectivas.

Art. 2.º Los retirados que tengan diez años de servicio, lo serán con la cuarta parte del sueldo que disfrutaban al tiempo de ser separados; los de diez años arriba, la tercera parte; los de veinte años, la mitad; los de treinta, las dos terceras partes, y los de cuarenta, el sueldo íntegro.

Art. 3.º No son comprendidos en los beneficios de los artículos precedentes, los empleados amovibles.

(1) Esta ley rige para los empleados que entraron al servicio público antes del 7 de septiembre de 1876. Véase el decreto-ley de esta fecha y el artículo 49 de la ley del 11 de octubre de 1904; y por lo que toca á los miembros de la magistratura y á los profesores de la Universidad, véase la nota del artículo 18 de la misma ley del 11 de octubre de 1904.

CAPÍTULO II

DE LA JUBILACIÓN

Artículo 4.º Todos los empleados civiles pueden optar á la jubilación siempre que justifiquen haberse inutilizado en servicio público, por achaques, avanzada edad ú otros motivos.

Art. 5.º Los que cuenten treinta años de servicios en plazas efectivas, gozarán todo el sueldo, — los de veinte años, las dos terceras partes; los de quince, la mitad; los de diez, la tercera parte, y los de siete, la cuarta parte.

Art. 6.º Estos goces se declaran por los sueldos que respectivamente les acuerde la ley en el año en que pidan la jubilación.

Art. 7.º Los empleados amovibles, cuando hayan de ser jubilados, además del goce que se les declara, como á los otros empleados, tendrán opción al de un aumento sobre él, de quince por ciento.

Art. 8.º Los jubilados por disposiciones especiales, no pueden optar á los beneficios de esta Ley.

CAPÍTULO III

DEL MONTEPÍO DE MINISTERIO

Artículo 9.º Queda establecido en las arcas públicas un Montepío general de Ministerio al que contribuirán todos los empleados civiles, con el sueldo de un día de cada mes, siempre que disfruten uno mayor que el de trescientos pesos anuales. ⁽¹⁾

Art. 10. El fondo del Montepío hará frente al pago de rentas, de jubilaciones y pensiones, cualquiera que fuese el sueldo de los empleos.

Art. 11. Hasta la sanción de la Ley general de pensiones para viudas de los empleados, las de Ministerio serán declaradas por las disposiciones del Reglamento de Montepío de 7 de febrero de 1770. ⁽²⁾

(1) Véase decreto del 2 de enero de 1839, artículo 4.º y ley del 23 de marzo de 1853, artículo 4.º.

(2) Véase la nota de la página 81, el artículo 1.º de la ley del 23 de marzo de 1853, y el artículo 6.º del decreto del 2 de enero de 1839.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 12. No se considerarán por servicio las comisiones, ni tampoco el tiempo que hayan estado á mérito los empleados á quienes se retire ó jubile.

Art. 13. La antigüedad para contar los servicios en el retiro ó jubilación, se computará desde 10 de mayo de 1825 en la campaña, y en Montevideo y la Colonia, desde 1829.

Art. 14. Se considerarán dobles los años de servicios en la campaña en guerra exterior.

Art. 15. Cuando un empleado retirado ó jubilado vuelve al servicio, cesa en el goce que tuviera, por cualquiera de esas calidades, percibiendo sólo el de la plaza á que es destinado.

Art. 16. Sólo en el caso de que cese este nuevo servicio, volverá á percibir la jubilación ó retiro, sin que por el que preste últimamente, pueda aumentársele el que tenía.

Art. 17. Comuníquese y publíquese, etc.

Sala de sesiones, en Montevideo. á 3 de mayo de 1838.

CARLOS ANAYA.

Joaquín Requena.

Montevideo, 5 de mayo de 1838.

Cúmplase, acúsese recibo, publíquese, etc., etc., con inclusión de los artículos relativos al Montepío (1).

ORIBE.

JUAN B. BLANCO.

(1) Artículos del Reglamento de Montepío de 7 de febrero de 1770.

CAPÍTULO II

PENSIONES DEL MONTE, Y LOS CASOS Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE TIENEN LUGAR

«Artículo 1.º A las viudas y jubilados de todos los ministros ó empleados que tengan acción al Monte, siguiendo la regla de proporción que, en España, y con respecto á los descuentos que han de hacer en Indias, se

Decreto reglamentario de la Ley de 1838

Montevideo. 2 de enero de 1839.

El General en Jefe del Ejército Constitucional.

Siendo indispensable reglamentar la Ley de Retiro, Jubilación y Montepío de empleados civiles, para que haya orden y uniformidad en las retenciones que se entablen para optar á los goces que ella les designa, he venido en acordar y

DECRETO:

Artículo 1.º Para solicitar cualquier empleado civil el retiro de la ley se necesita:

- 1.º Que se suprima la plaza efectiva que estuviese desempeñando;
- 2.º Que tenga diez años al menos cumplidos de servicio;

les acudirá con la cuarta parte del sueldo que gozaban sus maridos ó padres en la plaza que sirvieron, durante sus días, sin traer á colación comisiones, sobresueldos ni ayuda de costas.

Art. 2.º (Innecesario).

Art. 3.º Cuando quedase la viuda sin hijos, gozará ella la pensión, mientras no tome otro estado, y lo mismo será aunque tenga hijos, si los hubo en otro matrimonio anterior al de Ministro.

Art. 4.º Cuando quedase la viuda sin hijos de aquel matrimonio, ó con hijos que el Ministro hubiese tenido en otro, percibirá ella sola la pensión, quedando en la obligación de educarlos y sustentarlos á todos, hasta que los varones cumplan la edad de veinticinco años, y las hembras tomen estado ó mueran.

Art. 5.º Cuando la viuda con hijos del Ministro muriese ó tomase estado, recaerá la pensión en los hijos que no hayan tomado estado; y del mismo modo les corresponderá desde el principio toda la pensión, si su padre fallece sin dejar viuda:—entendiéndose esto, mientras yo no tomase otra disposición acerca de las viudas que pasasen á tomar estado de casada, ó religiosa, á imitación de lo que tuve á bien declarar, por lo respectivo á las de militares, por mi Real Cédula de 2 de diciembre de 1768.

Art. 6.º Según los hijos se vayan muriendo, ó llegando á los 25 años los varones, ó tomando estado las hembras, irá recayendo la pensión en los demás hijos é hijas, aunque se reduzcan á uno solo, con la prevención de que reducida la pensión á un solo hijo, la gozará entera hasta que cumpla los 25 años, y reducida á una sola hija hasta que tome estado ó fallezca.

Art. 7.º Cuando la pensión pertenece á los hijos desde el principio, ó

3.º Que no sea de los empleados amovibles á voluntad del Poder Ejecutivo;

4.º Que su separación aun cuando se suprima el empleo, no se funde en su ineptitud, omisión ó delito.

Art. 2.º Los expedientes para solicitar retiro, deben iniciarse acompañando los títulos ó despachos respectivos de los empleos que hubiesen servido ó copias certificadas de ellos: — pasarán luego á informe de los jefes que existan en las oficinas en que se hubiesen prestado los servicios, y en seguida á las de contabilidad para constancia de haber sufrido los descuentos de la ley, y no resultarles cargo alguno, con lo que, y previa vista Fiscal, quedará vestido y en estado de resolución.

Art. 3.º Todo empleado civil que solicite jubilación, pedirá ser reconocido por dos facultativos, uno propuesto por el Fiscal General, y otro por el interesado, para acreditar haberse inutilizado en servicio público, por achaques, avanzada edad ú otros motivos: acompañará los despachos, ó copias certificadas de ellos, de los diferentes empleos que hubiere desempeñado, se oirán los informes de sus jefes que existan y los de las oficinas de contabilidad, para acreditar haber sufrido los descuentos de la ley, y no resultarles cargo alguno, con lo que, y justificado su servicio de siete años al menos, y previa audiencia Fiscal, quedará el expediente para resolverse definitivamente.

Art. 4.º La Contaduría General, hará á todos los empleados civiles de la República, cuyo sueldo exceda de 300 pesos anuales, el descuento que establece el artículo 9.º de la ley del caso, desde Mayo inclusive del año próximo pasado en que ella fué sancionada y publicada.

Art. 5.º Quedan suspensas todas las pensiones y jubilaciones que hayan sido acordadas por resoluciones especiales, hasta consultar á las Cámaras Legislativas la inteligencia del artículo 8.º de la citada ley.

Art. 6.º Hasta la sanción de la ley general de pensiones

después ha recaído en ellos. corresponderá su cobranza y conversión á la persona que para este caso hubiese nombrado el Ministro en su última disposición; y en su defecto, el tutor ó curador que nombre la justicia.

Art. 6.º Cuando la viuda, hijo ó hija viviere fuera de mis dominios, no gozarán la pensión, pero si quedase en ellos otro hijo ó hija en circunstancias de gozarla, se dará por entero á los que quedasen*.

Está conforme.

Joaquín Requena.

para las viudas, las solicitudes que puedan promoverse por éstas en los casos que ocurran, llenarán las formalidades prescriptas en el reglamento de Montepío de 7 de febrero de 1770. ⁽¹⁾

Art. 7.º Comuníquese, etc.

RIVERA.

SANTIAGO VÁZQUEZ.—ENRIQUE
MARTÍNEZ.

Ley relativa á los jubilados, sus viudas y menores

*El Senado y Cámara de Representantes de la República
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,*

DECRETAN:

Artículo 1.º Las viudas de los jubilados tienen opción á la pensión que establece el artículo 11 de la ley de 5 de mayo de 1838.

Art. 2.º Mientras haya hijos menores ó desvalidos incapaces de proporcionarse á sí mismo la subsistencia, gozarán en común con su madre de la pensión indicada.

Art. 3.º Los hijos menores ó desvalidos en el caso del artículo anterior, á falta de madre viuda, gozarán por sí el todo de la pensión durante la minoría ó el impedimento, siendo varones, y siendo mujeres mientras no tomen estado.

Art. 4.º En lo sucesivo los jubilados contribuirán con el sueldo de un día de cada mes, que prescribe el artículo 9.º de la citada ley.

Sala de sesiones del Honorable Senado, en Montevideo, á 21 de marzo de 1853.

BERNARDO P. BERRO,
Presidente.

Juan A. Labandera,
Secretario.

(1) Véase la nota de la página 81.

Montevideo, 28 de marzo de 1853.

Cúmplase, etc.

Rúbrica de S. E.

CASTELLANOS.

Decreto ley del 7 de Septiembre de 1876

**EXCLUYENDO DE PENSIÓN Á LOS EMPLEADOS QUE DESDE ESA
FECHA INGRESEN AL SERVICIO**

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 7 de septiembre de 1876.

No estando en relación el montepío que se descuenta á los empleados públicos, con las pensiones, jubilaciones ó retiro que respectivamente les acuerdan las leyes vigentes;

Siendo, por otra parte, inconveniente que la Nación se constituya en guardadora de las economías de los ciudadanos á su servicio; y

Deseando el Gobierno Provisorio preparar la marcha regular de las futuras Administraciones, desembarazando paulatinamente al país de una enorme carga que tiende progresivamente á aumentar, absorbiendo la mayor parte de los caudales públicos;

Considerando, que las medidas á tomarse no deben traer aparejado desconocimiento de derechos adquiridos, el Gobernador Provisorio en acuerdo y consejo de ministros y en uso de las facultades de que está investido, acuerda y decreta:

Artículo 1.º Desde esta fecha en adelante toda persona que entre por primera vez á prestar servicios remunerados á la Nación, ya sean en el orden civil ó militar, queda excluida de toda pensión pasiva, tanto para si, como para sus deudos, ya provenga su cese de renuncia del empleo, destitución del mismo ó fallecimiento.

Art. 2.º Los empleados á que se refiere el artículo anterior, no sufrirán en sus sueldos el descuento de montepío, de que habla la ley de 5 de mayo de 1838.

Art. 3.º Para los actuales servidores y para aquellos que vuelvan al servicio público después de haber desempeñado empleos en cuyos sueldos se haya descontado el montepío respectivo, continuarán rigiendo las leyes de la materia en vigencia.

Art. 4.º La Contaduría General llevará en índices ó registros apropiados, la nómina de los nuevos empleados que no podrán en adelante ser jubilados.

Art. 5.º Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 1.º las familias de los ciudadanos de la Guardia Nacional ó del Ejército de línea, muertos en función de guerra ó invalidados sus causantes de modo que los inutilice para el ejercicio de toda profesión ó industria.

Art. 6.º Comuníquese, publíquese y dese al L. C.

LATORRE.

JUAN A. VÁZQUEZ. — JOSÉ M.
MONTERO. — AMBROSIO VE-
LAZCO. — EDUARDO VÁZQUEZ.

Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles

(Ley «Antonio M. Rodríguez»)

PROMULGADA EL 11 DE OCTUBRE DE 1904

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1.º Los empleados públicos que habiendo desempeñado cumplidamente las tareas de su destino, se imposibiliten física ó mentalmente, ⁽¹⁾ después de cierto tiempo, para

(1) Véase el artículo 16 y su nota.

ejercerlas, ó cesen en su cargo por supresión del destino que desempeñaban, ó tengan la edad y los años de servicios que exige el artículo 16, serán jubilados con arreglo á la presente ley.

Art. 2.º La madre, la viuda y los hijos de los empleados públicos, tendrán derecho á pensión conforme á los artículos 30 y 31.

Art. 3.º Los empleados públicos de la Nación, á quienes esta ley obliga y favorece, son los que ejerciendo un empleo ó función civil, forman parte ó dependen del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de las Salas ó Secretarías de ambas ramas del Poder Legislativo, de las Juntas Económico Administrativas y Comisiones Auxiliares, de la Comisión Nacional de Caridad, de las Juntas Electorales y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, á que se refiere el artículo 9.º, sean ellas inamovibles ó amovibles, con tal de que se les haya conferido un cargo de carácter estable, aun cuando ejerzan, en calidad de interinos, suplentes ó auxiliares, otros destinos en la Administración Pública (1).

Art. 4.º No dan derecho á jubilación ni á pensión:

- 1.º Los servicios públicos prestados en comisión, esto es, en empleos ó funciones que no sean de carácter permanente (2).
- 2.º Los que se prestan en cargos no remunerados por el Tesoro Público, como, por ejemplo, los concejiles de las Juntas Económico Administrativas.
- 3.º Los que, aunque correspondan á cargos remunerados por el Tesoro Público, se prestan gratuitamente por incompatibilidad ú otra circunstancia; — exceptúase el caso de los miembros del profesorado con más de diez años de servicios, que hubieran obtenido licencia temporal sin goce de sueldo, los que podrán seguir abonando su montepío á los efectos de la jubilación ó pensión (3).

(1) Véase la nota del inciso 1.º del artículo 4.º

(2) La Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes dijo en su informe de 5 de Junio de 1903:

«Los artículos 3.º y 4.º distinguen entre los empleos de carácter estable, que pueden ser desempeñados por funcionarios amovibles, como los Jefes Políticos, y los empleos en comisión, ó sean los que no tienen carácter permanente, como, por ejemplo, el de Secretario de una Comisión de Código. Estos últimos, dada su naturaleza inestable ó temporaria, no acuerdan derecho á jubilación ni á pensión.»

Véase para los descuentos el artículo 12 inciso 2.º.

(3) El objeto de esta excepción es permitir á estos empleados que continúen abonando su montepío, á fin de no perder los derechos adqui-

4.º Los remunerados de otra manera que no sea por sueldo.

Art. 5.º Los empleados á que se refiere la ley de 28 de mayo de 1896, se jubilarán y transmitirán pensión con arreglo á ella ⁽¹⁾.

CAPÍTULO II

DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES

Artículo 6.º Créase una Caja denominada de Jubilaciones y Pensiones Civiles destinada al servicio de las comprendidas en la presente ley.

Art. 7.º Dicha Caja estará á cargo de un Consejo Administrativo compuesto de los siguientes miembros:

Como Presidente, el Contador General de la Nación.

Como vocales, el Fiscal de Hacienda, el Juez Letrado más antiguo de la capital, el Tesorero General de la Nación, el Director General de Aduana, el Director de la Oficina de Impuestos Directos, el Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda, el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad, el Presidente del Consejo Nacional de Higiene, el Presidente de la Junta Económico Administrativa de la Capital, el Presidente de la Comisión Nacional de Caridad, el Jefe de la Oficina de Crédito Público, el Secretario más antiguo del Cuerpo Legislativo, y tres miembros electivos, que se renovarán en sus funciones cada tres años, designados por mayoría de votos, en asamblea especial, constituida por todos los jefes y segundos jefes de las dependencias ó servicios públicos á que se refiere la presente ley. Estos miembros electivos pueden ser reelectos.

Estas asambleas se celebrarán en la capital de la República, y los funcionarios que no puedan asistir personalmente, enviarán sus votos escritos con las formalidades que exija la reglamentación de esta ley. ⁽²⁾

Art. 8.º Los cargos de Vicepresidente, Contador, Teso-

ridos á la jubilación; y por tanto se les computará también el tiempo que permanezcan con licencia. (Véase el informe de la Comisión de Legislación del Senado del 9 de septiembre de 1904.) Véase además, los artículos 24 y 26 del decreto reglamentario.

(1) Se refiere al Cuerpo docente.

(2) Véase los artículos 1.º á 5.º del decreto reglamentario.

rero, Secretario y Asesor Letrado del Consejo Administrativo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, serán designados por mayoría de votos en sesión plena de dicho consejo.

Entenderáse por sesión plena la que se celebre con la asistencia de las dos terceras partes de sus miembros.

Estos vocales con cargo especial, unidos al Presidente y á los tres miembros electivos de que habla el artículo anterior, constituirán el Comité Ejecutivo de dicho Consejo, encargado especialmente de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley. ⁽¹⁾

Art. 9.º Para el mejor desempeño de las funciones del Comité Ejecutivo, créanse los empleos de un Subsecretario - Tesorero, un Subcontador y un Auxiliar.

El Consejo Administrativo proveerá estos empleos por dos terceras partes de votos, y fijará sus dotaciones con aprobación del Poder Ejecutivo.

La dotación de estos empleados, será satisfecha con los recursos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Art. 10. No podrá conferirse el cargo de Subsecretario-Tesorero sin obtener previamente de la persona que haya de desempeñarlo fianza satisfactoria á juicio del Comité Ejecutivo. Este, siempre que lo creyera conveniente, podrá exigir que se aumente la fianza, y si no se aumentase solicitar del Consejo Administrativo que el Subsecretario-Tesorero sea reemplazado.

Art. 11. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos anteriores, sólo será indispensable reunir en sesión plena al Consejo Administrativo de la Caja, en los siguientes casos:

- 1.º Para proyectar el Reglamento general y los reglamentos especiales que sean necesarios para la ejecución de esta ley y someterlos á la aprobación del Poder Ejecutivo.
- 2.º Para proyectar y proponer, por intermedio del Poder Ejecutivo, las modificaciones ó ampliaciones á esta ley, que la experiencia aconseje como necesarias ó convenientes.

Art. 12. La Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles se formará con las siguientes asignaciones y recursos:

(1) Véase el artículo 6.º del decreto reglamentario.

- 1.º Con una entrega mensual del Estado de tres mil pesos el primer año de sancionada la presente ley, de cuatro mil pesos durante el segundo año y de seis mil pesos en los años sucesivos y con las entregas mensuales de pesos trescientos que hará la Junta Económico Administrativa de la Capital y de pesos quinientos que hará la Comisión Nacional de Caridad. ⁽¹⁾
- 2.º Con un descuento forzoso de un día de sueldo de los empleados públicos á que se refiere el artículo 3.º de esta ley, de las jubilaciones que ellos obtengan y de las pensiones que transmitan.

Respecto de empleados públicos que desempeñen otro cargo con carácter interino, el descuento se hará sobre el sueldo fijo y no sobre el que perciban interinamente, toda vez que el interinato no se prolongue por más de seis meses, en cuyo caso se hará el descuento sobre el sueldo del cargo interino y se le tomará en cuenta á los efectos de lo dispuesto en los artículos de esta ley. ⁽²⁾

La Tesorería General del Estado hará el descuento en cada pago de sueldo y pasará inmediatamente su importe á la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

Del mismo modo procederá el Tesorero de la Caja respecto de los jubilados y pensionistas.

- 3.º Con la diferencia de un mes de sueldo cuando alguna de las personas indicadas en el artículo 3.º de la presente ley pase á ocupar, por tiempo no menos de seis meses, un empleo mejor rentado que el que antes desempeñaba, en cuyo caso la deducción se hará en el sexto mes. ⁽³⁾
- 4.º Con la entrega del tres ó del cuatro por ciento de los sueldos devengados por personas que no pagan actualmente montepío y quieran hacer valer sus años de servicios anteriores á la promulgación de esta ley en el cómputo de su jubilación ó de la pensión que transmitirán á sus herederos. ⁽⁴⁾
- 5.º Con las donaciones, herencias ó legados de los particulares. ⁽⁵⁾

(1) Véase el artículo 7.º del decreto reglamentario.

(2) Los artículos de esta ley á que se hace referencia son el 18 y el 12 (inciso 3.º). Véase el decreto del 9 de mayo de 1898 sobre licencias y empleados interinos.

(3) Véase el artículo 8.º del decreto reglamentario.

(4) Véase el artículo 50 de esta ley y el 42 del decreto reglamentario.

(5) Véase el artículo 10 del decreto reglamentario.

- 6.º Con los intereses y fruto de los fondos públicos ú otros bienes que la Caja adquiriera. (1)
- 7.º Con el importe de los sellos y timbres correspondientes á las cédulas de jubilación ó pensión de que habla el artículo 28. (2)
- 8.º Con las multas impuestas á los empleados públicos, jubilados ó pensionados, conforme á la ley, por faltas cometidas en el desempeño de sus cargos respectivos ó violación de esta ley. (3)
- 9.º Con el producto del impuesto especial que por esta ley se crea, de 2 %, progresivo á partir de cien pesos líquidos y á razón de un peso por cada cien pesos de exceso proporcionalmente aplicable á todas las pensiones graciabiles del Estado. (4)
10. Con las multas que se impongan, de acuerdo con el artículo 25.
11. Con el producto de la Estampilla Especial que se denominará «Estampilla de Montepío», que por esta ley se crea, de valor de veinticinco centésimos (\$ 0.25) para cada vista ó dictamen de los señores Fiscales de Estado en asuntos administrativos y para cada petición de interés particular que se presente al Cuerpo Legislativo. (5)

Las Oficinas Recaudadoras del Estado y la Tesorería General de la Nación pasarán mensualmente el total recaudado y asignado sin descuento alguno, por los conceptos indicados en este artículo á la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles. (6)

Art. 13. Cuando á juicio del Consejo Administrativo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, haya exceso de

(1) Véase el artículo 13 y su nota.

(2) Véase el artículo 11 del decreto reglamentario.

(3) Véase los artículos 12 y 38 del decreto reglamentario; el artículo 25 de esta ley; los artículos 31 (inciso 2.º y 3.º), 36, 44, 72, 173, 178, 179 y 211 del Código Penal; el artículo 10 de la Ley Orgánica de Juntas; el decreto del 9 de mayo de 1898; los artículos 245 y 248 del Reglamento de Aduanas y Resguardo y el artículo 7.º del número 10 del reglamento de Correos.

(4) Véase decreto reglamentario, artículo 13.

(5) Este impuesto de estampillas grava las vistas y dictámenes de los Fiscales en materia administrativa, civil, de hacienda y gobierno, y comprende á todos los Fiscales. Se entiende que corresponde á cada vista y á cada dictamen una estampilla sola, sea cual fuere el número de fojas. (Véase *Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes*, tomo 173, pág. 351 á 353).

Véase además el decreto reglamentario, artículos 14 y 15.

(6) La expresión *sin descuento alguno* se refiere aun al descuento de 1 % que hace la Tesorería sobre los pagos (*Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes*, tomo 173, página 354.)

fondos para atender al pago corriente de las obligaciones de la Caja, deberá colocarse dicho exceso en fondos públicos de renta.

La adquisición se hará por llamado á licitación y en igual forma se hará la enajenación. Pero para que ésta pueda efectuarse es indispensable que sea autorizada por una ley especial. ⁽¹⁾

Art. 14. El Comité Ejecutivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles está especialmente obligado:

- 1.º A velar por la fiel observancia de las prescripciones que la presente ley establece para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones.
- 2.º A cuidar de que no continúe en el goce de ellas ninguna persona que haya perdido el derecho á percibir las en todo ó en parte, haciendo las gestiones necesarias para que la caducidad se declare ante el Ministro de Hacienda, de cuya resolución podrá reclamarse judicialmente, con arreglo al artículo 26 ⁽²⁾.
- 3.º A rendir cuenta mensual de sus operaciones á la Contaduría General del Estado, publicando mes á mes el estado correspondiente ⁽³⁾.
- 4.º A elevar al Ministerio de Hacienda, al fin de cada ejercicio, una memoria completa sobre la situación de la Caja, acompañada de una nómina de los jubilados, pensionistas y empleados que sufren el descuento ordenado por el inciso 2.º del artículo 12 de la presente ley.

Dicha memoria y sus anexos se publicarán en la Memoria anual del Ministerio de Hacienda.

- 5.º A darse un Reglamento interno, sometiéndolo á la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 15. Serán inembargables los bienes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

(1) Véase decreto reglamentario, artículo 16 y Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, tomo 173, página 389 y siguientes.

(2) Véase decreto reglamentario, artículo 17.

(3) Véase decreto reglamentario, artículo 20.

CAPÍTULO III

DE LAS JUBILACIONES

Artículo 16. Tienen derecho á jubilación:

- a) Los empleados públicos con más de diez años de servicios y que prueben acabadamente la imposibilidad de continuar en el ejercicio de su cargo por enfermedad, por hallarse inválido, ó por avanzada edad ⁽¹⁾.
- b) Los empleados públicos que después de haber servido por igual número de años, cesen en su destino por superación del cargo, ó por exoneración del mismo, no mediando omisión ó delito. ⁽²⁾
- c) Los que tengan más de treinta años de servicio y hayan cumplido sesenta de edad.

Art. 17. Para que la destitución por omisión traiga aparejada la pérdida de la jubilación, es preciso que así lo declare el Senado ó en su caso la Comisión Permanente, á pedido del Poder Ejecutivo.

Art. 18. La jubilación será de tantas treinta avas partes del promedio de los sueldos que hubiese gozado el postulante en los últimos cinco años, cuantos sean los años de servicios prestados, no contándose los que pasen de treinta y no pudiendo en ningún caso exceder ella de los tres cuartos de dicho promedio ni de la suma de cuatro mil pesos anuales.

La limitación de los tres cuartos no regirá para los sueldos cuyo promedio anual no exceda de seiscientos pesos, en cuyo caso la jubilación podrá ser íntegra; en los sueldos que excedan de esa suma, el descuento de la cuarta parte sólo se hará sobre el excedente.

Los servicios prestados por los magistrados judiciales y por los fiscales, así como por el profesorado de la Universidad,

(1) «La palabra enfermedad es genérica y comprende todos los casos que se relacionan con la imposibilidad que puede venir, física ó de cualquier otra naturaleza, y que haya tenido relación con una alteración patológica del organismo» (doctor Vidal y Fuentes, en la discusión de este artículo). Véase el Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, tomo 173 página 410.

(2) Véase el artículo 17.

se computarán á razón de cuatro años por cada tres de servicios. ⁽¹⁾

Tampoco podrá exceder la jubilación del monto real del último sueldo que hubiera percibido el empleado ⁽²⁾.

Art. 19. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, no se tomarán en cuenta las fracciones de años ni sobresueldos, gratificaciones ú otras recompensas extraordinarias.

Art. 20. En caso de acumulación de sueldos, legalmente permitida, de los dos sueldos que perciba el empleado público, se optará por el sueldo mayor para todos los efectos de esta ley, no descontándose el montepío sobre el sueldo menor.

Art. 21. Los servicios que dan derecho á la jubilación pueden haber sido continuos ó interrumpidos; pero en ningún caso y por ningún motivo se acumularán servicios prestados en otras dependencias del Estado que no sean las mencionadas en el artículo 3.º, ni podrán contarse en ningún caso, á los efectos de la jubilación, los años que el funcionario ó empleado público haya permanecido fuera del servicio ⁽³⁾.

Art. 22. Una vez adquirida la jubilación el derecho á percibirla sólo se extingue por causa de muerte del jubilado.

Art. 23. La jubilación se solicitará del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministro de Hacienda, debiendo el solicitante acompañar los justificativos que correspondan ⁽⁴⁾.

Recibida la solicitud, se pasará á informe de la Contaduría General y de la Caja de Jubilaciones y si no mediase oposición por parte de ésta, el Poder Ejecutivo otorgará la cédula respectiva, si la cree procedente, comunicándolo á la Caja para su cumplimiento y á la Contaduría para la toma de razón ⁽⁵⁾.

(1) Esta excepción, fué establecida al discutirse la ley en la Cámara de Senadores. Según el miembro informante, por este inciso se declara que los magistrados y profesores deben tener la edad, pero no los años de servicio de los otros empleados de la Administración. (Véase en el Diario de sesiones del Senado la crónica de la sesión del 7 de octubre de 1904).

La Cámara de Representantes á su vez, por moción del doctor Arco declaró expresamente que esta excepción favorece á todos los funcionarios de la referencia (de la magistratura y del profesorado de la Universidad), estén comprendidos en la ley de 1838 ó en ésta de 1904. (Véase el Diario de sesiones de la Cámara de Representantes, tomo 117, pág. 398).

(2) Véase decreto reglamentario, artículo 28.

(3) Véase la excepción establecida en el inciso 3.º del artículo 4.º, para los miembros del profesorado.

(4) Véase los artículos 22, 23 y 25 del decreto reglamentario.

(5) La Comisión de Legislación del Senado, dice con referencia á este inciso, en el informe del 9 de Septiembre de 1904:

«En el inciso 2.º del artículo 23 introducimos una aclaración con el

Si la solicitud se fundase en alguno de los casos previstos en el inciso a) del artículo 16, el peticionario, antes de producirse el informe de la referida Caja, será sometido á examen médico, con arreglo al artículo siguiente.

Art. 24. El examen médico de que habla el artículo anterior se efectuará por dos facultativos que designen respectivamente el solicitante y la Caja y si ambos peritos no estuviesen de acuerdo intervendrá como tercero un profesor de la Facultad de Medicina que designará el Decano de la misma.

Cada parte pagará su perito y el tercero ambas por mitad (1).

Si el peticionario se conforma con ser reconocido únicamente por el médico que designe la Caja, sólo éste lo examinará y en tal caso las dos partes pagarán también el honorario por mitad.

Art. 25. El informe médico será prolijo, circunstanciado y de acuerdo con un cuestionario que propondrá el Comité Ejecutivo.

Los médicos que tengan la calidad de empleados públicos de los comprendidos en el artículo 3.º, deberán expedir sus informes gratuitamente. La Caja de Jubilaciones y Pensiones y el postulante abonarán por mitad los gastos extraordinarios de viaje necesarios para informar (2).

El médico, sea ó no empleado público, que expida informe falso, además de quedar sujeto á lo que dispone el Código Penal, (3) sufrirá una multa de cincuenta pesos en beneficio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Dicha multa se aplicará sin ulterior recurso por dos terceras partes de votos del Comité Ejecutivo de la referida Caja.

Art. 26. La resolución del Poder Ejecutivo podrá ser reclamada dentro de los diez días por el solicitante, debiendo ser dicho recurso interpuesto ante el Juez Nacional de Ha-

objeto de dejar claramente establecido que cuando el Comité de la Caja se oponga no podrá otorgarse jubilación ó pensión y que á su vez cuando el Poder Ejecutivo no crea procedente dicha jubilación ó pensión, podrá denegarla aun cuando el dictamen del Comité hubiera sido favorable.

Y en el mismo informe hablando de las pensiones en particular, dice: »Es, pues, ante el Poder Ejecutivo que debe gestionarse el derecho á la pensión, y la intervención que en estos asuntos le corresponde al Comité Ejecutivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, debe ser la misma que por el artículo 23 se le confiere en materia de jubilaciones, es decir, la de asesorar al Poder Ejecutivo y prestar ó rehusar su conformidad para el otorgamiento de pensiones, con arreglo á la ley.»

(1) Véase Decreto reglamentario, artículo 44.

(2) Véase Decreto reglamentario, artículo 44.

(3) Código Penal, artículo 206.

cienda, — el que después de recabar los informes que creyese necesarios y oídas las alegaciones verbales de las partes, fallará el asunto.

De este fallo podrá apelarse para ante el Superior Tribunal de Justicia que esté de turno, con recurso para ante el otro Tribunal en el caso de revocatoria de la resolución del Juez Nacional de Hacienda. Si hubiera de producirse nuevo informe médico, lo hará el Consejo Nacional de Higiene.

Art. 27. Si la solicitud se fundase en servicios de más de treinta años (artículo 16, inciso c), deberá el postulante probar su edad por la partida ó acta de nacimiento, ó por los medios supletorios que establece el Código Civil (1).

Art. 28. Corresponde al Comité Ejecutivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, extender las cédulas respectivas suscribiéndolas todos sus miembros, con expresa mención del decreto del Poder Ejecutivo, en cuya virtud se acuerda la jubilación ó pensión y se fija su monto de conformidad á la presente ley (2).

Art. 29. Empezará á correr la jubilación desde el día en que el jubilado haya cesado en el ejercicio activo de su cargo, pero deberá solicitarse durante el desempeño del mismo ó dentro de los seis meses después de su cese.

CAPÍTULO IV

DE LAS PENSIONES (3)

Artículo 30. La viuda y los hijos solteros legítimos ó naturales reconocidos de los empleados públicos que comprendidos en el artículo 16 de la presente ley, fallezcan desempeñando su cargo en servicio del Estado, tendrán derecho á una pensión igual á la mitad del monto de la jubilación que hubiera correspondido á su causante si en vez de fallecer se hubiese inutilizado para el servicio público.

Art. 31. Si el empleado público fallecido, comprendido en el artículo 16, es soltero ó viudo sin hijos, y tiene madre viuda, natural ó legítima, ésta gozará de la pensión que fija el artículo anterior.

(1) Código Civil, artículos 44 á 49.

(2) Decreto reglamentario, artículos 27 y 28.

(3) Véanse los artículos 29 y 30 del Decreto reglamentario.

Art. 32. Las personas que, con sujeción á la presente ley, se jubilen ó tengan derecho á jubilarse, transmitirán pensión á la viuda, hijos ó madre en su caso, según las mismas reglas establecidas en los dos artículos anteriores.

Dicha pensión será siempre de la mitad de la jubilación que disfrutaba ó á que tendría derecho el causante.

Art. 33. La esposa ó madre viuda perderá el derecho á la pensión en los casos siguientes:

1.º Si contrae nuevas nupcias. (1)

2.º Si no vive con honestidad. (2)

Cada tres meses estas pensionistas acreditarán con un certificado del Juez de Paz y dos testigos de respetabilidad que se conservan viudas y honestas. (3)

Art. 34. Los hijos de ambos sexos perderán el derecho á la pensión cuando contraigan matrimonio (4) y los varones cuando cumplan diez y siete años.

Cuando las hijas mujeres cumplan veinticinco años, su parte en la pensión se reducirá á la mitad de la que gozaban.

Para justificar que no están en el primer caso las pensionistas que tengan edad legal para casarse, será obligatoria la presentación del certificado trimestral, previsto en el artículo anterior.

Art. 35. Las viudas é hijas de los empleados públicos, de que hablan los artículos anteriores, serán preferidas en igualdad de condiciones por el Poder Ejecutivo para la provisión de las vacantes y plazas nuevas á crearse en la Dirección General de Correos y Telégrafos y otros puestos análogos de la Administración Pública que puedan ser desempeñados por mujeres, suspendiéndose por el hecho en el goce de la pensión que se les hubiere concedido ó á que tuvieran derecho con arreglo á esta ley.

Art. 36. Cuando la pensión corresponda á la viuda y á sus hijos, se le entregará á ésta, y todos disfrutarán de ella en común.

Cuando los hijos estén bajo tutela, el tutor recibirá la pensión que les corresponda á aquéllos.

Art. 37. Siempre que sean varias las personas llamadas á disfrutar de la pensión, si alguna de ellas pierde su derecho

(1) V. Decreto reglamentario, artículo 34.

(2) Véase como ejemplo el artículo 12 de la ley del 3 de Mayo de 1887 página 25.

(3) V. Decreto reglamentario, artículo 31.

(4) V. Decreto reglamentario, artículo 34.

á percibirla, la parte que le corresponde acrece á las demás.

Art. 38. Si á la muerte del causante de una pensión quedan hijos huérfanos de distintos matrimonios, la pensión se distribuirá por iguales partes entre todos ellos, entregándose á sus respectivos representantes legales ⁽¹⁾.

Si concurre la viuda, representará ella una parte.

Art. 39. Cuando la viuda pensionista tenga hijos á quienes también pertenezca la pensión y pierda su derecho á ella (artículo 33), el Comité Ejecutivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles comunicará el hecho al Juez competente de la residencia de los hijos, para que los provea de tutor á quien deba entregarse la pensión, quedando exento del pago de costas, salvo que tengan otros bienes.

Art. 40. Las personas comprendidas en los artículos 30, 31 y 32 que al tiempo de fallecer el causante de la pensión estén sufriendo pena de penitenciaría, no tienen derecho á pensión.

Perderá este derecho todo pensionista que sea condenado á la misma pena.

Art. 41. La pensión se solicitará del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda ⁽²⁾.

Art. 42. Acompañará á la solicitud la partida de defunción de la persona cuyo derecho se invoca, las demás partidas del Estado Civil de los que se consideran sus causahabientes, y todos los demás recaudos necesarios para justificar que el postulante se halla en las condiciones de la ley.

Art. 43. Estando la solicitud suficientemente instruída, el Poder Ejecutivo procederá en seguida como se prescribe en el inciso 2.º del artículo 23.

Es igualmente aplicable á las pensiones lo dispuesto en el artículo 26.

Art. 44. Toda pensión legalmente acordada empieza á correr desde el momento de la muerte de la persona que le dió origen.

Art. 45. Cuando algún empleado público de los indicados en el artículo 3.º de esta ley, fallezca en desempeño de puesto público sin tener más de diez años de servicio al Estado, las personas que tendrían derecho á pensión si dicho empleado hubiera alcanzado esos años de servicio, recibirán como único

(1) Se entiende que se contarán los hijos como si fueran todos de un solo matrimonio y que no tienen los de uno derecho á una parte equivalente á la suma de los de otro, sino cada hijo una parte igual á la de cada uno de los otros.

(Véase diario de sesiones de la Cámara de Representantes, tomo 175 página 269.

(2) Véase el decreto reglamentario, artículos 22 y 29.

auxilio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, cuatro mensualidades del sueldo correspondiente al empleo fijo del fallecido. (1)

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES Á LAS JUBILACIONES Y PENSIONES QUE AUTORIZA LA PRESENTE LEY

Artículo 46. Es absolutamente nula toda enajenación ó afectación de jubilaciones ó pensiones no devengadas. Sean éstas devengadas ó futuras, se declaran totalmente inembargables. (2)

Art. 47. Las pensiones y jubilaciones acordadas con arreglo á la presente ley no pueden acumularse á ningún otro sueldo ó pensión del Estado y sus dependencias.

Art. 48. Ningún jubilado ó pensionista de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles podrá ausentarse del territorio nacional por más de treinta días sin licencia del Comité Ejecutivo de dicha Caja.

Los que violen esta disposición perderán el derecho á la jubilación ó pensión por todo el tiempo que dure su ausencia. Esta pena la aplicará el Comité Ejecutivo de la Caja.

En el transcurso de un año nadie podrá recibir más de tres meses de licencia con goce de jubilación ó pensión, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado ante el mismo Comité. No podrá sin embargo, extenderse esa exención por más de seis meses. (3)

Art. 49. Las personas comprendidas en el artículo 3.º de la presente ley, y que por haber entrado al servicio público antes del 7 de Septiembre de 1876 paguen Montepío al Estado, se jubilarán y transmitirán pensión con arreglo á la ley de 5 de Mayo de 1838 y con independencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

Estos empleados públicos siempre que hayan cumplido correctamente con los deberes de sus cargos y que por renuncia, por haber sido el cargo temporario ó por causa de los acontecimientos políticos por que ha pasado el país se hallen actualmente separados de sus empleos, podrán obtener cédula

(1) Véase el decreto reglamentario, artículo 35.

(2) Véase el decreto reglamentario, artículo 36.

(3) Véase el decreto reglamentario, artículo 37.

de jubilación dentro de los cinco años de promulgada esta ley justificando:

- 1.º Que se hallan en las condiciones requeridas por la ley de 5 de Mayo de 1838 respecto al tiempo necesario para obtenerla.
- 2.º Que han satisfecho actualmente Montepío por más de veinte años.
- 3.º Que tengan en el momento de gestionar la jubilación más de sesenta años de edad.
- 4.º Que se encuentren imposibilitados de prestar nuevos servicios á la Nación por cualesquiera de las causas expresadas en el artículo 4.º de la ley citada del año 1838.

La pensión, se regulará por el sueldo del último empleo desempeñado, en atención á los años de servicios prestados y al descuento del Montepío pagado, y será satisfecha con independencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles. ⁽¹⁾

Art. 50. Las personas comprendidas en el artículo 3.º de la presente ley, y que no pagan actualmente montepío, si quieren obtener el derecho de que los servicios prestados al Estado con anterioridad á la promulgación de esta ley se computen oportunamente para la jubilación ó para transmitir pensión, están obligadas á declararlo por escrito ante el Comité Ejecutivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, dentro del plazo improrrogable de dos años, á contar desde dicha promulgación.

Las personas que voluntariamente ó por supresión de su empleo hayan dejado de desempeñarlo antes de ahora, y que desearan optar á los beneficios de esta ley para el caso de reingresar á la Administración Pública, deberán hacer dentro del mismo plazo de dos años la declaración que previene este artículo.

Vencido el plazo sin que hayan hecho la declaración mencionada, sólo se les computarán los servicios posteriores á la misma promulgación. ⁽²⁾

Art. 51. La declaración á que se refiere el artículo anterior expresará la voluntad de pagar el 3 % de todos los sueldos devengados cuando se trate de empleados actuales, y el 4 % tratándose de personas que no desempeñen sus cargos al presente. Para estos últimos la obligación de pagar em-

(1) Véase el decreto reglamentario, artículo 39.

(2) V. decreto reglamentario, artículos 40, 41 y 42. V. además el artículo 54 de esta ley.

pezará desde que entraren á desempeñar de nuevo un puesto rentado en la Administración Pública.

El pago podrá hacerse al contado, y en este caso el Comité Ejecutivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles hará al postulante un descuento de 10 % sobre la suma que deba pagar, ó por cuotas mensuales con arreglo á la siguiente escala:

Empleados con menos de diez años de servicio: 2 $\frac{1}{2}$ % de la suma total que deberán reintegrar.

Empleados con más de diez años de servicio y menos de veinte: 2 %.

Empleados con más de veinte años de servicio: 1 %.

También será sólo de 1 % el importe de la cuota en todos los casos en que la cantidad total á reintegrarse sea superior á mil pesos.

Esas cuotas serán mensualmente descontadas del sueldo del postulante por la Tesorería General del Estado, que las pasará en seguida á la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles. (1)

Art. 52. Para el cálculo de los reintegros á que se refiere el artículo anterior se tomará como base la dotación nominal que asigne al cargo ó cargos desempeñados el presupuesto vigente, siempre que ésta ó éstos sean inferiores á las que hayan regido anteriormente, y en el caso de empleos ó cargos suprimidos la más baja de las dotaciones asignadas al cargo ó cargos durante el tiempo en que lo hubiere ejercido el postulante. (2)

(1) Véase el decreto reglamentario, artículo 43. Véase además los artículos 53 y 54 de esta ley.

(2) Pueden servir de ejemplo para los reintegros los siguientes casos:

Ejemplos de los reintegros

EMPLEADOS ACTUALES

3 % del total de los sueldos devengados

1.^{er} caso: Empleados con menos de 10 años de servicio. Total de sueldos percibidos \$ 1.000. Importe del 3 % \$ 30. Debe abonarse: al contado con un descuento del 10 %, \$ 27 ó por mensualidades á razón del 2 $\frac{1}{2}$ % de la suma total ó sea en 40 mensualidades, que en el caso dado como ejemplo, será de 75 centésimos cada una.

2.^o caso: Empleados con más de diez años y menos de veinte. Total de sueldos percibidos \$ 1.000. Importe del 3 % \$ 30. Debe abonarse al contado con un descuento del 10 % \$ 27 ó por mensualidades á razón del 2 % de la suma total, ó sean 50 mensualidades, que en el caso dado como ejemplo, será de \$ 0.60 cada una.

Art. 53. Si llega el caso de obtener jubilación ó transmitir pensión la persona que todavía adeude parte de las cuotas mensuales á que hace referencia el artículo 51, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles se cobrará de ellas mensualmente sobre la jubilación ó pensión acordada.

Art. 54. Los que tengan derecho á pensión en representación de persona que fallezca dentro del plazo de que habla el artículo 50 sin que dicha persona haya hecho la declaración enunciada en el mismo artículo, podrá pedir al Comité Ejecutivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que se computen los servicios anteriores á la promulgación de la presente ley mediante el pago del 3 % de los sueldos devengados por aquellos servicios en una de las dos formas que señala el artículo 51. (1)

Art. 55. Los empleados públicos así como sus viudas, madres é hijos, no podrán ocurrir al Cuerpo Legislativo en demanda de jubilación, pensión ó aumento de pensión, ni recurrir en forma alguna ante dicho Cuerpo de las resoluciones que á su respecto se hayan dictado.

La violación de lo dispuesto en este artículo dará lugar á

3.^{er} caso: Empleados con más de veinte años de servicio. Total de sueldos percibidos \$ 1.000. Importe del 3 % \$ 30. Debe abonarse al contado con el descuento del 10 % \$ 27, ó por mensualidades, á razón del 1 % de la suma total, ó sea 100 mensualidades de \$ 0.30.

EMPLEADOS QUE NO SE HALLAN EN SERVICIO

4 % del total de los sueldos percibidos

1.^{er} caso: Empleados que han prestado más de diez años de servicio. Total de sueldos devengados \$ 1.000. Importe del 4 % \$ 40. Debe abonar al contado con 10 % de descuento \$ 36 ó por mensualidades á razón del 2 ½ % de la suma total, ó sea 40 mensualidades, que en el caso dado como ejemplo, será de \$ 1.00 cada una.

2.^o caso: Empleados que han prestado más de diez años y menos de veinte. Total de sueldos percibidos \$ 1.000. Importe del 4 % \$ 40. Debe abonarse al contado con el descuento del 10 %: \$ 36 ó por mensualidades á razón del 2 % de la suma total á reintegrar ó sea en 50 mensualidades, que en el caso dado como ejemplo, serían de \$ 0.80 cada una.

3.^{er} caso: Empleados con más de veinte años de servicio. Total de sueldos \$ 1.000. Importe del 4 % \$ 40. Debe abonarse al contado con un descuento del 10 % \$ 36 ó por mensualidades á razón del 1 % de la suma total á reintegrar ó sea en 100 mensualidades de \$ 0.40 cada una.

(1) Véase decreto reglamentario, artículo 43.

la suspensión temporaria con privación del sueldo hasta por seis meses, del empleado, jubilado ó pensionista rebelde, que la decretará el Poder Ejecutivo á solicitud del Comité Ejecutivo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, pudiendo el Poder Ejecutivo atenuar el rigor de esta pena cuando lo considere conveniente. (1)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 56. Nadie podrá obtener jubilación con arreglo á las disposiciones de esta ley, sino después de transcurrido un plazo de cinco años á contarse desde la fecha de su promulgación, salvo lo dispuesto en el artículo 49.

Exceptúase el caso de los empleados públicos absolutamente inutilizados para todo servicio público, que podrán optar á su jubilación dentro de un plazo de dos años, á contar desde la misma fecha.

Tampoco podrán obtenerse pensiones sino después de transcurrido un plazo de dos años á contar desde igual fecha. (2)

Art. 57. Las viudas é hijos menores de los empleados públicos que al tiempo de promulgarse esta ley hubieran fallecido con más de veinticinco años de servicios, podrán acogerse á ella dentro de un plazo de seis meses á contar desde su promulgación, debiendo efectuar los reintegros de Montepío que corresponden con arreglo á las demás disposiciones de la presente ley. (3)

Art. 58. La asignación que establece el inciso 1.º del artículo 12 empezará á correr desde el 1.º de Julio de 1905.

(1) Véase decreto reglamentario, artículo 45.

(2) En un principio el artículo 57 tal como había sido sancionado por la Cámara de Representantes dejaba duda de si la prohibición que él establece de otorgar jubilaciones antes de transcurrido un plazo de cinco años, á contar desde la promulgación de esta ley, comprendía también el caso de las pensiones.

La Comisión de Legislación del Senado creyó que el rigor de esta disposición que obedece á la necesidad de dar tiempo para que se acumulen los primeros fondos con los que esta Caja ha de hacer frente á las jubilaciones y pensiones que van á pesar sobre ella, debía atenuarse respecto de las viudas é hijos de los empleados fallecidos ó que fallezcan en adelante, atenta su situación de absoluto desamparo, permitiendo que las pensiones puedan concederse dentro de un plazo de dos años y á ese fin agregó este inciso. (Véase informe de la referida Comisión, del 9 de Septiembre de 1904).

(3) Véase decreto reglamentario, artículo 46 y el artículo 56 de esta ley.

Art. 59. Deróganse todas las leyes y disposiciones anteriores que se opongan á la presente.

Art. 60. Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo, á 11 de Octubre de 1904.

ANTONIO M.^a RODRÍGUEZ,
Presidente.

Samuel Blixén,
Secretario.

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 14 de Octubre de 1904.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insértese en el R. N.

BATLLE Y ORDÓÑEZ.

JOSÉ SERRATO.

Decreto Reglamentario de la Ley de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 21 de Enero de 1905.

El Presidente de la República, reglamentando la Ley de creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, promulgada con fecha 14 de Octubre último, y oído el Honorable Consejo Administrativo de esa institución, *acuerda y*

DECRETA:

Artículo 1.º Para la elección de los tres miembros y sus respectivos suplentes que han de integrar el Consejo Administrativo creado por el artículo 7.º, la Contaduría General

formará la nómina de los jefes y 2.^{os} jefes de las dependencias de servicios públicos que deben constituir la Asamblea especial á que el propio artículo se refiere, remitiéndola al Comité Ejecutivo cada tres años, en la segunda quincena de Noviembre, para los mismos fines.

Esta nómina se distribuirá por el Comité Ejecutivo á las respectivas oficinas.

Art. 2.^o A los efectos del artículo anterior, se considerarán 2.^{os} jefes de las dependencias de servicios públicos que no los tengan expresamente creados, á los empleados ó funcionarios comprendidos en la nómina elevada por el Consejo Administrativo á este ministerio y aprobada con fecha 23 de Noviembre último, sin perjuicio de las modificaciones á que dieren lugar la supresión ó la creación de servicios.

Art. 3.^o La convocatoria, forma de votación y escrutinio á observarse en la elección de que trata el artículo anterior, se sujetarán al siguiente procediniento:

- a) La convocatoria se hará por el Comité Ejecutivo, el que fijará día, hora y lugar para la celebración del acto que se realizará bajo la presidencia del señor Contador General de la Nación y actuando como secretario el del Consejo Administrativo.
- b) Los electores que por encontrarse fuera de la capital, por enfermedad ó por cualquier otro impedimento no puedan asistir personalmente, enviarán su voto escrito, bajo sobre cerrado, dirigido al señor Contador General de la Nación.

En el sobre deberá expresarse lo siguiente:

« Contiene el voto para miembros electivos titulares y suplentes del Consejo Administrativo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles ».

Dicho sobre deberá ser firmado por el empleado elector, poniéndole además el cargo en cuya virtud vota y el sello de la oficina á que pertenece. — El señor Contador General guardará el sobre cerrado hasta el día de la elección, para entregarlo á la Comisión Escrutadora á que se refiere el inciso c), en la Asamblea Electoral, conjuntamente con la nómina clasificada de todos los que por su carácter de jefes y 2.^{os} jefes tienen derecho á votar.

- c) Constituida la Asamblea á la hora señalada con los que concurren, nombrará el presidente tres escrutadores

que procederán á recibir los votos durante media hora y los sobres cerrados que hayan sido enviados de conformidad al inciso *b*).

- d*) Cada votante expresará en la balota, debajo de su firma, el cargo ó empleo en virtud del cual tiene derecho á votar. Los votos de los que no concurren por ausencia ú otro impedimento, deben venir con el sello de la oficina á que pertenece el votante.
- e*) Todos los votos se extenderán en una carilla de papel de oficio y se redactarán así:

VOTO PARA MIEMBROS ELECTIVOS DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES

Para titulares por

Don (aquí el nombre)

Don id.

Don id.

Para suplentes por

Don (aquí el nombre)

Don id.

Don id.

(*Lugar y fecha*).

(*La firma*).

Y debajo la expresión del cargo ó empleo que ejerce como jefe ó segundo jefe en la dependencia ó servicio en que está empleado, — y en el caso de votos de ausentes, deberá aplicarse además el sello á que se refieren los incisos *b*) y *d*).

- f*) La Comisión Escrutadora no recibirá ningún voto después de terminada la media hora que durará la votación.
- g*) La Comisión Escrutadora confrontará las balotas con la nómina clasificada de votantes que presentará el presidente al abrirse la sesión, y comunicado á la Asam-

blea el resultado del escrutinio, quedarán proclamados miembros electivos del Consejo las tres personas que hubiesen obtenido mayor número de votos. En caso de igualdad decidirá el sorteo que practicará la Comisión Escrutadora ante la Asamblea.

- h) No pueden votar ni ser votadas las personas que según el artículo 7.º de la ley son ya miembros titulares del Consejo Administrativo.
- i) Cualquiera duda que se suscitare durante la elección sobre aplicación de los preceptos de este reglamento, la resolverá de inmediato é inapelablemente el presidente.

Art. 4.º Verificada la elección, el presidente de la Asamblea dará cuenta de su resultado al Consejo Administrativo y éste comunicará á los electos sus nombramientos, convocará á los titulares y les dará posesión de sus cargos.

Art. 5.º Al mismo tiempo que se elijan los tres miembros integrantes del Consejo Administrativo, se elegirán otros tantos suplentes.

Los suplentes, llegado el caso, serán convocados para sustituir á los miembros titulares del Consejo por el orden del número de votos que hubieran obtenido al ser electos y por sorteo en caso de paridad.

Art. 6.º Los cargos de vicepresidente, tesorero, contador, secretario y el de asesor letrado del Consejo Administrativo, designados en la forma establecida por el artículo 8.º de la ley, se renovarán cada tres años, contados desde el 31 de diciembre de 1904.

Al efecto el Consejo celebrará sesión plena el tercer ó cuarto domingo de diciembre del último año.

Los vocales que hubiesen desempeñado los cargos expresados podrán ser reelectos.

Art. 7.º De conformidad á lo dispuesto en el inciso 1.º del artículo 12 y 58 de la ley, la Tesorería General de la Nación entregará al Comité Ejecutivo, mensualmente, en efectivo y sin descuento alguno, el importe de las cuotas que correspondan, debiendo hacerse la primera entrega el 1.º de agosto de 1905.

Simultáneamente con esa entrega pasará al mismo Comité, en formulario especial, una minuta en que se exprese el concepto de la entrega de esos fondos.

Desde igual fecha y con la minuta especial de que trata el

inciso anterior, la Comisión Nacional de Caridad y la Junta Económico Administrativa de la Capital entregarán mensualmente al Comité Ejecutivo, también sin descuento, el importe de las cuotas que respectivamente les correspondan, de conformidad á lo dispuesto en los citados artículos.

El rubro á que las tres reparticiones nombradas imputarán esas entregas, será el que determine la ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación, pero hará referencia á la que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y especificará el mes á que correspondan las entregas.

Art. 8.º Los descuentos de montepío y de diferencias por ascensos, establecidos en los incisos 2.º y 3.º del precitado artículo 12 de la ley, se liquidarán mensualmente por la Contaduría General, la Comisión Nacional de Caridad y las Juntas Económico Administrativas en los presupuestos respectivos á contar desde enero de 1905, bajo los rubros de «Ley 14 de octubre de 1904.—Montepío Civil, ó Diferencias por ascensos», según corresponda, y se harán efectivos por la Tesorería General así como por las Corporaciones nombradas.

Para el efecto, en los presupuestos mensuales que presenten las diversas oficinas públicas para su liquidación, se establecerán esos descuentos en columnas especiales.

En cuanto á los montepíos de noviembre y diciembre últimos, su liquidación se efectuará también por la Contaduría General, por décimas partes de su importe total, desde la misma fecha.

El importe de los descuentos se entregará quincenalmente por la Tesorería General al Comité Ejecutivo con las minutas del caso y las que también le remitirá la Contaduría General á los efectos del control respectivo.

La misma obligación se impone á la Comisión Nacional de Caridad y á las Juntas Económico Administrativas respecto del importe del montepío y de diferencias por ascensos, liquidados en los presupuestos de sus respectivas dependencias.

Art. 9.º Para la liquidación del montepío la Contaduría General, así como las Corporaciones mencionadas en el inciso 1.º del artículo anterior, tendrán presente lo dispuesto en el artículo 20 de la ley, relativamente al sueldo sobre que ha de hacerse efectivo en los casos de acumulación legalmente autorizada.

Respecto de las diferencias por ascensos, se observará lo dispuesto al final del inciso 3.º del precitado artículo 12.

Art. 10. A los efectos de la previsión del inciso 5.º, artí-

culo 12 de la ley, el señor Fiscal de Hacienda en el departamento de Montevideo, y los señores Agentes Fiscales en los departamentos de campaña, comunicarán por nota al Consejo Administrativo de la Caja la fecha y lugar de la apertura de testamentos cerrados ó de sucesiones testadas, en que conste la institución de derechos hereditarios ó de legados en beneficio de la Caja, para que ésta gestione por su entrega.

Igual obligación tendrán los escribanos de registro, cuando en sus protocolos autoricen escrituras en que se hagan donaciones en beneficio de la Caja.

Los señores fiscales, como los señores escribanos, harán las comunicaciones en los diez días siguientes á aquel en que tengan conocimiento de los hechos expresados.

Art. 11. La percepción de los impuestos de sellos y timbres de que trata el inciso 7.º del artículo 12 de la ley, estará á cargo de la Dirección de Impuestos Directos, la que entregará mensualmente su importe al Comité Ejecutivo con las minutas de control correspondientes.

El Comité Ejecutivo fijará los modelos de unos y otros á fin de que la Dirección de Impuestos proceda á la impresión litográfica con intervención de la Contaduría General de la Nación.

El valor de los sellos y timbres que corresponda emplearse en la expedición de cédulas, será el que fije la ley respectiva de timbres y papel sellado.

Art. 12. Las oficinas públicas que en cualquier forma apliquen multas á sus empleados, por inasistencia ó faltas en el servicio, deberán remitir el importe de dichas multas directamente al Comité Ejecutivo de la Caja, por formar parte de sus recursos, según el inciso 8.º del artículo 12 de la ley.

Art. 13. Para la liquidación mensual del descuento de 2 % progresivo, establecido en el inciso 9.º del precitado artículo 12, la Contaduría General, sin perjuicio de hacerlo efectivo en los respectivos presupuestos, formará una nómina de todos los pensionistas civiles y militares á quienes alcance dicho descuento y pasará á fin de cada año al Comité Ejecutivo de la Caja una copia autorizada de ella, para su debido conocimiento.

Art. 14. La percepción del impuesto de estampillas de montepío, creada por el inciso 11 del artículo 12, estará igualmente á cargo de la Dirección de impuestos en la forma y condiciones prevenidas por el artículo 11 de este decreto.

La Dirección de Impuestos dispondrá que esas estampillas se expendan en todas las agencias de la capital.

Art. 15. Sin perjuicio de la entrega mensual del producto de la venta de los sellos, timbres y estampillas á que se refieren los artículos anteriores, la Dirección de Impuestos Directos remitirá al Comité Ejecutivo, en todo el mes de Enero de cada año, una cuenta especial y peculiar á cada impuesto, en la forma que lo hace con los demás impuestos que administra.

Art. 16. El Consejo Administrativo observará rigurosamente lo dispuesto en el artículo 13 de la ley, colocando los fondos que perciba diariamente en cuenta corriente en el Banco de la República y los valores en custodia en la propia institución, percibiendo el Comité Ejecutivo, por intermedio de su tesorero, las rentas que produzcan para ser llevadas á la cuenta corriente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

Art. 17. Para el más exacto cumplimiento de las obligaciones que se impone por el artículo 14 de la ley, el Comité Ejecutivo constituirá de su seno comisiones especiales, con el cometido de ejercer el rol de examen, control y vigilancia que por el mismo se le prescribe.

Art. 18. La Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles será considerada como persona jurídica, y su representación oficial, en juicio y fuera de él, corresponderá á su presidente y secretario conjuntamente.

Sin embargo, para el ejercicio de esa representación en juicio y en lo tocante al manejo de fondos ó celebración de contratos, será indispensable la autorización del Consejo Administrativo, dada con conocimiento de causa.

Art. 19. Uno de los primeros actos del Comité Ejecutivo, será el de establecer el sistema de contabilidad y control de la Caja, así como el de redactar el cuestionario que prescribe el artículo 25.

Art. 20. La rendición mensual de cuentas á la Contaduría General de la Nación, se efectuará por el Comité Ejecutivo dentro de los primeros veinte días siguientes á cada mes vencido, y el estado general prevenido por el inciso 4.º del artículo 14 de la Ley, en el primer bimestre de cada año, á fin de que el Poder Ejecutivo pueda publicarlo en la Memoria del Ministerio de Hacienda.

Art. 21. Todas las oficinas de la nación remitirán al Comité Ejecutivo en todo el mes de Marzo próximo, en planillas uniformes que al efecto suministrará éste, una nómina de todos los empleados comprendidos en la ley que se regla-

menta, con expresión del cargo que ejerce, fecha de su ingreso al servicio público, plazas efectivas desempeñadas, dotaciones nominales, edad y demás informaciones que en ellas se establezcan.

La remisión de estas nóminas, con las que la Caja formará registros alfabéticos especiales, deberá verificarse ⁽¹⁾ anualmente al Comité Ejecutivo por las mismas oficinas en la época prefijada.

De la exactitud de los datos que contengan dichas nóminas, el Comité Ejecutivo responsabilizará á los empleados públicos que hayan suministrado datos erróneos.

Los datos que contengan las expresadas nóminas serán escrupulosamente controlados, en cada caso de solicitud de jubilación ó de pensión, con los informes que expida la Contaduría General.

DE LAS JUBILACIONES

Artículo 22. La solicitud de jubilación, cuando ésta proceda con arreglo á la ley, deberá presentarse ante el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el artículo 23 de aquella, debiendo el postulante consignar en formulario especial, que suministrará el Comité Ejecutivo, todos los hechos y circunstancias que en él se requieran, en orden á la fecha en que haya ingresado á servir en la Administración Pública, plazas desempeñadas, cómputo de años de servicio, etc.

Dichos formularios se considerarán parte integrante de la solicitud de jubilación.

Art. 23. La jubilación que acuerda la ley deberá imprescindiblemente solicitarse estando en el ejercicio activo de un cargo público, como lo preceptúa el artículo 29, ó dentro del plazo de seis meses cuando el solicitante hubiere cesado en el empleo por ministerio de la ley.

Art. 24. Los miembros del profesorado de la Universidad, que con arreglo á lo dispuesto en el inciso 3.º del artículo 4.º é inciso 4.º del artículo 12 de la ley, quieran computar servicios anteriores, abonarán á título de reintegros para el cómputo de sus servicios el 4 % de los sueldos devengados.

Art. 25. Las solicitudes de jubilación presentadas en la

(1) La palabra verificarse está usada aquí en el sentido de hacerse ó efectuarse.

forma que previene el artículo 22 de este decreto é instruídas con el certificado médico y partida de nacimiento cuando estos recaudos procedan, se sustanciarán con los informes y dictámenes de la Contaduría General y de la Caja, que establezcan si con arreglo á la ley corresponde ó no acordarse la jubilación solicitada.

En caso de oposición por parte de la Caja, el Poder Ejecutivo en observancia del precepto establecido en el artículo 23, resolverá lo que considere corresponder, sin perjuicio de los recursos acordados por la propia ley en su artículo 26⁽¹⁾.

Art. 26. Los miembros del profesorado á que se refiere la excepción establecida en el inciso 3.º del artículo 4.º de la ley, deberán expresar por escrito ante el Comité Ejecutivo su intención de seguir abonando durante la licencia el montepío correspondiente.

Si así no lo hicieran ó no pagasen con regularidad la cuota debida, no se les computará á los efectos de la jubilación el tiempo por el que hubiesen dejado de abonar dicha cuota, sin perjuicio de verificarse en la debida oportunidad la exactitud de los datos en que se funde la petición del interesado.

Art. 27. Las cédulas de jubilaciones y pensiones que se expidan serán impresas como se establece por el artículo 11 del presente decreto y se otorgarán y sellarán de conformidad á lo dispuesto en el artículo 28 de la ley, insertándose en los libros de toma de razón de la Caja y de la Contaduría General.

Art. 28. Tanto para la fijación del montepío como para las de las jubilaciones, se tomará como base de liquidación las dotaciones nominales que establecieran los respectivos presupuestos.

La cantidad así liquidada y que no podrá exceder en ningún caso del máximo fijado por el artículo 18 de la ley, (inciso 1.º y último), será el importe de la respectiva jubilación del empleado, sin más deducción ó descuento que el que establece el inciso 2.º del artículo 12 de la propia ley y el que pudiera corresponder transitoriamente por concepto de reintegro.

(1) Véase la nota al artículo 23 de la ley.

desempeñados por mujeres, á fin de que el precepto legal citado tenga en favor de las pensionistas la más decidida aplicación.

Las demás oficinas del Estado darán igual preferencia toda vez que existan plazas vacantes que por la índole de sus cometidos puedan ser servidas debidamente por pensionistas.

Art. 34. Cuando una pensionista contraiga matrimonio, deberá ponerlo en conocimiento del Comité Ejecutivo por escrito y dentro de los diez días de su celebración, bajo pena de una multa de diez pesos y sin perjuicio de las acciones judiciales que á la Caja correspondieran por el reintegro de pensiones indebidamente percibidas por la pensionista.

Art. 35. Las personas comprendidas en el artículo 45 de la ley deberán solicitar por escrito del Comité Ejecutivo el pago de las cuatro mensualidades que por el mismo se les acuerda, justificando su derecho en la forma y con los requisitos establecidos por los artículos 29 y 30 de este decreto.

De estas solicitudes conocerá el Comité Ejecutivo, previo informe de la Contaduría General, solicitado por conducto del Ministerio de Hacienda.

En caso de denegación, podrá recurrirse en la vía y forma prevenidas por el artículo 25 y siguientes de este decreto.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 36. Ni la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, ni ninguna repartición pública tomarán razón de operaciones y descuentos que se hagan ó autoricen en oposición á lo establecido por el artículo 46 de la ley que se reglamenta.

Art. 37. Las resoluciones penales del Comité Ejecutivo, dictadas en los casos de violación á lo dispuesto en el artículo 48 de la ley, no admiten recurso alguno.

Las licencias que se concedan con sujeción á la ley se anotarán en un registro especial de licencias, el que será examinado trimestralmente á los efectos del control que debe ejercerse por el Comité Ejecutivo ó Comisión Especial delegada al efecto.

Art. 38. Cuando en virtud de las disposiciones de la ley que se reglamenta y de este decreto, se impongan multas que por recaer en personas que no reciban sueldo, jubilación ó pensión, no puedan hacerse efectivas directamente por la Caja en dicho sueldo, jubilación ó pensión, el Comité, por sus re-

presentantes legales, tendrá acción ejecutiva contra los bienes del multado, acción que se ejercitará ante el Juzgado de Paz del domicilio de éste.

Art. 39. Las personas á quienes alcancen los beneficios que se acuerdan por el artículo 49 de la ley, deberán hacer valer sus derechos ante el Ministerio de Hacienda y con absoluta prescindencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Art. 40. Los empleados que quieran acogerse á los beneficios que se declaran por el artículo 50 de la ley, deberán proceder en la forma prevenida por el citado artículo, iniciando por escrito ante el Comité Ejecutivo el respectivo expediente.

Sin perjuicio de esa petición, establecerán en formulario especial todos los hechos y circunstancias que en él se requieran respecto á la fecha de su ingreso á la Administración Pública, etc.

Estos expedientes se sustanciarán con los informes del caso, que el Comité solicitará de la Contaduría General por conducto del Ministerio de Hacienda, para la comprobación precisa de los años de servicios que haya prestado el postulante en las dependencias expresadas en el artículo 3.º de la ley, como para la fijación exacta de los reintegros que adeude con arreglo á lo establecido en el artículo 52 de la misma.

Art. 41. Llenadas las formalidades prevenidas en el artículo anterior y justificados los extremos exigidos por la ley, el Comité Ejecutivo dictará resolución declarando al solicitante amparado con los beneficios de la computación de los años de servicios que se hayan comprobado y fijando á la vez las cuotas mensuales que por concepto de reintegros por montepíos deba abonar con sujeción al porcentaje y escala establecidos en el artículo 51 si el postulante no optase por el pago al contado.

Esta resolución, de la que se dará copia al interesado si la pidiera, en el sellado y con la estampilla de montepío correspondiente, se comunicará á la Contaduría General.

Art. 42. El Comité Ejecutivo abrirá á cada empleado que se declare amparado con los beneficios de la computación de años anteriores, una cuenta corriente para la contabilidad relativa á los montepíos que deba reintegrar, y el primero de cada mes pasará á la Tesorería General ú oficinas pagadoras una planilla ó planillas nominales con indicación de los descuentos que deban efectuarse al proceder al pago de los respectivos presupuestos.

El producto de esos descuentos se entregará quincenalmente por la Tesorería General ú oficina pagadora al Comité Ejecutivo, expresando en la minuta respectiva el concepto de esas entregas.

Art. 43. Las personas que no desempeñen actualmente cargos públicos pero que quieran hacer valer servicios anteriores, quedarán sujetas al procedimiento indicado en los artículos precedentes, abonando el cuatro por ciento de todos los sueldos devengados, como se establece en el artículo 51 de la ley, al ingresar de nuevo á la Administración Pública.

Los reintegros de que trata el presente artículo continuarán efectuándose sobre las personas que correspondan al cónyuge, hijos ó madre viuda, cuando al fallecimiento del causante no se hubiese satisfecho íntegramente el montepío liquidado y reconocido en el expediente respectivo.

Se procederá de igual modo en el caso previsto en el artículo 54 de la ley.

Art. 44. A los efectos del pago de los gastos de examen facultativo de que tratan los artículos 24 y 25 de la ley, el Comité Ejecutivo formará un arancel especial.

Art. 45. Las transgresiones que se cometan contra lo dispuesto en el artículo 55 de la ley, se harán constar por el Comité Ejecutivo en expediente que se instruirá al efecto, antes de dictarse por el Poder Ejecutivo la resolución penal que corresponda.

Art. 46. Las viudas é hijos de empleados públicos que se consideren amparados por las disposiciones contenidas en el artículo 57 de la ley, en mérito á que los servicios de sus causantes hayan alcanzado á un período de veinticinco años, computados en la forma establecida por el artículo 18, cuando ella proceda, deberán iniciar sus gestiones dentro del plazo de seis meses, contados desde la sanción de la misma, para la sustanciación del caso, aun cuando no hayan de gozar la pensión que les pueda corresponder hasta después del transcurso de dos años, conforme á lo dispuesto en el inciso 2.º del artículo 56 y previa liquidación de los reintegros de montepío á que hubiere lugar.

Art. 47. Comuníquese, publíquese y dese al L. C.

BATLLE Y ORDÓÑEZ.

JOSÉ SERRATO.

APÉNDICE

LEYES Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

APÉNDICE

LEYES Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Impuestos y descuentos sobre los sueldos y pensiones

LEY CREANDO UN IMPUESTO DE 20 % SOBRE VARIAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

Poder Legislativo.

*El Senado y Cámara de Representantes de la República
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,*

DECRETAN:

Artículo 1.º Créase un impuesto de 20 % que regirá tan sólo durante el año 1882 (1), sobre los rubros siguientes del Presupuesto General de Gastos: 1.º Plana Mayor General; 2.º Estado Mayor Pasivo; 3.º Pensionistas Militares; 4.º Lista 7 de Septiembre; 5.º Cuerpo de Inválidos; 6.º Viudas y Menores; 7.º Jubilados, Pensionistas Civiles y Pensionistas Graciables.

(1) Las leyes posteriores de presupuesto han mantenido este impuesto ya declarándolo expresamente como la del presupuesto 1886-1887 en el artículo 3.º, ya haciendo en las respectivas partidas el descuento, con la indicación de que se hace por el referido impuesto.

Véase además el decreto del 6 de febrero de 1891 y sus notas.

Art. 2.º Derógase la ley de 29 de Agosto de 1879 y la interpretativa del 21 de Julio de 1881 (1).

Art. 3.º Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea General, en Montevideo á diez y ocho de enero de mil ochocientos ochenta y dos.

ALEJANDRO CHUCARRO,
Presidente.

Francisco Aguilar y Leal,
Secretario del Senado.

José Luis Missaglia,
Secretario-Redactor de la Cámara de RR.

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 21 de enero de 1882.

Cumplase, acúsesse recibo, comuníquese y publíquese.

Rúbrica de S. E.

CUESTAS.

(1) La ley de 30 de agosto de 1879 (fecha del cumplase de la del 29 como dice la referencia), creó un impuesto gradual de cinco á cincuenta por ciento sobre los rubros siguientes: 1.º Estado Mayor Pasivo; 2.º Pensionistas Militares; 3.º Jefes, Oficiales y Servidores de la Independencia; 4.º Lista 7 de Septiembre; 5.º Cuerpo de Invalidos; 6.º Viudas y menores; 7.º Jubilados; 8.º Pensionistas Civiles y Pensionistas graciables; el impuesto gravaba toda anualidad y el Poder Ejecutivo deberá determinar la distribución gradual del impuesto, con arreglo al monto de las anualidades.

La ley de 21 de julio de 1881 establecía que el impuesto de cinco á cincuenta por ciento sobre sueldos y pensiones creado por la ley de 1879, se repartiría gradualmente, en proporción al monto de las primitivas anualidades, sin distinción de su origen ó naturaleza, desde el 1.º de enero de 1882.

Pensiones vitalicias

**QUE LAS QUE SE ACUERDAN POR GRANDES SERVICIOS
Á LA PATRIA NO SON EMBARGABLES**

Ministerio de Gobierno.

Montevideo, 1.º de junio de 1884.

Considerando: que las pensiones vitalicias que acuerda la Asamblea General por relevantes servicios prestados á la patria, tienen el carácter de alimenticias y por lo tanto su fin exclusivo es garantizar el decoro personal de los altos y patrióticos servidores, en que por su crítica situación pecuniaria, no pueden atender debidamente á su subsistencia y la de sus familias;

Considerando: que si tales pensiones fueran embargables, se menoscabaría el objeto y fin de las leyes que las autorizan,

El Presidente de la República, acuerda y

DECRETA:

Artículo 1.º Declárase que las pensiones vitalicias acordadas á los ciudadanos por grandes y elevados servicios prestados á la patria, no son embargables, conforme al alcance de las leyes que las acuerdan.

Art. 2.º Comuníquese, publíquese y dese al L. C.

SANTOS.

CARLOS DE CASTRO.

Las pensiones y el presupuesto

**QUE LOS PENSIONISTAS Y JUBILADOS PERCIBAN SUS HABERES
POR LAS PLANILLAS GENERALES**

*El Senado y Cámara de Representantes de la República
Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,*

DECRETAN:

Artículo 1.º Desde la promulgación de la presente ley todas las partidas provenientes de Jubilados y Pensionistas que han figurado hasta la fecha en los presupuestos de las respectivas secretarías del Cuerpo Legislativo y demás Oficinas del Estado, pasarán á figurar en las planillas generales correspondientes.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Sala de las sesiones del Senado, en Montevideo, á 13 de julio de 1886.

PEDRO CARVE,
1.º Vicepresidente.

Francisco Aguilar y Leal,
Secretario.

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 15 de julio de 1886.

Cúmplase, etc.

SANTOS.

JOSÉ L. TERRA.

Nuevo impuesto sobre sueldos y pensiones

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º Desde el 1.º de febrero próximo inclusive quedará modificado el Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 1886-1887, con las rebajas, supresiones y ampliaciones que se detallan en las cinco planillas de los Ministerios respectivos, que importan la suma de 472.518 pesos y 77 centésimos.

Art. 2.º Desde esa misma fecha quedan reducidos en un 10 % todos los sueldos de los empleados y funcionarios públicos establecidos en el mismo presupuesto, con excepción de los que se detallan en el artículo siguiente.

Art. 3.º Créase un impuesto de 5 % sobre los siguientes rubros del Presupuesto General de Gastos, sin perjuicio del ya establecido por la ley de 21 de enero de 1882.

1.º Plana Mayor General, 2.º Estado Mayor Pasivo, 3.º Pensionistas Militares, 4.º Lista 7 de Septiembre, 5.º Cuerpo de Inválidos, 6.º Viudas y Menores, 7.º Jubilados y pensionistas civiles y pensionistas graciabiles.

Art. 4.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones, de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo á 5 de febrero de 1887.

J. ROUSTAN,
1.º Vicepresidente.

Manuel García y Santos,
Secretario-Redactor.

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 7 de febrero de 1887.

Cúmplase, etc.

TAJES.

ANTONIO M. MÁRQUEZ.

Descuento del 10 % sobre los sueldos y pensiones

SU ALCANCE Á LOS SUELDOS DE LA JUNTA ECONÓMICO
ADMINISTRATIVA DE LA CAPITAL

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 6 de febrero de 1891.

En reglamentación de la ley de Presupuesto que ha de regir en el 2.º semestre del ejercicio económico de 1890-91, promulgada con fecha 30 del próximo pasado enero,

El Presidente de la República, acuerda y

DECRETA:

Artículo 1.º De acuerdo con el artículo 1.º de la citada ley ⁽¹⁾, el descuento de 10 % á los empleados civiles y militares de la Administración empezará á efectuarse en los presupuestos respectivos desde el mes de enero inclusive.

Art. 2.º La Junta Económico Administrativa de la Capital, vertirá mensualmente en la Tesorería General, después de pagar su presupuesto, el producto del descuento del 10 % ⁽²⁾.

Art. 3.º Comuníquese, etc.

HERRERA Y OBES.

ALCIDES MONTERO.

(1) El artículo 1.º de la ley de presupuesto para el segundo semestre del ejercicio de 1890-91, estableció un descuento de 10 % sobre todos los sueldos, pensiones y jubilaciones, como los presupuestos anteriores á contar de 1882 y los siguientes hasta la fecha.

(2) El artículo 2.º de la ley de presupuesto promulgada el 30 de enero de 1891 y á que hemos hecho referencia, dice:

«Art. 2.º El impuesto de 10 % establecido por la presente ley sobre el presupuesto de la Junta Económico Administrativa de la Capital, acrecerá á las rentas generales de la Nación y deberá ser vertido en la Tesorería General á medida que se verifiquen (*) los pagos.

(*) La palabra verifiquen está por hagan ó efectúen.

Montepío Militar

LA ANTIGÜEDAD Y EL DESCUENTO

Fiscalía General Militar.

Excmo. señor:

El Fiscal General Militar evacuando la vista conferida por V. E. dice: que en concepto suyo todas las antigüedades, para los efectos del Montepío, deben entenderse desde el día en que los señores Jefes y Oficiales hayan empezado á sufrir en sus sueldos el descuento creado por la ley de 3 de mayo de 1837, pues á estar á la letra y espíritu terminante de la predicha disposición legal, el socorro para las viudas, hijos, etc., de militares, en que aquella institución piadosa se resuelve, no reconoce otra causa, ni tiene más justificación racional que la cuota con que sus causantes concurren mensualmente á la constitución y aumento de los fondos con que se atiende por el Estado esa carga que se ha impuesto.

En este orden de ideas, el infrascripto entiende que las disposiciones del artículo 428 del Código Militar y sus demás concordantes, sólo se refieren á los efectos que produce la antigüedad del Ejército, en la acepción restringida de la palabra, pues á no ser así, la ley de Mayo ya citada y que por otra parte en nada se opone á las prescripciones que el Código Militar consagra, se vería repetidamente desvirtuada en sus fundamentos, puesto que pudiendo ocurrir casos de fallecimiento de un Oficial que sólo tuviera una antigüedad de cuatro meses de tal y una de doce años como soldado, se tendría, que admitido para los efectos del Montepío el artículo 428 mencionado, el Oficial que durante doce años se sustrajo al descuento que aquél sufre en sus haberes, transmitiría á sus deudos un derecho que da lugar á una pensión que debe ser satisfecha con los fondos de aquellos que lo han sopor-tado desde los comienzos de su carrera, lo que no sólo es injusto sino contrario á la ley del año 37 que el Fiscal menciona.

Por estas consideraciones y demás que suplirá la ilustración superior de V. E., el Fiscal General Militar opina que las antigüedades para los efectos del Montepío, sólo deben contarse desde la fecha en que han empezado á sufrir descuentos en los haberes respectivos por semejante concepto, los Jefes y Oficiales del Ejército.

No obstante lo expuesto, V. E. resolverá lo que juzgue más arreglado á justicia.

Montevideo, 12 de junio de 1893.

Manuel M. Rodríguez.

Ministerio de Guerra y Marina.

Montevideo, 17 de enero de 1894.

Téngase por resolución superior la vista fiscal precedente y á sus efectos transcribase á quienes corresponda.

HERRERA Y OBES.

LUIS E. PÉREZ.

Cédulas y pensiones

PROCEDIMIENTO PARA SER OTORGADA Á LAS VIUDAS
Y MENORES MILITARES

Ministerio de Guerra y Marina.

Montevideo, 21 de noviembre de 1894.

Considerando: Que el procedimiento que se observa actualmente para la concesión de cédulas y pensiones de viudas y menores militares no se ajusta enteramente á las disposiciones contenidas en las leyes vigentes en cuanto se

refiere al sueldo que debe servir de base á la fijación de su proporcionalidad con arreglo al artículo 610 del Código Militar;

Que una práctica administrativa ha establecido infundadamente el hecho de computarlos sobre el sueldo de cuartel ó actividad de los causantes, cuando muchas veces éstos no han abonado el Montepío como en servicio activo sino por escasísimo tiempo, lo que importa un desconocimiento del objeto primordial de la institución y constituye un gravamen injusto que pesa sobre el Estado;

Que es necesario regularizar de un modo completo ese servicio de la Administración Pública con arreglo á principios de verdadera justicia, desde que siendo el Montepío una carga que la Nación reconoce sobre el Tesoro Público, por la administración que ha asumido de esos fondos (artículo 583 del Código Militar) debe presidir su distribución la más perfecta equidad, consultando la proporción con que han contribuido los militares á formarlo.

Atento á que el artículo 474 del Código Militar determina que los sueldos con que la Nación remunera los servicios del personal del Ejército, sus dependientes y agregados, serán establecidos en la Ley de Presupuesto y deben por consiguiente graduarse las pensiones con arreglo á ellos.

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros,

DECRETA:

Artículo 1.º Desde la fecha en adelante, toda cédula y pensión que se otorgue á viudas y menores de los militares que al fallecer se hallaren en servicio activo, cuartel ó de policía, se computará sobre el sueldo que disfrutaban sus causantes según la Ley de Presupuesto.

Art. 2.º En las cédulas y pensiones que se otorguen á las viudas y menores militares que al fallecer revistaran en situación de reemplazo ó en la lista civil, se les computará la pensión con arreglo al sueldo de reemplazo, con excepción de los siguientes casos, en que se les computará como en servicio activo:

- 1.º Cuando correspondiendo dos terceras partes de la pensión, se compruebe haber abonado el Montepío como en servicio activo durante veinticinco años.

- 2.º Cuando correspondiendo la mitad del sueldo, se compruebe haber abonado el Montepío como en servicio activo durante veinte años.
- 3.º Cuando correspondiendo la tercera parte del sueldo, se compruebe haber abonado el Montepío como en servicio activo durante quince años.

Art. 3.º En todos los casos las pensiones se acordarán sobre la base del sueldo de la clase militar del causante, que establezca la Ley de Presupuesto al tiempo de fallecer aquél.

Art. 4.º Comuníquese, etc.

IDIARTE BORDA.

JUAN J. DÍAZ.—MIGUEL HERRERA
Y OBES.—JAIME ESTRÁZULAS.—
JUAN J. CASTRO.—FEDERICO R.
VIDIELLA.

Pensionista militar

LA NULIDAD DEL MATRIMONIO NO DA DERECHO Á RECUPERAR
LA PENSIÓN DE HIJA SOLTERA

Fiscalía de Gobierno.

Excmo. señor:

El derecho de la pensión debe apreciarse teniendo en cuenta la condición de la persona que la pretende á la fecha del fallecimiento del causante.

Según eso, si cuando falleció el Sargento Mayor don Miguel Fernández, su hija doña Alejandrina era casada, razón por la cual se transmitió á su señora madre doña Manuela Vega exclusivamente, es indudable que la circunstancia de haberse declarado después la nulidad de su matrimonio, no ha podido hacer revivir un derecho ya extinguido legalmente.

A juicio de este Ministerio debe desestimarse la solicitud en vista. V. E., no obstante resolverá lo que juzgue más acertado.

Montevideo, 1.º de enero de 1894.

José M. Reyes.

Montevideo, 23 de enero de 1894.

Por lo que resulta de los documentos precedentes, no ha lugar.

HERRERA Y OBES.

LUIS E. PÉREZ.

CONFIRMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ANTERIOR

Fiscalía de Hacienda.

El Fiscal de Hacienda opina, como el señor Fiscal de Gobierno, que debe V. E. mantener la resolución de 23 de enero de 1894, corriente á f. 13.

Tanto la ley de 19 de marzo de 1835, como el reciente Código Militar en su artículo 590, fijan como condición indispensable para que las hijas mujeres tengan derecho á pensión, el que no hayan tomado estado.

La señora Fernández tomó estado en 1859, y aun cuando el matrimonio fué declarado nulo en 1890, eso nada importa desde que la condición de la ley para denegar el derecho á la pensión ya estaba cumplida con mucha anterioridad.

Y es de observar, Excmo. señor, que la anulación definitiva, por decir así, del matrimonio de doña Alejandrina Fernández, sólo se debe á hecho propio de esta señora que consintió la estupenda sentencia (el Fiscal no encuentra otro término más apropiado para calificar esa resolución) del Juez Letrado Departamental, corriente á f. 79 y siguiente del expediente agregado; y no sólo renunció voluntariamente á todo recurso, sino también á los derechos ó beneficios que

hubieran podido corresponderle por el mismo hecho de disolución del matrimonio.

No, Excmo. señor. La ley ha querido amparar á huérfanos desvalidos, á personas que al fallecimiento de sus causantes, queden en condiciones que se reputen ó presuman fundadamente difíciles para su mantenimiento ó sostén.

Por esas consideraciones y teniendo presente que el matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades de la ley (las esenciales fueron en este caso cumplidas, aun cuando otra cosa se establezca en la sentencia mencionada), produce los mismos efectos que el válido (artículo 183, del Código Civil), opina el Fiscal que suscribe, salvo el más autorizado parecer de V. E., en el sentido indicado al principio.

Montevideo, 10 de septiembre de 1895.

E. Garzón.

Ministerio de Guerra y Marina.

Montevideo, 30 de septiembre de 1895.

De acuerdo con los dictámenes de los señores Fiscales de Hacienda y Gobierno, se resuelve: mantener la resolución superior de fecha 23 de enero de 1894, devolviéndose al Ministerio de Gobierno el expediente iniciado por don Miguel A. Sierra contra doña Alejandrina Fernández, sobre nulidad del matrimonio, y cuyo envío fué solicitado.

IDIARTE BORDA.

JUAN J. DÍAZ.

Embargos de sueldos de Empleados

FORMA PARA LA SUBDIVISIÓN EN LOS CASOS DE CONCURSO

«Tesorería General de la Nación. — N.º 794. — Excmo. señor Ministro, Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda, Don Federico R. Vidiella. — Montevideo, octubre 13 de 1896. — Señor Ministro: Al dictar el Superior Gobierno

el decreto de 7 de septiembre de 1894, limitando la intervención de las oficinas públicas en los embargos judiciales, á la tercera parte sólo del sueldo de los empleados conforme á lo establecido en el artículo 2237 del Código Civil, tuvo en cuenta y así lo expresó en uno de los considerandos, el número siempre creciente de pedidos de cesiones sobre la parte del sueldo no embargable que, á darles curso, tenía necesariamente que entorpecer la marcha regular de las reparticiones en donde se hicieran efectivas por la necesidad de establecer una contabilidad especial, laboriosa y complicada para esa clase de descuentos. — Entonces, Excmo. señor, regia la prudente medida dictada en abril 3 de 1888 en acuerdo de Gobierno, por la que se establecía que todos los documentos judiciales necesitaban para su tramitación ante el Poder Ejecutivo que se dirigieran al Ministerio de Fomento y así el Poder Administrador podía darse cuenta exacta de la tramitación y número de embargos y pudo á su tiempo tomar una medida que corte los abusos de las cesiones de sueldos no autorizados por la Ley. — Pero posteriormente, á pedido del Tribunal Superior de Justicia, el Poder Ejecutivo dió su aquiescencia para que las oficinas públicas pudieran comunicarse directamente sin intervención superior y debido á esa resolución escapa al control del poder Administrativo el número creciente de embargos por subdivisiones de la parte embargable. — Se presenta actualmente el caso de que los señores Jueces de Comercio de Primero y Segundo Turno, Departamental y el de Paz de la 5.^a Sección definiendo al pedido de parte interesada hecho en los autos seguidos contra los señores N. N., N. N., N. N. y N. N. (casos que se repetirán en otras interdicciones de embargos) han dispuesto, comunicándolo así á Tesorería, que de acuerdo á lo establecido en el artículo 3.^o de la ley de 13 de julio de 1895 se procede á la subdivisión de una tercera parte del sueldo de esos señores, entregándola á los que se designan en los mismos oficios. — Se ha omitido establecer en estos que se han llenado las prescripciones generales de esa ley sobre concursos, entre otros el Juzgado ha transcripto simplemente el pedido de la parte interesada amparándose del beneficio que le concede el artículo 3.^o de la ley para obtener el cobro de su crédito; y en otro, en el embargo de la tercera parte del sueldo del señor don N. N. declarado su concurso por auto de 7 de diciembre de 1894 del señor Juez Departamental, se dispone ahora en 30 de septiembre de 1896, en los autos seguidos por don N. N. que la

tercera parte del sueldo del señor N. N. se prorratee entre todos los embargantes.—Sólo la ignorancia de la existencia de ese concurso puede haber dado lugar á esta segunda disposición, porque á no ser así se ofrecía el caso de dos concursos de acreedores sobre un mismo bien.—Esta oficina entiende que la tercera parte del sueldo del empleado público ó sea el bien embargado procede prorratearse entre los acreedores generales que tengan derecho á percibirla, y ello está determinado en el artículo 3.º de la ley que he citado, pero esa operación de prorrata ó subdivisión de la tercera parte de sueldo corresponde que la efectúe la Tesorería y debe ser entregada al síndico en los casos de concurso y en los otros al Banco de la República (sección de depósitos judiciales) donde ya van los fondos de varias interdicciones judiciales á pedido de las partes. Por este medio se evitará una distribución parcial y que importa trabajo material é impone la contabilidad de innumerables cuentas corrientes que implica para el escaso personal de Tesorería, pérdida de tiempo necesario para atender á su verdadero cometido y al mismo tiempo se daría á la sección de depósitos judiciales—mediante la corta comisión que cobra, la intervención que debe tener en los depósitos por mandato judicial.—Por estos fundamentos tengo el honor de dirigirme á V. E. pidiendo quiera tener á bien resolver en el sentido que me permito indicarle.—Dios guarde á V. E.—*J. H. Arredondo*».

«Fiscalía de Gobierno.—Excmo. señor:—La Tesorería General de la Nación como oficina receptora de fondos, en cuya virtud paga mensualmente el presupuesto general de gastos, tiene la obligación, respetando los mandatos de los señores jueces, de retener la tercera parte embargable del sueldo de aquel empleado que pertenezca á la repartición que pague. La orden de retención de esa tercera parte supone ó bien depósito en Tesorería durante un tiempo más ó menos largo, ó bien su entrega mensual al interesado que bien puede ser el propio acreedor ó el Juzgado que oficio, por así resultar del expediente. En una palabra, la única obligación de la Tesorería consiste en retener y entregar íntegramente la tercera parte embargada. La queja, pues, que interpone esa Oficina, debe ser tomada en consideración por el Gobierno, porque no entra en la índole de sus fun-

ciones entender en la subdivisión de esa tercera parte, abrir cuentas corrientes por ese concepto, etc., etc.—Tal tarea, incumbe en caso de concurso á los síndicos y en caso de cumplimiento de los embargos en el orden de la Ley de 13 de julio de 1895, al Actuario respectivo.—Pero como puede suceder, que los embargos dimanen de diferentes Juzgados, la parte retenida deberá entonces ir á la sección de depósitos judiciales del Banco de la República quien efectuará esa operación por una ínfima comisión como dice la Tesorería.—En el caso ocurrente, debe la Tesorería hacer presente á los Juzgados exhortantes las observaciones apuntadas, para que el Juez provea lo que corresponda, y con el fin de evitar entorpecimientos, convendría que V. E., se dirigiera al Excmo. Superior Tribunal de Justicia á objeto de que dispusiese que las operaciones de subdivisión y entrega de la tercera parte embargable de los sueldos de los empleados debe practicarse por los síndicos de los concursos ó por los actuarios y en caso de imposibilidad por la sección de depósitos judiciales del Banco de la República á quienes entregará el total de la retención mensual al objeto expresado.—Tal es la opinión del Fiscal, salvo la más ilustrada de V. E.—Montevideo, octubre 22 de 1896.—*José M. Reyes*».

« Ministerio de Hacienda.—Montevideo, noviembre 24 de 1896.—De conformidad con el señor Fiscal en el precedente dictamen y habiéndose resuelto que la Oficina de Crédito Público continúe con el servicio de contabilidad de los Depósitos Judiciales, de acuerdo con la Base 15.^a de la Ley Orgánica del Banco de la República, el Gobierno resuelve: Someter á la Oficina de Crédito Público la operación de subdivisión y entrega de la tercera parte de los sueldos cuyos embargos dispongan los Juzgados en los casos *únicos* á que se refiere el artículo 3.^o de la Ley de 15 de julio de 1895, á cuyo efecto la Tesorería General le entregará mensualmente el importe de esa tercera parte, debiendo al mismo tiempo comunicárselo á los Juzgados que libraron las órdenes de retención ó subdivisión en la forma indicada. En consecuencia librese oficio al Ministerio de Gobierno, con transcripción de todo á fin de que lo comu-

nique al Superior Tribunal de Justicia á los efectos consiguientes. — Comuníquese á la expresada Oficina de Crédito y vuelva á los efectos á la Tesorería.

IDIARTE BORDA.

FEDERICO R. VIDIELLA.

Maestros diplomados

EJERCICIO DEL PROFESORADO

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º El diploma de maestro ó maestra, una vez obtenido legalmente, habilita en todo tiempo, para ejercer el profesorado en todas las escuelas públicas del Estado.

Queda por consiguiente derogado el artículo 17 del Decreto Ley de 24 de Agosto de 1877.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo á 14 julio de 1897.

ALCIDES MONTERO,
Presidente.

Manuel García y Santos,
Secretario - Redactor.

Ministerio de Fomento.

Montevideo, 16 de julio de 1897.

Cumplase, acúsesse recibo, comuníquese, insérte en el R. N. y publíquese.

IDIARTE BORDA.

JUAN JOSÉ CASTRO.

Empleados públicos

ACEFALÍAS. — DIFERENCIAS DE SUELDOS. — SUSPENSIONES

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 9 de mayo de 1898.

Considerando que la gestión regular de la administración pública es inconciliable con las frecuentes reclamaciones sobre diferencias de sueldos deducidas por los empleados que reemplazan accidentalmente á sus superiores jerárquicos, ó que desempeñen funciones de otros en los casos de acefalía, enfermedad, licencias, suspensiones ó destituciones, y

Considerando también que para llegar á ese fin es necesario establecer y dejar sentada la doctrina legal que ha de regir al respecto, de manera que no se grave el erario público con erogaciones no previstas ni autorizadas por la ley de presupuesto,

El Presidente Provisional, en ejercicio del Poder Ejecutivo, en consejo de Ministros, acuerda y

DECRETA:

Artículo 1.º Toda vez que quedara acéfala una plaza cualquiera del servicio administrativo por muerte ó renuncia, el empleado inmediato á quien corresponda desempeñarla accidentalmente, no tendrá derecho á la diferencia de sueldo durante los primeros treinta días de la acefalía. Pero pasado ese periodo se le liquidará la diferencia por todo el tiempo de su ejercicio.

Art. 2.º Si la ausencia fuese motivada por licencia ó enfermedad, el empleado inmediato desempeñará la plaza sin remuneración alguna durante tres meses; vencido ese término se le liquidará la diferencia á cargo del ausente por todo el tiempo en que ejerciese las funciones de aquél.

Art. 3.º En caso que la ausencia de un empleado fuese motivada por una comisión oficial gratuita, el Estado abonará la diferencia después de los tres meses.

Art. 4.º Respecto de los empleados suspendidos y suma-

riados, se estará á lo dispuesto en el artículo 44 del Código Penal. En este caso, si el empleado fuese destituido, el inmediato que desempeñó su puesto, tendrá derecho á la diferencia devengada durante todo el periodo de su ejercicio, — pero carecerá de este derecho si aquél fuese repuesto.

Art. 5.º Queda derogada toda disposición administrativa que se oponga á este Decreto.

Art. 6.º Comuníquese, publíquese y dese al L. C.

CUESTAS.

JOSÉ R. MENDOZA. — EDUARDO MAC-
EACHEN. — JOAQUÍN DE SALTE-
RAIN. — JACOBO A. VARELA. —
GREGORIO CASTRO.

Impuesto de 5 % sobre los sueldos y pensiones líquidas

ARTÍCULO 7.º DE LA LEY DEL 18 DE OCTUBRE DE 1898, CREANDO
LA DEUDA DE CERTIFICADOS DE TESORERÍA

Art. 7.º A partir desde el presupuesto de Octubre, créase un impuesto de 5 % sobre los sueldos líquidos de todos los empleados y pensionistas de la Nación, sin excepción alguna y comprendidas las dietas de los miembros del Consejo de Estado y del Poder Legislativo, el personal de las Secretarías, la Junta de la Capital y las reparticiones dependientes de la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública.

Embargos de empleados y pensionistas

INTERVENCIÓN DE LA OFICINA DE CRÉDITO PÚBLICO

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 25 de julio de 1899.

Con el propósito de centralizar en una sola oficina todos los embargos que pesan sobre los sueldos civiles y militares á cargo de la Nación, cuya gestión corresponde á la Oficina de Crédito Público por tener á su cargo la Administración de los depósitos judiciales, de acuerdo con la Ley de 24 de marzo de 1892,

El Presidente de la República teniendo en cuenta el mejor servicio público, acuerda y

DECRETA:

Artículo 1.º Cométese á la Oficina de Crédito Público la administración exclusiva y percibo de todos los embargos, y traslados que se traben en adelante sobre los haberes de los empleados y pensionistas civiles y militares.

Art. 2.º La Oficina de Crédito Público, entregará á los interesados, mediante la orden de Juez competente, el importe de los embargos que hayan sido decretados judicialmente.

Art. 3.º La Comisión que percibirá la precitada Oficina será la que establecen las acordadas del Superior Tribunal de Justicia de fecha 11 de abril de 1862, 8 de julio de 1876 y el artículo 33 de la Ley de 10 de febrero de 1896, cuyas comisiones serán aplicadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la citada Ley.

Art. 4.º La Tesorería General de la Nación, las habilitaciones de las clases pasivas y todas las demás reparticiones públicas, entregarán á la Oficina de Crédito Público, una vez que sean solicitados por ella, todos los expedientes de embargos que existan en su poder.

Art. 5.º El servicio de cesiones y venta de sueldos y pensiones en los cuales no exista embargo judicial, continuará haciéndose por las oficinas que actualmente lo practican.

Art. 6.º La Oficina de Crédito Público enviará al fin de cada mes á la Tesorería General una relación que comprenda el monto de las sumas que deba deducir á cada repartición por el concepto de embargos judiciales.

También hará conocer á los habilitados de las reparticiones públicas la relación mensual de los sueldos embargados.

Art. 7.º Siendo excesivo el número de los expedientes de embargos que actualmente se sirven por la Tesorería General, habilitaciones y demás reparticiones públicas y no siendo por consiguiente posible que la Oficina de Crédito Público los reciba á un mismo tiempo, el servicio se continuará haciendo provisoriamente por las mismas oficinas á fin de no perjudicar á los interesados.

Art. 8.º La Oficina de Crédito Público dará cuenta al Ministerio de Hacienda de las comisiones que perciba por concepto de descuentos judiciales incluyéndolas en el estado general de depósitos judiciales que mensualmente rinde á la Contaduría General.

Art. 9.º Comuníquese, publíquese, etc.

CUESTAS.

JUAN CAMPISTEGUY.

Premio Constancia

RESOLUCIÓN SOBRE CÓMPUTO DE SERVICIOS

Ministerio de Guerra y Marina.

Montevideo, 5 de octubre de 1899.

Comunico á V. S. á los efectos de lo que dispone el artículo 512 en su primer inciso y 514 del Código Militar, que han determinado la clase de premio Constancia que corresponde, debe computar en cada caso como servicios los prestados con anterioridad á la fecha de 7 de julio de 1884, en

que entró en vigencia el Código Militar, por haberlo así resuelto el Gobierno, de acuerdo con la Oficina Fiscal en diversos expedientes de esta naturaleza.

PEDRO CALLORDA.

Señor Jefe del Estado Mayor General.

LOS SERVICIOS DE LOS DESERTORES Y REBAJADOS

Estado Mayor General del Ejército.

ÓRDEN GENERAL

Montevideo, 7 de octubre de 1900.

.....
Artículo 2.º A efecto de evitar la causa por la que en muchos casos se hace moroso el despacho de expedientes solicitando premios de Constancia, por lo inútil que resulta el tiempo que se invierte compulsando las listas de revista para cómputos de servicios á los individuos que habiendo desertado han vuelto nuevamente al servicio de las armas, puesto que los que prestaron con anterioridad á aquel delito no son computables, como asimismo, los que habiendo sido clases y rebajados de sus empleos por faltas que afectan el derecho del premio de Constancia, en cuanto implica mala conducta; se previene á los señores Jefes de los Cuerpos del Ejército, tengan muy presente que al hacer las respectivas propuestas en aquel sentido, han de sujetarse estrictamente en todos los casos á lo preceptuado por el Código Militar en los artículos 511 y 522; no haciendo mención de otros servicios respecto á los que hayan sido desertores, que de los que hubiesen prestado desde la fecha de su nuevo ingreso, absteniéndose á la vez de solicitar premio de Constancia para los que habiendo sido clase y rebajados de ella, hubiesen perdido el derecho á dicho beneficio por la calidad de la falta que motivó la deposición.

Antonio Marquez.

Premio Constancia

COMUNICACIÓN DE LAS BAJAS

Estado Mayor General del Ejército.

ÓRDEN GENERAL

Montevideo, 6 de junio de 1903.

.....
Artículo 2.º Los señores Jefes de Cuerpo al dar de baja á individuos de tropa que disfruten Premio de Constancia, solicitarán de este Estado Mayor, el certificado que permita á los agraciados, continuar percibiendo el importe de dicho premio.
.....

Segundo Bazzano.

Acumulación de sueldos en el profesorado

Poder Legislativo.

Montevideo, 11 de julio de 1901.

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º El empleo de profesor de la Universidad puede ejercerse simultáneamente con cualquier otro cargo público, teniendo el empleado la facultad de acumular los sueldos correspondientes á las distintas funciones que ejerza.

Se puede también desempeñar hasta dos cátedras universitarias con goce de los sueldos respectivos.

Para que la acumulación pueda tener lugar en uno y otro caso, será menester que así lo exija el interés de la enseñanza y lo resuelva el Consejo de Instrucción Secundaria y Superior con citación previa y dos terceras partes de votos de los miembros presentes.

Art. 2.º La provisión de las cátedras universitarias se hará por concurso ó por nombramiento directo, según lo determine en cada caso el Consejo de Instrucción Secundaria y Superior.

Para optar por la forma del nombramiento directo serán necesarias, como en el caso del artículo anterior, citación expresa y dos terceras partes de votos de los miembros presentes del Consejo.

Art. 3.º Todas las vacantes que se produzcan en adelante en las cátedras universitarias deberán ser llenadas con ciudadanos naturales ó legales.

Se exceptúan los puestos de catedráticos en las Facultades de Matemáticas y Medicina y de idiomas en la sección de Preparatorios, que á juicio del Consejo de Instrucción Secundaria y Superior, no puedan proveerse ventajosamente sino con profesores extranjeros.

Art. 4.º Deróganse todas las leyes que se opongan á la presente.

Art. 5.º Comuníquese, etc.

Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo, á 11 de julio de 1901.

JOSÉ SAAVEDRA,
Presidente.

Manuel García y Santos,
Secretario-Redactor.

Ministerio de Fomento.

Montevideo, 19 de julio de 1901.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, insértese en el R. N. y publíquese.

CUESTAS.

GREGORIO L. RODRÍGUEZ.

Empleados públicos

RETENCIÓN DE SUELDOS

Fiscalia de Gobierno.

Excmo. señor:

Los artículos 2237 del Código Civil, y 7885 del Código de Procedimientos han dispuesto de una manera terminante que no podrán ser objeto de embargo «*las dos terceras partes* del sueldo de los empleados en servicio público» añadiendo además, que esa regla será aplicable *á los montepíos, á todas las pensiones remuneratorias del Estado y á las pensiones alimenticias forzosas*». En razón de esas prescripciones, fundadas en motivos de orden público, el Poder Ejecutivo, comprendiendo que el llamado descuento ó retención que practican las oficinas dependientes de su autoridad no es otra cosa en el fondo que un verdadero embargo administrativo, por el hecho de constituir éstas en verdaderos garantes de los compromisos contraídos por los particulares á solicitud de los acreedores interesados, ha dispuesto por acuerdo y resoluciones generales de distintas fechas, que las Oficinas Públicas no podrán intervenir en otro descuento que el de la tercera parte de los sueldos asignados á los interesados, declarando en consecuencia por ese hecho las dos terceras partes restantes *libres* de embargo judicial y administrativo en conformidad con las prescripciones terminantes y soberanas de la ley. El ánimo del Poder Ejecutivo ha sido tan decidido al respecto que por una de sus últimas resoluciones, la de fecha 24 de septiembre de 1901, ha hecho extensiva la referida prohibición hasta para los *mandatos judiciales expresos* relativos á cantidad mayor que la indicada.

Juzga, pues, este Ministerio que el Monte de Piedad Nacional, teniendo en cuenta que los artículos del Código Civil y del de Procedimiento, en cuya autoridad se fundan las resoluciones administrativas aludidas, han hecho extensiva también su prescripción á los Montepíos y á todas las pensiones remuneratorias del Estado según se ha expuesto; y dando por

otra parte cumplimiento á las resoluciones vigentes, debe cesar de hacer efectiva toda retención ó descuento que no se encuadre en los términos indicados y proceda en su virtud con las solicitudes acompañadas y las que se agregan.

De la prohibición de hacer descuentos en las dos terceras partes disponibles, sólo pueden exceptuarse los créditos provenientes de vestuarios cuando los acreedores hayan suscripto con el Poder Ejecutivo el contrato actualmente vigente y exhiban ante las oficinas públicas el testimonio de cesión debidamente extendido de acuerdo con sus cláusulas y además los créditos por concepto de pensiones alimenticias forzosas autorizadas por resolución judicial expresa, en razón del carácter peculiar atribuido á estos créditos por el Código Civil y lo dispuesto por el artículo 2.º del decreto 7 de septiembre de 1894.

Se agregan al presente expedientillo, las solicitudes análogas del teniente 1.º don José M. Etchebehere, del guardia marina don Luis Gloroldofosky, de las menores pensionistas Rafaela García y Consolación Ravía y de la viuda pensionista Paula Arriola, sobre las que este Ministerio nada tiene que agregar á lo expuesto, pudiendo V. E. resolverlas, como las que obran en estos antecedentes.

V. E. resolverá, pues, acertadamente.

Montevideo, 15 de abril de 1902.

José María Reyes.

Fiscalía de Hacienda.

Excmo. señor:

Tanto el Poder Ejecutivo como el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia Pleno, han declarado ya que las Oficinas de la Nación no están obligadas á tomar nota y llevar una cuenta á cada empleado, de las cesiones que hagan á terceros de la parte de su sueldo que la ley declara no embargable, y en consecuencia, los jueces no pueden ni deben solicitar ó decretar retenciones ó embargos sobre esa porción, ó sea sobre las dos terceras partes indicadas. Como lo ha manifestado el Fiscal que suscribe en un caso análogo — siempre ha sentido

el más profundo respeto por el cumplimiento de los mandatos judiciales dado lo terminantemente establecido por la ley (Artículo 14 del Código de Procedimiento Civil). — Pero en los casos especiales de que aquí se trata, existe también un mandato ó una resolución de carácter general emanada del Supremo Tribunal de Justicia, que representa genuinamente el Poder Judicial.

En presencia, pues, de resoluciones antagónicas, debe estarse á lo dispuesto por los jueces superiores que han comunicado su resolución al Gobierno para su conocimiento y demás efectos. El Fiscal comprende, Excelentísimo señor, que este procedimiento y esta doctrina son en realidad de trascendental importancia, porque ello equivale á establecer que los tribunales ordinarios nada tienen que hacer ó resolver en eficacia — y en lo que se refiere á las oficinas pagadoras del Estado — con relación á esas dos terceras partes de los sueldos de los empleados; lo que equivale *casi* á declarar administrativamente la inalienabilidad de esa porción de los sueldos. Pero, ¿qué hacer? A grandes males, grandes remedios.

Si se admitiese que los empleados públicos pueden ceder los haberes que reciben de la Nación, en pequeñas cuotas ú porciones á dos, tres, ocho, diez ó más personas y que las Oficinas pagadoras por la simple presentación de las cesiones ó enajenaciones que se hubiesen hecho ó en virtud de comunicaciones de los jueces, debieran atender á todas esas desmembraciones ó divisiones de los sueldos, el ejercicio ó funcionamiento regular de esas oficinas sería imposible como imposible sería también su contabilidad, aumentando de ese modo extraordinario, el número de los interesados ó acreedores.

Por otra parte, y como ha tenido ocasión de manifestarlo el infrascripto en casos análogos, es seriamente peligroso para la marcha de una buena administración pública, el que sus empleados se priven por apremios del momento, de todo lo que la nación les da por los servicios que prestan. El empleado tiene necesariamente en tales casos, que atender negligentemente á sus obligaciones, para buscarse los medios de su existencia diaria en otras fuentes de trabajo ó de actividad.

Entiende el Fiscal de Hacienda, que el Poder Legislativo se ha preocupado de esta materia tan delicada, y sería de desear que cuanto antes, se sancionara una ley justa y previsora, al respecto.

Por ello, y sin perjuicio de que se tengan presentes las salvedades ó excepciones indicadas por el señor Fiscal de Gobierno, el infrascripto se adhiere á las conclusiones que llega el dictamen de este funcionario, de 15 de abril del corriente año, que luce á fojas 9 y siguientes de estos autos.

Montevideo, 8 de agosto de 1902.

E. Garzón.

Ministerio de Guerra y Marina.

Montevideo, 12 de agosto de 1905.

Atentos los dictámenes producidos por los señores fiscales de Gobierno y Hacienda y estando determinado de una manera expresa por los artículos 2337 del Código Civil y 885 del de Procedimiento Civil, que no son embargables las dos terceras partes del sueldo ó asignación que la ley acuerda á los empleados y pensionistas del Estado; y considerando lo dispuesto por el acuerdo de 7 de septiembre de 1894, decreto de 24 de septiembre de 1901 y acuerdo del Superior Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1895,

SE RESUELVE:

Que las oficinas pagadoras del Estado no retengan de los sueldos ó pensiones nada más que la tercera parte cuando exista mandato expreso de Juez, debiendo entregar las dos terceras partes á los interesados. Exceptúase de esta disposición las cuotas por provisión de sastrería y pensiones alimenticias forzosas que deben gravitar sobre las dos terceras partes por su índole especial, y declárase comprendidas en esta resolución las viudas, menores y pensionistas, de acuerdo con el artículo 2337 del Código Civil. Asimismo se dispone que las oficinas pagadoras entreguen á los interesados los fondos que existan retenidos en ellas provenientes de su parte de sueldo no embargable.

CUESTAS.

PEDRO CALLORDA.

Licencias y libertad de viajar para los empleados públicos

Ministerio de Gobierno.

CIRCULAR

Montevideo, 7 de abril de 1903.

Con motivo de aproximarse los días de Semana Santa, el Poder Ejecutivo ha tenido oportunidad de apercibirse de que la disposición vigente prohibiendo á los empleados públicos ausentarse de la capital durante los días festivos contiene restricciones y limitaciones á la libertad personal de los referidos empleados, que no se encuentran justificadas por razones apreciables del mejor servicio público.

En consecuencia el Poder Ejecutivo, á fin de determinar la norma de conducta que debe observar al respecto el personal de las reparticiones públicas, y consultando á la vez las exigencias de la Administración, ha resuelto derogar la disposición enunciada, disponiendo lo siguiente:

1.º Que los empleados de las reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo, durante los días festivos y siempre que previamente no hubiesen recibido orden en contrario de sus respectivos jefes, puedan trasladarse libremente donde lo estimen conveniente, llenando la formalidad de dar siempre aviso á los mismos jefes, del paraje donde se trasladan en los casos de ausentarse de Montevideo y con tal de concurrir el primer día hábil á las horas reglamentarias de oficina.

2.º Quedan exceptuados de la disposición anterior aquellos empleados que la naturaleza de sus funciones exija perentoriamente la permanencia en sus empleos aun en los días festivos.

Lo que llevo á su conocimiento á los efectos consiguientes.
Dios guarde á V. S. muchos años.

JUAN CAMPISTEGUY.

Retiro de los Generales de división y de brigada

DECRETO INTERPRETATIVO DEL CÓDIGO MILITAR

Ministerio de Guerra y Marina.

Montevideo, Febrero 9 de 1904.

Considerando que el Código Militar en su artículo 481 establece que la edad á que se expedirá el retiro forzoso es de 75 años para los tenientes generales, en cuya disposición, por analogía, debe comprenderse á los generales de división y de brigada, ⁽¹⁾ y encontrándose los señores generales de división don Gregorio Castro y don Simón Martínez, comprendidos en esa edad,

El Presidente de la República,

RESUELVE:

Artículo 1.º Acuérdase el retiro militar á dichos señores generales, con el goce del sueldo íntegro que actualmente disfrutan, en atención á que sus servicios alcanzan á más de cuarenta años y de acuerdo con el artículo 477 del mismo Código.

Art. 2.º Comuníquese á quien corresponda.

BATLLE Y ORDÓÑEZ.

EDUARDO VÁZQUEZ.

(1) El artículo 481 del Código Militar tiene una laguna, pues sólo menciona después de los tenientes generales á los coroneles. La interpretación del Poder Ejecutivo que llena esa deficiencia, es perfectamente lógica.

ERRATA

Página 35, nota 2, primera línea.—Dice: «5 de *junio* de 1860»; debe decir: 5 de *julio* de 1860».

Página 102, línea 28.—Dice: «1.^{er} caso: Empleados que han prestado *más* de diez años de servicio»; debe decir: «1.^{er} caso: Empleados que han prestado *menos* de diez años de servicio».

ÍNDICE

ÍNDICE

	<u>Págs.</u>
PRÓLOGO	I
Retiros y Pensiones Militares	1
Retiros	1
Inválidos	4
De la Comisión Calificadora	5
Premios de constancia en el servicio	6
MONTEPÍO	9
De las personas contribuyentes al Montepío Militar	9
De los fondos del Montepío Militar	9
Personas que tienen derecho á las pensiones del Montepío Militar	10
Formalidades requeridas para obtener las pensiones del Montepío Militar	12
Causas por las cuales se pierde el derecho del Montepío Militar	13
Pensiones correspondientes á los años de servicio y modo de percibir las	14
LEY SOBRE INVALIDEZ, VIUEEDAD Y ORFANDAD	17
Ídem.—Término para el reclamo	19
PENSIONISTAS MILITARES, EN EL DESEMPEÑO DE EMPLEOS CIVILES.—Sus sueldos	20
PENSIONES Á VIUDAS Y MENORES MILITARES	21
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY ANTERIOR	22
VIUDAS DE MILITARES.—Ley adicional á las de 12 de Marzo de 1829 y 19 de Marzo de 1835	24
LEY DECLARANDO CON OPCIÓN AL PREMIO QUE ACUERDA LA DE 13 DE MARZO DE 1829, AL QUE HAYA MUERTO Ó MURIERE EN DEFENSA DE LA LEY	26
DERECHOS DE VIUEEDAD, ORFANDAD É INVALIDEZ.—Término para hacerlos valer	27
VIUDAS Y MENORES DE INVÁLIDOS	28
DECRETO SOBRE RESIDENCIA DE LAS VIUDAS DE MILITARES QUE GOZAN SUELDO	30
VIUDAS DE LOS TREINTA Y TRES	31

	Págs.
LEY ACORDANDO PENSIÓN Á LAS VIUDAS, MADRES É HIJOS DE GUARDIAS NACIONALES	32
REFORMA MILITAR. —Certificados del libro-registro de Jefes y oficiales reformados	33
ESTADO MAYOR PASIVO. —Inválidos y viudas.—Disposiciones prescribiendo á los Jefes y Oficiales del Estado Mayor Pasivo su presentación mensual á la revista de comisario.—Orden general....	35
NOTA MINISTERIAL. —Complementaria de la resolución anterior.....	35
DECRETO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE JEFES, OFICIALES VIUDAS É INVÁLIDOS	36
LEY DECLARANDO AÑOS DOBLES EN EL SERVICIO LOS DE LA DEFENSA DE MONTEVIDEO	37
LEY AUMENTANDO EL PREMIO ACORDADO Á LOS TREINTA Y TRES	38
LEYES CONCEDIENDO SUELDO ÍNTEGRO Á LOS GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA	39
JEFES, OFICIALES Y PENSIONISTAS. —Datos sobre desempeños de empleos civiles y sobre defunciones para la anotación del Estado Mayor del Ejército.....	40
MILITARES Y PENSIONISTAS. —Obligación de su revista.....	41
PENSIONISTAS MILITARES. —Sobre residencia en el extranjero.....	42
INTERVENTOR DE PENSIONES MILITARES, CÉDULAS Y PREMIOS	44
JUSTIFICACIÓN DE PENSIONISTAS CIVILES Y MILITARES DEL PASIVO	46
ACLARACIONES Y AMPLIACIONES AL DECRETO ANTERIOR	48
Policianos y Bomberos. —LEY SOBRE PENSIÓN DE INVALIDEZ.....	51
Reglamentación de la ley anterior.....	52
Jubilaciones y Pensiones Escolares. —(<i>Ley Ciganda</i>).....	55
Disposiciones preliminares.....	55
De la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones.....	56
De las jubilaciones.....	58
De las pensiones.....	60
Disposiciones comunes á las jubilaciones y pensiones que autoriza la presente ley.....	63
Disposiciones finales.....	65
LEY COMPLEMENTARIA	65
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL CUERPO DOCENTE	66
NUOVO PLAZO PARA OPTAR Á LA JUBILACIÓN Y PAGO DE CUOTAS	71
CESE Ó RENUNCIA DE EMPLEADO QUE TRAMITA JUBILACIÓN	72
EMPLEADOS ESCOLARES ANTERIORES AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1876	75
NUOVAS MODIFICACIONES DE LA LEY DE JUBILACIONES Y PENSIONES ESCOLARES	76
Retiro, jubilación y pensiones de empleados civiles. —(LEY DE 1838).....	79
Del retiro.....	79
De la jubilación.....	80
Del montepío de ministerio.....	80
Disposiciones generales.....	81

	Págs.
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE 1898.....	82
LEY RELATIVA Á LOS JUBILADOS, SUS VIUDAS Y MENORES.....	84
DECRETO LEY DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1876.—Excluyendo de pensión & los empleados que desde esa fecha ingresen al servicio.....	85
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES.—(<i>Ley Rodríguez</i>).....	86
Disposiciones preliminares.....	86
De la caja de jubilaciones y pensiones civiles.....	88
De las jubilaciones.....	93
De las pensiones.....	96
Disposiciones comunes á las jubilaciones y pensiones que autoriza la presente Ley.....	99
Disposiciones transitorias.....	103
DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES	104
Del Consejo Administrativo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles.....	104
De las jubilaciones.....	111
De las pensiones.....	113
Disposiciones generales.....	114

Apéndice

LEYES Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

IMPUESTOS Y DESCUENTOS SOBRE LOS SUELDOS Y PENSIONES.—Ley creando un impuesto de 20 % sobre varias partidas del Presupuesto...	119
PENSIONES VITALICIAS.—Que las que se acuerdan por grandes servi- cios á la patria no son embargables.....	121
LAS PENSIONES Y EL PRESUPUESTO.—Que los pensionistas y jubilados perciban sus haberes por las planillas generales.....	122
NUOVO IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y PENSIONES.....	123
DESCUENTO DEL 10 % SOBRE LOS SUELDOS Y PENSIONES.—Su alcance á los sueldos de la Junta Económico Administrativa de la Capital	124
MONTEPÍO MILITAR.—La antigüedad y el descuento.....	125
CÉDULAS Y PENSIONES.—Procedimiento para ser otorgada á las vi- das y menores militares.....	126
PENSIONISTA MILITAR.—La nulidad de matrimonio no da derecho á recuperar la pensión de hija soltera.....	128
Confirmación de la resolución anterior.....	129
EMBARGOS DE SUELDOS DE EMPLEADOS.—Forma para la subdivisión en los casos de concurso.....	130
MAESTROS DIPLOMADOS.—Ejercicio perpetuo del profesorado.....	134
EMPLEADOS PÚBLICOS.—Acefalias, diferencias de sueldos, suspensiones	135
IMPUESTO DE 5 % SOBRE LOS SUELDOS Y PENSIONES LÍQUIDAS.—Artículo 7.º de la ley de 18 de Octubre de 1898, creando la Deuda de Cer- tificadas de Tesorería.....	136

	<u>Págs</u>
EMBARGOS DE EMPLEADOS Y PENSIONISTAS.—Intervención de la Oficina	
de Crédito Público	137
PREMIO CONSTANCIA.—Resolución sobre cómputo de servicios.....	138
Ídem.— Los servicios de los desertores y rebajados	139
Ídem.— Comunicación de las bajas.....	140
ACUMULACIÓN DE SUELDOS EN EL PROFESORADO.....	140
EMPLEADOS PÚBLICOS.—Retención de sueldos.....	142
LICENCIAS Y LIBERTAD DE VIAJAR PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS	146
RETIRO DE LOS GENERALES DE DIVISIÓN Y DE BRIGADA.....	147
ERRATA.....	149

Montevideo.—A. BARREIRO Y RAMOS, editor

MANUALES BARREIRO

PUBLICADOS BAJO LA DIRECCIÓN

DE

BENJAMÍN FERNÁNDEZ Y MEDINA

PUBLICADOS

Pensiones, jubilaciones y retiros, por B. Fernández y Medina. 1 tomo de 164 páginas.

EN PRENSA

Literatura Uruguaya.—*La Constitución*, comentada y complementada con los reglamentos parlamentarios y leyes interpretativas.

EN PREPARACIÓN

Literatura Sudamericana.—*Geología del Uruguay*.—*Topografía práctica*.—*Manual del Propietario*.—*Metorología*.—*Geografía comercial*.—*Industrias de la leche*.—*Subproductos industriales*.—*Crédito Agrícola*.—*Economía política*.—*Medicina e higiene prácticas*.—*Manual del Comerciante*.—*Guía del inmigrante en el Uruguay*.—*Guía del turista*.—*Derecho Constitucional*.—*Derecho Administrativo*.—*Derecho Comercial*.—*Derecho Civil*.—*Derecho Internacional público*.—*Derecho Internacional privado*.—*Pedagogía*.—*Sociedades Cooperativas*.—*Contabilidad*.—*Táctica*.—*La casa moderna*.—*Cria lucrativa de aves, etc.*.—*Conocimientos útiles* (1ª serie).—*Floricultura*.—*Cocina económica*.—*Intereses y des-cuentos*.—*Sports modernos*.—*Higiene de la madre y del hijo*.—*Fruticultura*.—*Arboricultura*.

Obras de Benjamín Fernández y Medina

PRECIO

Charamuscas. —Tipos y escenas del Uruguay. (Agotada).	
Revista Uruguaya. —(Agotada).	
Cuentos del pago. —1 volumen	\$ 0.80
Camperas y serranas. —(Poesía). 1 volumen.....	» 0.80
Antología Uruguaya. —(Prosa). 1 volumen.....	» 1.00
Uruguay. —Colección de cuentos de autores uruguayos. 1 volumen.....	» 1.00
Diálogos, monólogos y otras composiciones (para recitar).—1. ^a serie (agotada).	
2. ^a serie. 1 volumen.....	» 1.00
La beneficencia en el Uruguay. —Monografía. (Agotada).	
La Imprenta y la prensa en el Uruguay. — 1 volumen.....	» 0.50
El comercio en el Uruguay, desde sus comienzos hasta la erección del Consulado. —1 folleto.....	» 0.20
Las Huelgas. —1 folleto.....	» 0.20
Ley Orgánica de las Juntas E. Administrativas. —Con notas, concordancias, antecedentes, leyes y disposiciones complementarias y ordenanzas municipales vigentes. 2 volúmenes.....	» 6.00

EN PRENSA

Proclamas, discursos, poesías y diversos escritos de Melchor Pacheco y Obes, con una biografía.

EN PREPARACIÓN

Felipe Contucí y su misión en el Río de la Plata (según documentos inéditos).—**Folklore del Uruguay:** (cuentos, poesías, supersticiones, refranes, etc.).—**Proyecto de Código de Policía.**—**Manual de la literatura uruguaya.**

LEY ORGÁNICA
DE LAS
Juntas Económico-Administrativas
DE LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Con notas, concordancias, antecedentes, leyes y disposiciones
complementarias y ordenanzas municipales vigentes

POR

BENJAMÍN FERNÁNDEZ Y MEDINA

Dos volúmenes de XXII-576 y 709 páginas de 15 x 22
encuadrados en tela

\$ 6.00 (30 francos)

NOTICIA DE LA OBRA.—La nueva obra del señor Benjamín Fernández y Medina que hemos editado, viene á dar toda su importancia á la *ley municipal del Uruguay*, que con el título de *Ley Orgánica de las Juntas Económico-Administrativas*, fué promulgada el 10 de Julio de 1903.

En un interesante prólogo, refiere el autor el origen de esta Ley, en una convención de representantes de Juntas y personas eminentes empeñadas en colaborar en la organización de los municipios; recuerda todos los proyectos y tentativas anteriores para llegar á ese desiderátum nacional; traza brevemente la historia de los Cabildos coloniales y la institución de las Juntas por la Asamblea Constituyente, el desarrollo de ellas hasta la actualidad, y señala las facultades y régimen que viene á consagrar la ley de 1903.

El texto de la ley, confrontado prolijamente con los originales y exento de todo error, está ilustrado con notas, concordancias y comentarios que facilitan su inteligencia y aplicación, dando á las Juntas indicaciones utilísimas para organizar sus servicios y desenvolver su acción.

Este trabajo, que por sí solo daría mérito suficiente á la obra, es completado con la adición de todas las leyes y disposiciones que tienen relación con la misión y facultades de las Juntas, y con ordenanzas vigentes.

Un índice cronológico y otro analítico alfabético, permiten la consulta rápida de cualquier asunto.

En venta en la casa editora:

LIBRERÍA NACIONAL
DE A. BARREIRO Y RAMOS

Calle 25 de Mayo esq. Cámaras-Montevideo

y en todas las librerías de la República